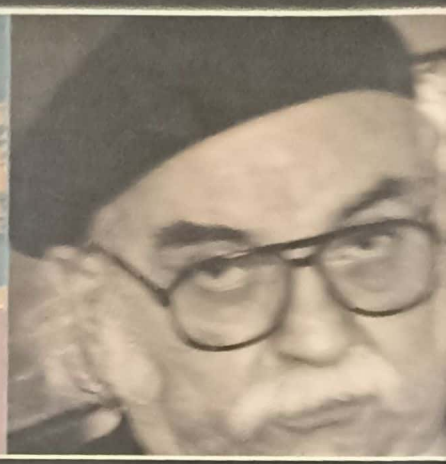
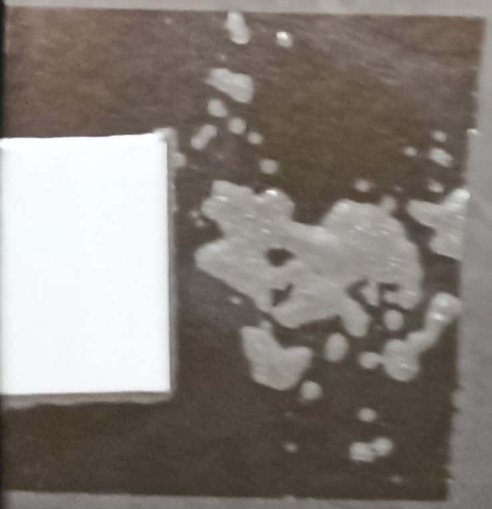


MANUEL CABALLERO

Revolución, reacción y falsificación



ALFADIL EDICIONES

MANUEL CABALLERO

Es Profesor Titular (jubilado) de la Universidad Central de Venezuela, de cuya Escuela de Historia fue Director. Estudiante, vivió varios años en París y también en Roma. PhD por la Universidad de Londres, su tesis doctoral lo convirtió en primer venezolano publicado por la Universidad de Cambridge en los 450 años de su editorial (dos ediciones). Ha sido Profesor contratado por la Universidad de Nápoles y conferencista en varias universidades europeas (Oxford, Sorbonne) y de EEUU, como *Fulbright Visiting Scholar*. Obtuvo en 1979 el Premio Nacional de Periodismo; en 1994 el Premio Nacional de Historia, y en 2001 el Premio Bienal Simón Bolívar, otorgado por la universidad del mismo nombre en reconocimiento a su trayectoria universitaria.

Ha sido columnista permanente de *El Nacional* (1965-1991), *El Diario de Caracas* (1992-1995) y hoy de *El Universal*. Es autor y co-autor de más de cincuenta libros sobre historia, política y literatura, entre los cuales destacan *La Pasión de Comprender*, 1983; *Latin America and the KOMINTERN 1919-1943* (Cambridge University Press), 1986; *El orgullo de leer*, 1988; *Gómez el tirano liberal*, 1993 (Premio Nacional de Historia); *Ni Dios ni Federación*, 1995; *De la pequeña Venecia a la Gran Venezuela*, 1997, y *Las crisis de la Venezuela Contemporánea*, 1998.

COLECCIÓN DIRIGIDA POR LEONARDO MILLA

1ª EDICIÓN: OCTUBRE DE 2002
TIRAJE: 1.500 EJEMPLARES

© ALFADIL EDICIONES, 2002

ALFA GRUPO EDITORIAL
APARTADO 50.304. CARACAS 1050, VENEZUELA
TELF.: [+58-2] 762.30.36 / FAX: [+58-2] 762.02.10
E-MAIL: CONTACTO@ALFAGRUPO.COM
WWW.ALFAGRUPO.COM

ISBN: 980-354-109-9
DEPÓSITO LEGAL: LF50420023202126

DISEÑO DE COLECCIÓN Y DE CUBIERTA: ULISES MILLA
DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN: LEILA MACOR

IMPRESO EN VENEZUELA POR EDITORIAL MELVIN
PRINTED IN VENEZUELA

Revolución reacción y falsificación

ALFADIL EDICIONES

ÍNDICE

La partera de la historia 7
Conciencia nacional y conciencia histórica 13
La historia de la independencia como mitología 21
Miranda el afrancesado 25
La «autocracia» de Guzmán Blanco 41
De la región a la nación 51
Juan Vicente Gómez y la Iglesia 65
Los positivistas en Venezuela 73
Ejército y sociedad: la experiencia venezolana 77
Los sesenta mejores años en la historia de la República 89
Apuntes sobre liderazgo e historia 97
Cuatro apuntes sobre los partidos 103
¿Fin de los partidos y de las ideologías? 125
Revolución, reacción y Constitución 129
Las transiciones en la historia de Venezuela 145
El mito del orden en la historia de Venezuela 153
¿La gran revolución de fin de siglo? 163
Carta a un joven desilusionado que detesta la democracia ... 175
¿Un siglo perdido, el veinte? 189
Dos no celebradas fiestas nacionales 195
Suceso y proceso 199
La falsificación de la historia, arma totalitaria 203

LA PARTERA DE LA HISTORIA

Hace muchos años, cuando yo comenzaba a estudiar bachillerato, había en la clase un joven comunista que nos tenía impresionados con sus conocimientos políticos. Cuando alguien intentaba enfrentarlo, lo aplastaba con un discurso erudito más o menos de este tenor: «Lo que pasa es que ustedes no saben que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y por lo tanto, ignoran también qué hacer con su enfermedad infantil del izquierdismo. Es necesario, sépanlo ustedes, acabar con el desarrollo del capitalismo en Rusia para derrocar El Capital; eso sólo se puede hacer por medio de la revolución proletaria y el renegado Kaustky; sin dar un paso adelante y dos pasos atrás, pagando el impuesto en especie al estado y la revolución, de tal manera que se nos revele qué es un manifiesto comunista, y logremos al fin descubrir el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado».

Semejante despliegue de conocimientos solía dejarnos mudos. Sólo andando el tiempo nos enteraríamos de que aquel despierto muchacho se había leído apenas los títulos de algunos de los libros más conocidos de Marx, Lenin y Engels, pero lograba en-

hebrar con ellos un discurso coherente, aun cuando escaso de contenido, por no decir vacío. Algunos estudiantes católicos intentaron hacer otro tanto, pero tropezaban con el insalvable obstáculo de que el título de las encíclicas papales estaba siempre en latín, y no era fácil conmover a nadie, y mucho menos convencerlo, diciéndole que si *Rerum Novarum* y que si *Quadragesimo Anno*.

No hay que atribuir aquello ni a nuestra ignorancia de liceístas ni a lo que Pío XII consideraba la «intrínseca perversidad» de los comunistas. Esa es una manera de discutir más corriente de lo que se cree, y que es particularmente popular en tierra latinoamericana.

Los ejemplos son demasiado abundantes para que ni siquiera su sola enumeración pueda caber en un artículo de las dimensiones del nuestro.

Podríamos estar hablando de esto hasta agotar nuestro espacio, y todavía quedarnos cortos. Por esta vez quisiéramos referirnos a una oración (empleamos la palabra intencionalmente, por todas sus connotaciones semánticas) caletreada con aires de *Kyrie, Eleyson* por algunos monseñores Lefebvre del marxismo latinoamericano. Se trata de aquella proposición de Engels según la cual «la violencia es la partera de la historia».

Como la frase es bonita y bien enhebrada, su belleza formal releva de todo intento de análisis, aun en aquellos fierabrás revolucionarios que se la pasan echando pestes de los «intelectuales pequeño-burgueses». Por lo general, a eso se responde con una frase aparentemente opuesta pero que en esencia es la misma: es lo que dicen, con más hipocresía que santidad, algunos católicos, a saber que no es la violencia sino el amor quien hace de comadrona de la historia. Los marxistas recibieron siempre esta respuesta con beneplácito, pues era la preferida de los curas trabucaires cuando bendecían las armas de los tiranos que salían a exterminar a sangre y fuego a los «partidarios de la violencia», por mucho que fuese, ésta, verbal las más de las veces.

Nuestro propósito en esta página no es tanto aceptar o rebatir esa frase como analizarla en sus contenidos originales. Ella encierra tres ideas: la de violencia, la de parto y la de historia. Al estar unidas por el verbo *ser*, se presentan como una proposición dogmática, típicamente ideológica. O sea que lo que podía haber sido una simple constatación se transforma en ley del desarrollo histórico.

El propio Engels corrigió una frase de iguales características que Marx y él mismo habían escrito en el *Manifiesto Comunista*: «la lucha de clases no es el motor de la historia», decía esa aclaratoria, «sino que *lo ha sido*». Con eso se cubría las espaldas no tanto frente a quienes pudiesen reprocharle que creyese en el «fin de la historia» (cosa que no le inquietaba, entre otras cosas por ser cierto), sino porque en esos momentos estaba deslumbrado por lo que sostenían algunos antropólogos, a saber que hubo un momento en que no existía división social en clases («comunismo primitivo») y sin embargo, la historia seguía su curso.

Aun si se acepta que la historia tiene un sentido (cosa de la cual hoy nadie está muy seguro) e incluso que sólo Dios y algunos hombres lo conocen (lo cual es más difícil de aceptar), queda el hecho de que ni el término historia ni el término violencia tienen un solo significado.

Considerar que la historia está hecha sólo de guerras y batallas, es una posición tan reaccionaria y sobre todo tan insostenible como la que pretenda que sólo está hecha de frases altisonantes o de ideas profundas.

Todo cambio es, de una u otra forma, violencia, aunque sólo fuera porque produce naturalmente resistencia. Pero pretender que esa «violencia» signifique solamente plomo y sangre, es olvidar que algunos de los más grandes cambios producidos en los últimos cien años se deben a la violencia puramente verbal (o en todo caso ideal) de tres pensadores solitarios a quienes Madariaga llamó alguna vez «los tres apóstoles judíos del Evangelio moder-

no» (hoy por cierto enfrentados cada día más al libre examen): Marx, Freud y Einstein.

Incluso llevando esto al solo terreno de la historia social y política, hay que tomar en cuenta que uno de los más grandes cambios sociales, una de las más grandes revoluciones de este siglo, se produjo sin derramamiento de sangre en cantidades estadísticas.

A saber, el coetáneo derrumbe del imperio militar y político soviético en Europa, y contemporáneamente, el derrumbe del imperio económico americano en Asia. En el primer caso, Occidente puso de rodillas al comunismo ruso; en el segundo, Japón lo hizo con el capitalismo americano. Cierto, esas cosas nunca son permanentes: ahora el Japón está estancado, y si bien lentamente, la economía norteamericana ha dado algunos signos de recuperación, mientras aparece otro gigante en escena: la Unión Europea. Pero estos cambios no hacen sino reforzar nuestro argumento: todos ellos se han producido, en lo fundamental, sin violencia.

Claro que la vieja retórica se impone siempre para ocultar los hechos. Así, el derrumbe del régimen comunista en Checoslovaquia se inició con lo que la prensa llamó «la masacre» de San Venceslas, pese a que allí no hubo un solo muerto.

El tercer elemento de la frase es la de «parto». Al decir que la violencia es la «partera de la historia», quienes la citan a troche y moche se olvidan de que el papel de la partera en el nacimiento de un niño es accesorio. No solamente existen culturas donde la comadrona es prácticamente desconocida, sino que ciertas modernísimas técnicas del llamado parto psico-profiláctico tienden a hacerla obsoleta, pero sobre todo, a hacer innecesaria y primitiva la violencia en el alumbramiento. Sin embargo, al emplear el símil, quienes lo hacen actúan mucho menos inocentemente de cuanto se podría pensar.

Si, para seguir con la metáfora engelsiana, el niño es la historia, atribuir su existencia a la partera es tan tonto como asombrarse de lo casual que resulta que todos los grandes hombres tengan nombres de calles y avenidas.

No es de creer que quienes invocan a esa demiúrgica comadrona hayan olvidado que su rol es exterior y accesorio y que en el comienzo de esa vida, de esa historia, estuvo un acto de amor.

Lo que sucede es que en la frase está hoy presente el voluntarismo leninista (que en el caso venezolano se viste con el amplísimo capote militar del Libertador). La historia es lo secundario, lo importante es la violencia. O lo que es lo mismo, el niño no tiene importancia alguna en un nacimiento (y ni siquiera la madre): lo que importa es la violencia.

Es más que comprensible que esa frase se esté repitiendo en ciertos ambientes venezolanos (por increíble que pudiese parecer, intelectuales) con tanta frecuencia después del pronunciamiento militar del 4 de febrero de 1992. Es una manera de halagar a quien se propone como partero, y, como esa no es profesión de machos, se la ennoblece haciéndoles creer que están trayendo al mundo, nada menos que a la historia. Es una manera de halagar a la vez el primitivismo y el culto a la violencia. Poco importa que esta última se haya revelado, en Venezuela, terca y desoladoramente ineficaz en siglo y medio de historia republicana: ella exime a muchos de la acción, en espera de que otros actúen, le «echen bolas», que ya después se le «echará cerebro» para convertirse, Dios mediante, en la eminencia gris de alguna sociedad de mutuo auxilio de las comadronas.

CONCIENCIA NACIONAL Y CONCIENCIA HISTÓRICA

Comenzaremos por confesar que no nos produce ningún entusiasmo discutir sobre el tema de la «identidad» nacional. Ese término lleva inmediatamente a un debate de tipo filosófico sobre la relación entre lo fijo y lo cambiante, entre lo uno y lo diverso, y las más de las veces se acantona en el terreno de la especulación pura.

Pero sobre todo, nos produce desconfianza el que por lo general se plantee como una pregunta con respuesta incorporada: cuando se habla de «identidad nacional», en el caso de nuestro país, es porque se trata de trazar, de una vez y para siempre, los rasgos de la «Venezuela eterna».

En lo que nos concierne, rechazamos la existencia de caracteres nacionales fijos e inamovibles, y nos proponemos demostrar, estudiando el caso venezolano, que la nación es una creación histórica y en modo alguno inmanente. Y es sobre esa base que también nos proponemos hablar de «conciencia nacional», es decir, de una creación, una realidad histórica y por lo tanto analizable como tal.

En las líneas que siguen, buscamos estudiar cómo aparece ella, cuáles son sus rasgos distintivos. Para ello, es necesario situar-

se en el momento presente, para establecer cuáles serían los elementos que forman (caso de existir, y en el caso de Venezuela creemos que exista) esa conciencia nacional.

Atenderemos sucesivamente a sus aspectos más destacados, y cómo ellos han ido conformando progresivamente esa conciencia: las grandes sacudidas históricas, el desarrollo del conocimiento, las opciones políticas y la anuencia popular. Estos planteamientos serán desarrollados en dos partes: en la primera, trataremos de los aspectos «culturales» del asunto; en el segundo de sus aspectos políticos.

En esa división lo primero remite sobre todo a la unidad: son los elementos constitutivos de la nación que nadie discute hoy; lo segundo a la diversidad: proviene de una voluntad política, sea individual o colectiva, no siempre unánime, aunque sí dominante.

En este intento de análisis, faltan dos elementos que hoy están siempre presentes hasta en la conversación corriente. Para decirlo en términos simples, faltan el Estado y el mercado. Si se excluye un análisis detallado de ellos es por la avasallante presencia del primero y por la ausencia, en la mayor parte del proceso, del segundo.

No se trata de una escogencia caprichosa: tal ausencia y tal presencia hacen de la nación venezolana una formación particular, que la diferencia de otros procesos en el mundo, aunque no necesariamente en América Latina. En primer lugar, en el terreno de la economía, la teoría y la práctica burguesas (i.e. nacionales) se orientan hacia la tentativa de crear un mercado nacional: eso no se encontrará expresado en Venezuela durante una parte muy larga de su historia.

Y cuanto se pueda incluir en un pensamiento y una praxis de ese tipo, será producto de un planteamiento y una voluntad políticos, no del juego de fuerzas inconscientes, de quién sabe qué «mano invisible».

En efecto, el primer atisbo de la búsqueda por crear un mercado nacional tal vez se encuentre en la «caminomanía» de los liberales y los conservadores del siglo pasado; y en la ultracentralización del Estado a partir de Gómez.

Por otra parte, la influencia del Estado ha sido tal desde el momento de su creación efectiva bajo el gomecismo, que aquí se puede aplicar con ciertas matizaciones aquella fórmula de Georges Burdeau en su estudios sobre el Estado: que en las naciones europeas el Estado es un producto de la nación, paulatina presencia que se había venido formando al paso de las sucesivas generaciones; en otros países (y es el caso de Venezuela) el Estado ha formado la Nación.

I. De ser descubierto a descubrirse

A. La gran sacudida histórica

Venezuela es, en primer lugar, una invención de los conquistadores. Quienes habitaban nuestro territorio antes de su llegada, no tenían (o por lo menos es poco probable que tuviesen), una memoria común y ni siquiera la sensación, mucho menos la conciencia, de habitar un territorio común. Como se sabe además, los diversos territorios que hoy forman Venezuela no vinieron a ser unificados sino en 1777, por decisión del rey Carlos III de Borbón.

¿Qué nos queda hoy, como parte de nuestra conciencia nacional, de aquellos primeros tiempos, antes de la formación de la Capitanía General? Hay por lo menos dos elementos cuya continuidad se distingue a través de todos los cambios y mutaciones que se han sucedido, incluso en ellos mismos. A decir verdad, es uno y mismo: la cultura hispánica, en dos de sus manifestaciones más poderosas o más evidentes: el idioma español y la religión católica. Lo significativo es que ambos fueron introducidos a la fuerza, y sin

embargo, es el primero y posiblemente más fuerte elemento de esa conciencia nacional que va a aparecer luego, cuando se vaya formando la nación.

¿Dos elementos extranjeros, el idioma y la religión, y peor aún, incrustados en nuestra sociedad a sangre y fuego? Así es, pero además con mucha razón, muy explicable por la historia misma: era la primera vez que, en todo nuestro actual territorio, se hablaba una lengua común y se profesaba una creencia común. De modo que quienes pretendan, en el planteamiento de la idea de «identidad nacional», poner el acento sobre lo perdurable, lo «eterno», tienen que rendirse a la evidencia, y es que lo más duradero, lo más «sí-mismo» de nuestra «identidad» y de nuestra conciencia nacionales, es producto de un cambio, de una gran sacudida histórica; no estuvo allí «desde siempre» sino a partir de determinado momento.

B. El conocimiento geográfico

Cuando, en el día de hoy, a un venezolano se le pide describir su país, lo primero que se le viene en mente es el mapa que conocemos: esa forma de mujer de amplio pecho y una sola pata (hoy reforzada con una hipotética prótesis, la «zona en reclamación») que baila con la cara lanzada hacia el oeste (la península de Paraguaná) y el cuerpo arrastrado hacia el este por el curso de unos ríos que en su inmensa mayoría van a dar al Orinoco.

Nos viene de manera tan natural dibujar esa figura en nuestra mente, que igualmente tendemos a pensar que eso siempre ha sido así. Pero no: la concreción de esa forma, la del mapa político y territorial de Venezuela, se ha venido formando a través de los siglos.

Sin pretender ni mucho menos agotar el tema, el abanico de opciones, podemos señalar dos elementos de muchísima importancia: la búsqueda de nuevos territorios y la generalización de una cierta manera de ver a Venezuela como una concreción formal.

Lo primero viene con la Conquista: se trata, claro está, de incorporar nuevos territorios y nuevos pueblos al dominio de la Corona española, pero esas nuevas tierras deben ser descritas, para que no sean lo que algunos cronistas parecían anunciar: producto de la mente calenturienta de los conquistadores.

De modo que si, en los manuales, el Descubrimiento precede a la Conquista, la recíproca también es verdadera y el descubrimiento de una nueva geografía sucede a la Conquista. Pero eso no se detendrá ahí, ni los descubrimientos han sido sólo cosa de la búsqueda de un territorio y un pueblo por someter a dominio.

Hay además la inquietud pura o fundamentalmente científica, cuya importancia no ha sido nada menor que aquella: la presencia de Humboldt en la historia de Venezuela como testigo inapelable sólo es superada, entre los historiógrafos, por la del Libertador. En todo caso, ello ha contribuido a la construcción de lo que podría llamarse el material simbólico de la conciencia nacional, o al menos del territorio: es Guayana, los Andes, los Llanos, expresiones y figuras que le hablan a todos los venezolanos sin necesidad de explicaciones o precisiones suplementarias.

Pero por muchos y muy importantes que hayan sido esos aportes, tal vez no hubiesen pasado de ser adorno de polvorientas bibliotecas y archivos, si no hubiesen sido difundidas. Es aquí donde se muestra la importancia de la educación (y particularmente la enseñanza de la geografía) como el sedimento de la conciencia nacional. Es eso lo que arriba llamamos «una cierta manera de ver a Venezuela como una concreción formal».

Todo el que haya pasado por la escuela primaria, con todas las deficiencias que se le conocen hoy, tiene grabado en su mente el mapa de Venezuela, su situación al Norte de la América del Sur, y su forma de bailarín descoyuntado a la Toulouse-Lautrec.

Y eso también ha sido un proceso, una larga sucesión cronológica, y sería una ingenuidad creer que todos los venezolanos que

han poblado el territorio desde 1830 han tenido una visión igual del mapa de Venezuela. Y no podían tenerlo por la sencilla razón de que no existía: estaba en formación.

II. La voluntad de ser una nación

A. Del Estado...

Podría parecer un exabrupto decir que sólo en el siglo veinte el venezolano exhibe una conciencia nacional: ¿y los grandes sucesos de la guerra de independencia? Esos procesos pueden ser considerados, dentro de la óptica liberal que los presidió, como una lucha por la libertad y la igualdad, pero no había la idea de construir una nación tal y como la concebimos actualmente.

En la *élite*, se sucedieron varias formas de una conciencia que podría llamarse «nacional», pero no era en manera alguna una conciencia nacional *venezolana*. En efecto, en las primeras de cambio, después de la invasión de España por Napoleón, se usó mucho la designación de «español americano»: quienes la usaban pretendían ejercer un derecho a la autonomía no muy diferente del que podían reclamar para sí los cabildos españoles.

Luego fue borrado lo de «español», y los insurrectos se llamaban simplemente «americanos» y, si acaso, «patriotas»: el nombre de Venezuela no aparecía mucho, como no fuese integrada en el contexto de lo que primero era aquella expresión general y luego se particularizó en un experimento que no llegó a una década: la «República de Colombia». Por diez años, fuimos entonces colombianos, como lo eran por igual los neogranadinos y los quiteños. Es con la desmembración de Colombia en 1830, que comienza a formarse la idea de una nación venezolana.

Pero es necesario aclarar que ella se fundó como entidad autónoma, como lo señaló muy bien Rufino Blanco Fombona, *contrariando la voluntad del Libertador*. Con lo cual su designación como Padre de la Patria es un disparate, si esa «patria» es Venezuela.

Pero la integración del territorio era muy precaria, con una geografía difícil, un territorio inmenso y una población muy escasa, desmigajada y poco comunicada. Es por esa razón que, en toda nuestra historia, no ha habido un vocablo tan feliz como ese de «federación». Él resumía no sólo el anhelo de autogobierno de los pueblos, sino que retrataba una realidad: Venezuela era una federación de hecho antes de serlo de derecho.

En esas condiciones, para crear un Estado se necesitaban dos elementos, por lo general contradictorios: o la voluntad de los distintos Estados federales de crear una entidad nacional o, si se prefiere, «supra-provincial», o una centralización forzada en el estilo jacobino y por supuesto también del Libertador. El asunto se resolvió apelando a lo último: la unidad nacional se confundió con su centralización, y a partir de allí, con esas características, se fundó el Estado venezolano.

Poner por obra algo que enfrentaba las ancestrales tendencias del venezolano, sólo parecía posible por la fuerza. Que eso fuera cierto o falso, es hoy una discusión puramente académica: el caso es que la creación del Estado venezolano fue obra de un poder absoluto, un despotismo como nunca había conocido el país y muy pocos en Iberoamérica: el de Juan Vicente Gómez. Ese Estado centralizado y centralista tuvo una columna vertebral, alrededor de la cual, y en principio subordinadas a ella, se fueron creando las diversas instituciones que ha formado el Estado venezolano. Era el ejército venezolano. Un ejército que ha tenido la característica de no pelear jamás fuera de las fronteras del país, de no guerrear con los vecinos.

Con lo que el mantenimiento de la unidad nacional se concebía menos como compactación frente a un enemigo extranjero que como el arma fundamental para combatir las tendencias centrífugas, los particularismos regionales, los caudillos.

B. ...A la nación

Sin embargo, faltaba un elemento para que la conciencia nacional llegase a ser tal, y no un asunto puramente estatal. Las características del Estado nuevamente creado, y la súbita y grandiosa riqueza petrolera, le permitieron durante mucho tiempo aislarse de la sociedad que dominaba; el concepto de nación, la conciencia nacional, era algo que si había entrado en la mentalidad venezolana, no podía saberse.

Pero las cosas comenzaron a cambiar después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Es a partir de ese momento cuando temas tan aparentemente obvios como el de las fronteras del país, comenzaron a ser discutidos públicamente.

Es así como, en 1941, cuando se firmó el tratado de límites con Colombia, el hecho fue discutido a veces con acritud, y en todo caso se hizo un tema nacional. A partir de allí, la intangibilidad e inalienabilidad del territorio se hizo no solamente letra constitucional, sino el remate de todo un proceso de formación de la conciencia nacional. Es decir, que la nación comenzó a imponerse, o por lo menos a ser más importante en la mentalidad popular, que el Estado.

Esa es la situación que nos permite hoy hablar del Estado-nación venezolano. Proceso por lo demás incompleto, porque entre otras cosas, nunca acaba. Dicho en otros términos, que una verdadera conciencia nacional sólo es tal cuando lo es. Esta aparente tautología se aclara si decimos que la conciencia nacional en las *élites* puede ser poco significativa y en todo caso es más débil si no encuentra fundamento en la calle.

Porque la conciencia nacional no es sólo la seguridad de tener una identidad propia, sino también y sobre todo la conciencia de que la nación somos todos. Mientras todo se remita a «ellos» (los gobernantes) puede haber Estado, pero no habrá nación. La verdadera nación se completa con la democracia.

LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA COMO MITOLOGÍA

La mitología de la guerra de independencia en la Venezuela republicana posterior a 1830 y hasta nuestros días tiene caracteres menos políticos que fundacionales: los guerreros de la independencia, Bolívar en primer lugar, no crearon una nación ni un Estado, sino una cultura; no son guerreros victoriosos, sino nuestros primeros padres; no son hombres prestigiosos por sus hechos de armas y sus ideas, y ni siquiera son mitos, sino semidioses (y en el caso de Bolívar, un solo Dios). Trataremos en una primera parte de definir cuáles son los rasgos de esa mitología; y en una segunda, sus momentos más resaltantes.

I

Hay tres fases dominantes en la expansión de la mitología revolucionaria en la sociedad venezolana: el prestigio real de los libertadores, la mitología popular y el culto oficial.

En primer lugar, los libertadores venezolanos, una vez eliminada físicamente en el turbión de la Guerra a Muerte la *élite* social e intelectual, provinieron de los más bajos estratos de la sociedad:

el mejor ejemplo posible es José Antonio Páez, de quien algún historiador mostraba el tremendo y súbito ascenso social y político diciendo que «había saltado de lavarle las patas al zambo Manuelote [capataz del hato donde trabajó en su juventud] a la Presidencia de la República». El Libertador, que no pertenecía a esta clase sino que provenía de la antigua oligarquía «criolla», compensaba eso con el hecho de ser, además de un guerrero, un líder carismático como pocos en la historia de nuestro continente: Sarmiento, en su *Facundo*, le encuentra comparación, en ese terreno, sólo con José Gervasio Artigas, el héroe uruguayo. Las manifestaciones delirantes con que se le recibió en Caracas en 1827 dan la pauta del espontáneo fervor popular hacia su figura.

Pero a ese prestigio real, y sea esto dicho en segundo lugar, unen los héroes de la independencia (y en primerísimo y casi solitario lugar Bolívar) su carácter de mitos populares. En una encuesta realizada en 1997 por una televisora nacional con motivo del 24 de julio (natalicio de Bolívar) se reveló que la determinante mayoría de los encuestados no sabían qué cosa se conmemoraba ese día. Y una encuesta más seria, hecha algunos años antes, revelaba que en las clases populares se combinaba la adoración por Bolívar con el desconocimiento de quién fuese en realidad: muchos lo creían un santo más de la Iglesia católica, apostólica y romana, otros un dios él mismo; y otros, acaso los menos, no pasaban de decir que había sido «un gran hombre» sin decir por qué lo fuese el pequeño guerrero.

Finalmente hay el culto oficial de los libertadores. Esa es una situación con partes iguales de espontaneidad y de inducción: los libertadores se admiraban a sí mismos por la gesta de su juventud, y concentraban esa admiración en quien los convirtió, de salteadores de caminos, en Padres de la Patria. Y en cuanto a lo de inducción, los gobernantes venezolanos han seguido, incluso *avant la lettre*, el consejo de Laureano Vallenilla Lanz a los historiadores argentinos: argentinizar «por el corazón» a las masas recién venidas, inculcándoles la religión patriótica.

II

Sobre la base del prestigio real de los libertadores y de su transformación en mitos populares, los gobernantes venezolanos han ido formando la religión patriótica, en un país menos indiferente que indolente en materia religiosa. El culto a los libertadores, pero sobre todo a Bolívar, se ha transformado en un fundamentalismo intolerante y fanático: nadie en su sano juicio, sobre todo si tiene aspiraciones políticas, se atrevería a decir que el Libertador se equivocó alguna vez en su larga carrera pública. Del desarrollo de este culto oficial señalaremos aquí varios momentos especialmente significativos.

1842. Está signado por la repatriación de los restos del Libertador a Caracas y sus impresionantes honras fúnebres. Por un lado, simbolizaba la reconciliación entre Páez y Bolívar, rematado todo eso con una tendencia que venía en Páez de mucho antes y que quedará plasmada en su *Autobiografía*: su deseo de parecerse a Bolívar, de actuar como Bolívar, de ser visto como «el segundo Libertador».

1883. Aquí arranca claramente el culto oficial a los libertadores y sobre todo a Bolívar: son los fastos del centenario de su nacimiento; es el bautismo institucional de la religión bolivariana. Y por aquello de *Cuius regio, eius religio*, es también la exaltación del gobernante, de Guzmán Blanco, como un hombre con los quilates del Libertador: la medalla conmemorativa presentaba en relieve los perfiles del Libertador y del Ilustre Americano.

1930. En este año se conmemoraban cien años de la muerte del Libertador, y es normal que su culto alcanzara extremos paroxísticos; pero sería un error creer que de allí «arranca» una nueva

etapa de la religión patriótica, pues su desarrollo impetuoso y avasallante es muy anterior. Y lo es porque muchas de las ideas del Libertador expresadas en Angostura, en la Constitución boliviana y al final de su vida, casaban estrechamente con la justificación de la dictadura: sobre todo la idea de la presidencia vitalicia.

1936. A partir de este momento, es decir, a partir del momento en que el pueblo hace su ingreso en el teatro político, a veces a trancas y barrancas, la religión oficial se vuelve religión popular. Eso se da ampliando y profundizando los caracteres religiosos de lo que en un principio había sido una admiración popular por una figura carismática. Por lo demás, seguía siendo la religión del rey: el partido político que intenta formar el presidente López Contreras se llamará «Cívicas Bolivarianas».

1945. De todas formas, se insistía en los aspectos más conservadores de la religión patriótica bolivariana. Pero a raíz del 18 de octubre se da un vuelco y se va a agitar esa religión no como algo otorgado sino impuesto por la voluntad popular: el gobierno del trienio será el de la «Segunda Independencia».

1983. El proceso anterior se va a desarrollar ya sin dique posible entre la fecha anterior y esta última. Pero si puede señalarse 1983 como un momento especial es porque se conmemoran los doscientos años del nacimiento de Bolívar; y, por otra parte, porque se da un paso gigante en la transformación de los héroes políticos en héroes culturales; en héroes fundacionales: Bolívar es el precursor de procesos tan modernos como la ecología y el turismo, sin hablar de la aviación...

1992. Todo esto va a tener como remate una consecuencia actual, presente: el 4 de febrero de 1992 un grupo de oficiales de graduación media se alzó no en nombre de principios políticos o filosóficos, no en función de un programa de gobierno, sino, dijeron, para hacer cumplir la voluntad de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

MIRANDA EL AFRANCESADO
(Lectura transversal de Caracciolo Parra Pérez)

Estas notas contienen menos un estudio histórico que un ensayo bibliográfico. La razón es muy simple y se puede resumir, más que en un libro, en un nombre, Caracciolo Parra Pérez. El historiador, diplomático y hombre político (fue ministro y presidente encargado de la República) es hasta ahora el insuperado estudioso de lo que podríamos llamar los próceres injustamente marginados por la idolatría bolivariana: la Primera República, Santiago Mariño y, por supuesto, Francisco de Miranda.

Su libro *Miranda y la Revolución Francesa* (Caracas, Banco del Caribe, 1966. Las referencias a este libro serán hechas en el texto mismo, señalando sólo el tomo y la página), publicado originalmente en francés hace tres cuartos de siglo, tiene la categoría de eso que los autores y editores ingleses suelen considerar textos «definitivos».

Aunque esta última caracterización siempre nos resulta insatisfactoria, en este caso sucumbiremos a la tentación de emplearla, porque hoy todavía continúa siendo la autoridad mayor en el tema, y el descubrimiento del archivo de Miranda (hecho por lo demás por el propio Parra Pérez) con posterioridad a la redacción

de ese libro, no ha hecho más que confirmar sus aseveraciones e informaciones. En una visita que, por razones nada protocolares ni diplomáticas, le hiciéramos en 1953 Jesús Sanoja Hernández, Porfirio Gómez Acosta y yo a su residencia, Parra Pérez nos habló largamente (en presencia de su secretario, el también historiador Juan Uslar Pietri) sobre las razones que le habían llevado a ocuparse del tema mirandino y a escribir su obra monumental. La cual, dicho sea de paso, contiene varios volúmenes consagrados a algunos aspectos particulares de la vida del Precursor.

Se paseaba, nos dijo, por las riberas del Sena, curioseando entre los estantes de los famosos *bouquinistes*, cuando encontró un panfleto de algún historiador francés de la revolución. En sus páginas se acusaba de traidor, cobarde, monarquista y quién sabe cuántas cosas más, al «general peruano Francisco de Miranda».

La confusión sobre el origen nacional del acusado parecía indicar la ignorancia del autor, y su próximo destino en el cesto de la basura.

Ante esa lectura, Parra Pérez reaccionó *en historien*: se propuso no tanto refutar aquel insignificante panfleto, como averiguar minuciosamente cuánto tenían de verdaderas o falsas sus afirmaciones. El resultado fue ese libro que hoy, setenta y cinco años más tarde, continúa siendo la fuente obligada y casi única sobre el Precursor en el turbión de la Revolución Francesa, pese al conocimiento público del Archivo de Miranda, presente hoy en la Academia Nacional de la Historia y publicado en los años cincuenta.

En estas notas no queremos hacer una simple reseña, la descripción capítulo por capítulo de ese libro. Leerlo nos hizo germinar una idea que es la que expondremos en este texto: Miranda no fue un militar extranjero que peleó en y por Francia, sino un general francés de origen hispanoamericano.

Intentaremos nuestra demostración dividiéndola en tres partes que, al organizar de manera diferente a la suya la información

compilada y procesada por Parra Pérez, nos permite focalizar algunos aspectos, los cuales podrían quedar dispersos u ocultos por el propósito descriptivo de ese texto y su plan fundamentalmente cronológico. Esos tres aspectos están todos inscritos dentro de aquella idea central. En primer lugar, Miranda como ciudadano francés, «*le citoyen Miranda*»; en segundo lugar, Miranda como general francés revolucionario; en tercer lugar, Miranda ante la guillotina, casi cerrando el inevitable ciclo de todas las revoluciones que devoran a sus hijos.

I. «Le citoyen Miranda»

La primera cuestión a dilucidar es tal vez la más simple: ¿por qué Francia? Hay por lo menos tres razones para que Miranda ingrese a ese país, abandonando la relativa seguridad de Inglaterra, cuya monarquía constitucional apreciaba grandemente.

Aunque parezca una perogrullada, la primera razón es Francia misma. Ese país no es solamente el faro intelectual de Europa, la patria de la Ilustración, sino una gran potencia comparable sólo a Inglaterra y Alemania.

Y en todo caso incomparable con los lejanos Estados Unidos de América, trece pequeños estados arrinconados entre el mar y un inmenso territorio que todavía no podía considerarse ni siquiera su *hinterland*. Es cierto que el ejemplo norteamericano estará presente en todas las mentes independentistas de Hispanoamérica, pero, curiosamente, su visión proviene de Europa, y particularmente de Francia, cuya *Convention* es un calco nominal de la norteamericana.

En segundo lugar, hay la revolución. Desde su comienzo, se vuelcan hacia Francia las esperanzas de todos los que de una manera u otra, quieren liberarse de algún yugo, sea nacional, político o religioso: es el *enragé* prusiano Anacharsis Cloots, uno de los más

feroces enemigos de Miranda, protegido de Marat y guillotinado después por «hebertista»; es Tom Paine venido a Francia a exponer sus ideas radicales. El sueño de todo revolucionario, y también de muchos simples aventureros es poder cumplir con el mandato coránico de la peregrinación, a la Meca de la Revolución, París.

Pero no hablemos sólo de revolución: como asienta muy pertinentemente Parra Pérez, «El gobierno revolucionario no sentía escrúpulos en recurrir al apoyo de los extranjeros, siguiendo en esto, como en otras cosas, al antiguo régimen» (I, 136). Por lo demás, Louis XVI había concedido a Miranda uno de los últimos pasaportes que firmó en su vida: en cierto modo, el general era ya francés, o por lo menos protegido por ese país (Tomás Polanco Alcántara, *Francisco de Miranda ¿Don Juan o Don Quijote?*, Caracas, Talleres de la Editorial Melvin, 1997, p. 244).

La tercera razón es la más indemostrable, pero acaso la más comprensible. Está ligada asaz paradójicamente a una causa cercana y a otra lejana. La primera es la inmediatez, la palpabilidad de la Revolución Francesa: todo revolucionario tiene cuando menos la esperanza de ser actor y no simple espectador de esa revolución. La inglesa y la americana han quedado atrás en el tiempo. Pero en cambio Francia (y ésta es la otra causa) es la *sœur latine*. No todas las *élites* hablan inglés, pero sí francés.

Otra cuestión a dilucidar se refiere a la adscripción política de Miranda en medio de aquel inestable y peligroso volcán político. Hay dos preguntas a responder en este tema: ¿era Miranda girondino? ¿Era ser «girondino» estar a la derecha de los jacobinos, o peor aún, ser «reaccionario»? En cuanto a lo primero, Miranda se liga de amistad con Petión, con quien le une la común admiración por la constitución inglesa. Petión, junto con Brissot, va a ser visto como el *chef de file* de los girondinos. Pero en ese momento, quien lo está invitando y protegiendo es uno de los jefes más prestigiosos y poderosos de la revolución.

Y si Miranda establece con ellos sus primeros contactos, es sobre todo porque los futuros «girondinos» son los mejores y más cultos propagandistas de la revolución. En todo caso, su adscripción, si adscripción hubo, no significaba en absoluto adversar a los jacobinos, algunas de cuyas ideas y actitudes adoptó por un tiempo.

En segundo lugar, hay que precisar no sólo que la idea de «partido» en aquel momento era muy lejana de lo que hoy consideramos tal, sino que la ruptura abierta y definitiva entre el Petión «girondino» y el Robespierre «jacobino» se produce en abril de 1793, esto es, un año casi día por día de la llegada de Miranda a París.

Antes, la distinción a hacer entre girondinos y jacobinos era cosa, como dicen los mismos franceses, *de couper les cheveux en quatre*: los dos grupos se sentaban confundidos y (hasta donde eso sea posible en política) fraternalmente en los escaños de «la Montaña».

En realidad, lo más importante de todo esto es que políticamente Miranda pareció aspirar mucho más, no como jefe de una hipotética y futura revolución latinoamericana, sino de la Francia revolucionaria.

¿Como Robespierre? ¿Como Bonaparte? Exactamente, si se aclara primero que en ese entonces Robespierre no era Robespierre, ni Bonaparte era primer cónsul, mucho menos Napoleón. Al final, Miranda estuvo más bien a punto de sufrir la suerte de Danton. Pero de eso se hablará más adelante. Por el momento interesa saber si esa aspiración fue apenas una insensatez de Miranda, una idea loca germinada en el cerebro de un hombre con un ego desmesurado, o si por el contrario, tenía algún asiento en la realidad.

Miranda llega a Francia en 1792, con su idea fija de encontrar apoyo para sus proyectos de emancipación hispanoamericana. En ese país se hace republicano y revolucionario. Porque, dice Parra Pérez, «cree que una Francia republicana y revolucionaria, capaz de propagar el incendio en el mundo entero, vendrá a ser la aliada

natural de quien quiera sublevar a las colonias españolas contra la madre patria» (I, p. 119).

Pero lo más interesante viene a continuación, en la misma autorizada pluma:

> «a favor de las circunstancias, olvidando un tanto su condición de extranjero, llegará a imaginar que podría desempeñar en Francia un papel de primer plano, militar y político, hasta el punto de que parece no haber temido, incluso, poner sus ojos en el poder supremo» (*ibídem*, pp. 119-120).

Cierto, Parra Pérez escribe que eso lo «imaginó» Miranda y como nadie puede penetrar en el cerebro de otro, se podría desechar como simple conjetura del historiador. Pero una crítica interna puede revelar cosas sorprendentes, sobre todo el hecho de que la ilusión de Miranda no era tan descabellada como podría verse hoy en día.

Esto hay que verlo desde dos ángulos al menos: desde la situación revolucionaria y desde la personalidad misma de Miranda. Como se ha dicho antes, los procesos revolucionarios atraen a los aventureros de todas partes como la miel a las moscas. Eso lo vimos en las revoluciones americanas, con La Fayette en Norteamérica, y con la Legión Británica en Venezuela. Ya sabemos el papel jugado por el argentino Ernesto Guevara en la revolución de Cuba.

No se trata sólo de que ellos deseen o busquen integrarse al país revolucionario, sino que éste los vea con simpatía y en todo caso como sus iguales, sus compatriotas. Pero además, hay un elemento muy característico de la Francia de aquel momento, y era la dificultad para precisar quién era francés. Si Miranda pronunciaba mal el francés, eso no lo distinguía de la mayoría de los franceses de la época. En un ensayo titulado «*Who sang the Marsellaise?*», un historiador norteamericano especialista en historia de Francia

sostiene que, para 1792, el francés era tan extranjero para la mayoría de los provenzales como lo sería el senegalés un siglo más tarde. «De hecho, era poco familiar para la mayoría de quienes habitaban dentro de los límites de Francia». (Eugen Weber, *My France*, Politics, Culture. Myth. Harvard University Press, 1991, p. 93).

Tal vez no haya ejemplo más luminoso de esto que el de Napoleón Bonaparte, quien sólo en 1789 pasaba, con toda Córcega, a ser francés: ¡a los veinte años, Bonaparte, su futuro emperador, era todavía un extranjero en Francia!

Como se decía arriba, el asunto hay que verlo también desde el ángulo de la personalidad del propio Precursor. Si era un hombre pagado de sí mismo, sus razones muy poderosas tenía para serlo: había sido no sólo recibido, sino cortejado y hasta adulado por los grandes de este mundo. Así, si por un lado podía vestir el uniforme del ejército ruso (aunque la *petite histoire* del machismo latinoamericano insista en atribuirlo más a hazañas de alcoba que de campos de batalla), por el otro podía jactarse de haber cultivado en Norteamérica amistades preciosas, entre ellas acaso la del mismísimo Washington, y de oírse alabar en todas partes por su sabiduría y su carácter.

Miranda no era un simple aventurero, un semimercenario al estilo de los *condottieri* del siglo XV, sino que era un señor del siglo XVIII, imbuido de la sabiduría de la Ilustración, arte y parte entonces de una *élite* universal. Y había un elemento más, nada desdeñable: si Miranda se comparaba a las mayores personalidades del proceso revolucionario, su figura destacaba como una de las más altas. De modo que uno puede plantearse que la ambición de Miranda de acceder al poder supremo era una simple circunstancia de su historia personal, de su psicología. Pero puede de igual manera plantearse el problema al revés: fueron las circunstancias en aquel cambiante y voraz remolino político las que impidieron que la ambición de Miranda tocara puerto.

Para cerrar esta parte de nuestra exposición, conviene resaltar un hecho que, en aquel momento, pasó inadvertido no sólo por ser una opinión expresada en una correspondencia personal, sino por la escasa importancia, entonces, del tema: el 26 de octubre de 1792, Miranda escribe a Petión sugiriéndole que, de una forma u otra, se conceda a las mujeres el derecho a participar en la elaboración de las leyes (I, p. 152). De esta manera, Miranda se hace también precursor de los derechos de la mujer.

II. Le général Miranda

La participación de Miranda en las guerras de la República se puede también analizar desde el punto de vista de su personalidad, o sea, lo ya planteado en los párrafos anteriores: por qué Miranda no es un simple peón extranjero, sino que ingresa al ejército francés con el más alto rango. Nos ocuparemos aquí de cuatro cosas: quién ingresa al ejército francés; Miranda, general en jefe; Miranda en la victoria; Miranda en la derrota.

El 25 de agosto de 1792 Francisco de Miranda es nombrado mariscal de campo del ejército de la República. Fue Petión quien lo invitó a prestar servicio en Francia, pero lo más importante es que su nominación fue respaldada unánimemente por el Consejo ejecutivo. Petión estaba impresionado por el venezolano, a quien consideraba «un hombre extremadamente instruido, un hombre que había meditado los principios de los gobiernos y parecía muy adicto a la libertad» (I, p. 134).

Esa adhesión no se quedaba en la simple apariencia: Miranda sabía lo que estaba perdiendo si la Zarina Catalina de Rusia advertía (como en efecto) que se le estaba oponiendo; y de eso mismo estuvo consciente el propio gobierno revolucionario, que accedió a las compensaciones materiales exigidas por Miranda.

Como sea, todo lleva a pensar que fue lo señalado por Petión, lo que lo llevó a aceptar la invitación de los franceses: «Yo admití en 1792 el honorable empleo que hubo de ser ofrecido con reiteradas instancias, para defender de los déspotas a la libertad francesa», dice en comunicación enviada a los representantes del pueblo el 29 de noviembre de 1794 (I, 135).

Aunque haya sido invitado con insistencia, su escogencia de Francia, su decisión de pasar a ser ciudadano francés fue un acto de su voluntad, conocedor de los riesgos y desventajas que podía ocasionarle tal escogencia en aquel momento, con cuarenta y dos años a cuestas (que eran muchos en aquella época y para un sudamericano), una vida de exilio aunque también una brillante hoja de servicios en el terreno militar.

¿Cómo se evidenció y se aprovechó esa experiencia por y en el ejército francés? Éste es el segundo de los temas a ocuparnos en esta parte: cuán alto llegó Miranda en el ejército francés, antes de detallar su acción en la victoria y en la derrota.

Para comenzar, ¿en qué condición se integra Miranda a la fuerza armada de la Francia revolucionaria? Quien se autoproclamaba «coronel español» amén de conde (falsas ambas cosas: no tenía título nobiliario y su grado era de teniente-coronel) y que había además recibido tan alta carga militar en el ejército ruso, no se puede pensar que entrase al francés como un novato, mucho menos un joven recluta.

Pero el texto de Parra Pérez, siempre tan preciso, podría inducir aquí a cierta confusión: mientras que en un parte dice que Miranda entró con el grado de «general de campo» (I, p. 468), en otra dice que se le nombró para incorporarlo como «mariscal de campo» (I, p. 134). No sabemos si existía entonces (o ahora) esa designación de «general de campo», pero es más verosímil que la otra, pues el mariscalato no es un grado al que se pueda llegar por sim-

ple escalafón, sino que se le otorga sólo a los comandantes en jefe de ejércitos victoriosos. En verdad, la confusión es más aparente que real: en aquel momento, el de «mariscal de campo» no era un grado superior sino un grado intermedio y eventual que no era incompatible con el de general.

A partir de allí, Miranda continúa su ascenso en el ejército. El 9 de octubre de 1792 recibe el grado de teniente general (al parecer superior al recibido antes) y, ya en 1793, es designado comandante en jefe de los ejércitos que operan en Bélgica. Es el más alto honor militar que alcanzará Miranda, lo que, aún en tiempos revolucionarios, es sumamente rápido para quien apenas tiene un año de haber comenzado a actuar como oficial francés.

Vengamos ahora con el Miranda victorioso. Por paradoja, sus acciones menores son las más significativas desde el punto de vista histórico, mientras que su acción mayor es una de rutina en cualquier guerra: la toma de una ciudad.

La primera de esas acciones, menores militarmente pero significativa históricamente, fue el combate de Briquenay, donde 6.000 soldados austro-prusianos a caballo enfrentaron unos 2.000 infantes y la artillería de los franceses.

Lo importante de ese enfrentamiento no reside en su número, ni en el despliegue de quién sabe qué nuevas tácticas guerreras, sino algo mucho más simple: al mando de Miranda, era la primera vez que las tropas revolucionarias vencían a los poderosos ejércitos prusianos.

En la segunda de esas acciones que se puede inscribir en el activo militar del Miranda francés, no queda claro cuál fue su actuación, aunque se pueda colegir que estuvo allí, o muy cerca. Esto no indica disminución ni postergación del rol de Miranda. Según Parra Pérez es mucho más simple: en Valmy no se dio ninguna batalla, fue apenas un simple cañoneo (I, pp. 147-148).

El de Valmy es uno de esos casos en que la percepción pública

es más fuerte que la realidad, en que se convierte en realidad. La «batalla de Valmy» es uno de los hechos de armas más celebrados en Francia, en calles, en estatuas, en manuales.

Fue un gesto histriónico de Kellerman lo que le dio su significado: frente a unos soldados que cargaban al grito de «¡Viva el rey!», él puso un gorro frigio en la punta de su espada y cargó gritando «¡Viva la Nación!». Esto tuvo una inmensa repercusión política en Francia, y mucho más tarde, Goethe sentía aquello como un acontecimiento de carácter universal, pues señaló el paso «de la era de los reyes a la era de los pueblos». En todo caso, Valmy fue considerada una de las batallas fundamentales de la república y en ella, de una forma u otra, también estuvo incluido Miranda.

Al menos en la pluma de los historiadores de la Revolución: Parra Pérez resume, no sin ironía, la visión de Lamartine. Ante la huida de las huestes prusianas, «Un inmenso clamor: "¡Viva la Nación!", levantó el pecho de los soldados, y los generales Miranda, Kellerman y Beurnonville fueron a estrechar en sus brazos al afortunado Dumouriez» (I, p. 149).

El 11 de noviembre de 1792, Miranda recibe el mando de la mayor parte del ejército francés en Bélgica. Es él quien pone sitio a Amberes y quien finalmente lo hace capitular. Como se ha dicho más arriba, esta acción puede hablar muy bien de las cualidades militares de Miranda, pero es una acción más en el contexto de una campaña victoriosa. Campaña en cuyo diseño él mismo ha participado, pero una acción, una batalla, de rutina.

Por cierto, la actividad de Miranda no se limitará a Amberes, ni a aquel momento en que le tocaba administrar la capitulación de la ciudad vencida: los aliados, Austria y Prusia, tornan grupas ante él, y vuelven a cruzar el Rin, esta vez en sentido contrario. Por otra parte, Miranda deberá dirigir una ciudad que si bien los había recibido como libertadores, pronto comenzó a aborrecer a los franceses por sus desmanes.

Miranda vencido sirve para ilustrar el magnífico dicho según el cual la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana. Dumouriez lo acusó del fracaso en ocupar Maëstritch, la ciudad acaso más fortificada de Europa; y del desarrollo desastroso de toda la campaña terminada en Nerwinden.

So pena de quedarnos en el simple calco del libro de Parra Pérez, no entraremos en detalle sobre los aspectos propiamente militares del asunto. Pero hay dos elementos políticos que conviene destacar, y que dieron a esa derrota una dimensión mayor que cualquier otra, y que dio el tono a algunos historiadores para adoptar las explicaciones de Dumouriez y echar las culpas sobre Miranda.

La primera es el juego político de Dumouriez en aquel momento: en 1793, se había hecho enemigo de la República y de la Convención.

Confiaba en que sus triunfos militares le ayudarían a cargar sobre París: la ruta y el destino posteriores de Napoleón Bonaparte. Quiso ganarse el apoyo de Miranda, acaso por su fama de «girondino»; pero al fracasar, comenzó a trabajar para perderlo (I, p. 403). Y la mejor forma era echar sobre sus hombros la responsabilidad de una derrota.

El segundo elemento es algo personal que jamás está ausente de toda actividad humana que implique al poder. Miranda era sospechoso, acaso no sin razón, de aspirar al mando supremo, lo que despierta los normales celos y malquerencias.

Una vez más encontramos este elemento de la ambición presunta o real, pero en todo caso verosímil, de la ambición de poder del general venezolano. Aquí, sin embargo, tiene mucho más peso, está más acorde con la realidad: aquí no está compitiendo él solo contra oficiales franceses, sino en una fuerza armada donde los extranjeros son legión. La lista es impresionante: «Los oficiales extranjeros poblaban el ejército: Stengel, el mejor de sus jinetes, procedía del Palatinado; Miaczysnki era polaco; Money, Keating, Seldom, Linch eran ingleses; Deprès-Cassier, suizo; Moultson, comandante de la flotilla de Amberes, norteamericano; Kilmaine, irlandés; Sttenhoffen, austríaco» (I, p. 406).

En todo caso, será la política la que decidirá de su inmediato destino: va a responder ante un tribunal político; allí se pedirá para él la máxima pena; allí se defenderá con elocuencia; allí salvará su cabeza y su reputación, aunque no su carrera en el ejército francés.

III. L'accusé Miranda

Cuando Miranda llegue a París para defenderse de las acusaciones que se le hacen por el desastre de la campaña de Bélgica, se encuentra en un torbellino político del cual él es el centro. Por un lado Dumouriez, ya consumada su traición a la república francesa, busca echar toda la culpa sobre un Miranda que se había opuesto a la traición.

Por su parte, los jacobinos lo acusaban de ser arte y parte de la traición de Dumouriez; en esto fueron particularmente sañudos Marat y nuestro conocido *enragé* Anacharsis Cloots, personaje folklórico si los hay en toda revolución. Detrás de todo eso había una lucha sorda (aunque a veces estridente) entre jacobinos y girondinos. Culpar a Miranda del desastre y de la traición, era acusar por allí mismo a su protector Petión, cabeza visible del partido girondino. Lo más curioso de todo es que, en las razones para tratar a Miranda como se hizo al final, pudo estar presente, aun entre los jacobinos, la fuerza todavía grande de la Gironda (II, p. 60).

Las acusaciones contra Miranda tienen ese poderoso trasfondo político. Pero por lo general, esas cosas no se dicen. Así es como, de las 63 preguntas que le hicieron a Miranda varios comités designados por la Convención, sólo una, la 58, se refería a política, a la traición de Dumouriez (II, p. 17).

Al comenzar el juicio, el ambiente público que, azuzado por los jacobinos, había contra Miranda, no podía ser peor: en la calle se pedía a cada rato su cabeza y se le acusaba de todos los crímenes. Por otra parte, se descubre, ahora sí, que Miranda era extranjero, que era «peruano» y por lo tanto español. Es a partir de ese momento que la revolución pierde su vocación universalista para volverse estrechamente nacionalista: Robespierre pide en la convención, en junio de 1793, que se expulse a todos los extranjeros del territorio de la república. Era lo que Brissot denunciaba: que a Miranda se le estaba degollando de antemano «con el cuchillo de la calumnia» (II, p. 24).

Miranda es, pues, enviado al Tribunal Revolucionario con tres tremendas acusaciones: la de ser extranjero (irrefutable, pero tardía); la de servir a los intereses de Inglaterra; y la de hacer traición a la república en el campo de batalla (II, p. 32). Más que las acusaciones, lo más ominoso es la presencia del fiscal, ese Fouquier-Tinville que enviará por igual a inocentes y culpables a la guillotina, y que en sus observaciones manuscritas al alegato previo de su defensor, muestra una inocultable prevención contra Miranda.

La defensa de Miranda, secundado por su sagaz abogado Chaveau-Lagarde, fue ganando poco a poco al jurado, y al público. En primer lugar, Miranda logró demostrar que más que «extranjero», su vida había sido la de un ciudadano empeñado en la lucha por la libertad. Y eso, en todas partes del mundo, y en particular, en su país de origen; por la independencia suramericana del despotismo español.

La segunda parte de su defensa fue una meticulosa relación de su adhesión, desde el primer momento, a la causa de la república. Que en esa Inglaterra, de la cual se le acusaba ser «agente», había expresado públicamente su oposición a la constitución francesa de 1791, porque conservaba una realeza que, decía, era incompatible con la libertad. Pero, más que su argumentación, lo que

causó mayor impacto en el auditorio fue el brillante elenco de sus testigos de descargo. Son treinta y cinco personas de nombradía, entre quienes destacan Petión y Tom Paine, el prócer norteamericano, y muchos más, extranjeros y franceses, pero todos de primera línea, incomparables en cualquier caso con los testigos de la acusación, que provenían en gran parte de la gendarmería, a la que tan severamente había reconvenido y castigado Miranda por su indisciplina y su cobardía; que rechazaban a Miranda por «extranjero» y también (lo que sí era una verdad como un templo) por su carácter rígido y soberbio.

Junto con aquellos testigos, fue la manía «archivística» de Miranda lo que lo salvó del cadalso: había conservado los documentos de su campaña, y en particular las órdenes escritas de Dumouriez. Toda esta parte de su defensa se puede resumir en una frase suya: «yo no era general en jefe: me daban órdenes, yo las obedecía. Si se hubiese ganado la batalla, la gloria habría sido para Dumouriez; debe, pues, cargar con la responsabilidad del fracaso» (II, p. 52).

Miranda fue absuelto de los tres cargos de acusación: su honor de militar y de republicano se encontró así, dicho por el terrible Tribunal Revolucionario, libre de toda mancha. Pero eso no es lo más importante, sino lo que sucedió al final del juicio y que lo convierte en un acontecimiento histórico. Ante los brillantes argumentos defensivos de Miranda y el alegato de su defensor, la actitud de un público hostil y sediento de sangre, cambió radicalmente: se echó a llorar y una vez pronunciado el veredicto, prorrumpió en unos aplausos sorprendentes no tanto por sí mismos como porque les unió los suyos nada menos que el fiscal Fouquier-Tinville. ¡Imaginemos a Vishinsky aplaudiendo a algún absuelto enemigo de Stalin en los juicios de Moscú! Miranda entró a su casa entre las aclamaciones de la misma turba delirante que poco tiempo antes pedía su cabeza «para enviarla en un mortero a los austríacos».

Cierto, las mismas razones políticas que habían condicionado aquellas acusaciones, privaron esta vez para impedir que a Miranda se le devolviese al ejército. Es más, no se sabe cómo salvó la cabeza pese al odio que le profesaba Robespierre (por cierto muy bien correspondido); de todas formas, se le encarceló una vez más, esta vez por dieciséis meses. Y al final, varios años después, se le expulsó de Francia. Para siempre.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Hay una frase de Miranda que podría muy bien sintetizar todo cuanto anunciábamos como idea central de nuestra exposición. En una carta a Petión le confiesa sus dos deberes: «primo, a la Francia, como un miembro legítimo de la nación y un servidor fiel de la república a la cual he prestado mi juramento inviolable; secondo, a mi pobre patria accidental» (I, p. 19).

Miranda demuestra que no concibe ningún orgullo particular de haber nacido en esta parte o aquella del mundo: no puede mostrar patriotismo por una patria que no existe, que apenas trata de crear. Y eso remite a su condición de ciudadano francés: no lo es por orgullo patriótico, lo que podría ser tan «accidental» como su nacimiento en Caracas sino voluntariamente porque Francia es republicana y revolucionaria.

Lo que sus contemporáneos le negaron, se lo concedió la posteridad: su nombre está inscrito entre los generales de la República y del Imperio en el Arco de Triunfo construido en 1836.

LA «AUTOCRACIA» DE GUZMÁN BLANCO

Se suele hablar, en la historiografía sobre el siglo XIX, de «la autocracia de Guzmán Blanco». Para saber cuánta validez tiene esa denominación, conviene comenzar por someter a estudio, a crítica, el término mismo de «autocracia» y su derivado «autócrata». Según el DRAE, lo primero es «Un sistema de gobierno en el cual la voluntad de un solo hombre es la suprema ley», y el autócrata «Aquella persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema de un Estado». Como es lógico que sea en un diccionario de la lengua, esta definición escueta no da una idea exacta de lo que, en la realidad, significa el término.

Pero no se trata de pobreza lexicográfica o argumental, sino de que el vocablo *autocracia* no es nada claro en sí mismo, es más bien un calificativo. De hecho, aun cuando haya algunos regímenes que acepten ser una dictadura, hoy no hay ninguna, ni la más absoluta, que acepte ser una autocracia.

Acaso el calificativo perdió todo prestigio cuando en febrero de 1917 se derrumbó el imperio del Zar, quien entre sus títulos ostentaba el de «Autócrata de todas las Rusias». En todo caso, es lo que asienta Mario Stoppino en el *Diccionario de política* editado

bajo la prestigiosa dirección de Norberto Bobbio (uno de los más escuchados *maître à penser* de la Italia contemporánea): que a diferencia de otros términos conexos o sinónimos, la autocracia «no tiene una connotación histórica precisa: no fue acuñado para denominar un tipo particular de sistema político concreto», con aquella excepción del zarismo cuya autocalificación como tal no tenía, como es lógico suponerlo, las connotaciones peyorativas que posee hoy en día.

«Es», remata Stoppino, «un término abstracto que no siempre es usado en modo unívoco». Pero lo más interesante de la definición viene a continuación: «Una autocracia es siempre un gobierno absoluto, en el sentido de que detenta un poder ilimitado sobre sus súbditos». Pero además de eso, «la autocracia comporta que el jefe de gobierno sea de hecho independiente, no sólo de los súbditos, sino también de los otros gobernantes, que le están por eso rígidamente subordinados».[1]

Basados en esa definición, creemos posible demostrar que el término «autócrata» (como sus sinónimos «dictador», «tirano», «déspota») es difícilmente aplicable a Antonio Guzmán Blanco.

Esa demostración la intentaremos en dos partes: en la primera se hablará del origen y la realidad del término aplicado a Guzmán mismo; en la segunda, se verá en qué medida Guzmán debió compartir su poder con fuerzas reales: es la tensión permanente generada por la tendencia centralizadora comprensible y hasta inevitable en quien trataba de construir un estado nacional, y los impulsos disgregativos de un poder disperso y un país desarticulado, contradicción que se hacía mucho más evidente e insoportable por ser Guzmán un producto directo del federalismo revolucionario.

1 Norberto Bobbio, Nicola Mateucci, *Diccionario de política*. México, Siglo XXI Editores, 1985, vol. 1 (a-j), pp. 553-566.

I. Cómo nació el término

Que sepamos, la palabra *autócrata* referida a Guzmán Blanco se empleó por primera vez en un libro de intención biográfica dedicado al Ilustre Americano, en los años cuarenta del siglo XX[2].

El libro de R. A. Rondón Márquez intenta al final un balance, pero es menos un análisis que una descripción simple. Lo cual no le impide aplicar el calificativo a Guzmán, sin inquietarse demasiado por sus aspectos metodológicos, entre ellos el significado mismo del término. Esto no es una interpretación nuestra: en el prólogo, el autor se refiere a la *boutade* de Francisco González Guinán según la cual su elefancíaca *Historia contemporánea de Venezuela* [3] era letra de Landaeta Rosales (cuyo archivo monumental reposa hoy en la Academia Nacional de la Historia) y música de *El consejero de la juventud*, una obra de intención moralizante escrita por el mismo González Guinán. ¿Qué decir de ésta mi obra, se preguntaba Rondón Márquez, la cual es letra de González Guinán, sin música?

Eso ya revela el fondo de la escritura de quien calificó a Guzmán de «autócrata». Porque la obra de González Guinán es, a lo largo de sus (con el índice) quince tomos, una narración detallada, día a día, y en ocasiones tremendamente aburrida de los acontecimientos del siglo XIX, a veces sesgada por su fanática militancia guzmancista. Rondón Márquez cambia los santos, pero el rito y los dogmas continúan siendo los mismos.

De todas formas, hay tres posibles orígenes del vocablo aplicado a Guzmán. El primero pareciera haber sido la necesidad, menos histórica que propagandística, de encontrar un término que designara a un gobierno liberal, tan polémico como el que había inventado Guzmán el viejo, «oligarquía».

2 R. A. Rondón Márquez, *Guzmán Blanco, el autócrata civilizador*. Caracas, Tip. Garrido, 1944.

3 Caracas, Presidencia de la República, 1954.

De modo que lo de «autocracia» debe tomarse aquí en todo su sentido peyorativo: es una designación de los conservadores, o de sus herederos historiográficos.

El segundo: en verdad, lo que se le reprocha a Guzmán es lo prolongado de su dominio. Porque si se toma la autocracia por su origen, la legitimidad de todos es la misma, al menos después de la dictadura de Páez: las armas. Y en cuanto al poder muy grande y en ocasiones absoluto, ningún gobernante anterior deja de tener rasgos de esa autocracia: ni Monagas, ni Julián Castro, ni el dictador Páez del 61, incluso ni Falcón. Pero Guzmán influyó de manera decisiva, si bien no siempre dominó absolutamente, durante 18 años. Porque todavía no ha aparecido el hombre que merezca más ese apelativo: Juan Vicente Gómez.

Finalmente, hay la práctica efectiva de la dictadura en Guzmán. En los primeros años de su gobierno, practicó un mandato sin restricciones, como la situación de guerra parecía imponerlo. Pero apenas tuvo oportunidad, convocó un Congreso de Plenipotenciarios para darle un asiento legal y constitucional a su mandato. Y no intentó prolongarse en el gobierno más allá de lo establecido constitucionalmente.

Cierto, como habían hecho Páez con Soublette y José Tadeo con José Gregorio, designó con Alcántara, para sucederle y devolverle el poder, a un hombre de su entera confianza aunque en este caso, al revés de los anteriores, le salió respondona la criada.

Aunque Guzmán se jactaba de que era él solo, por sí y ante sí el responsable (y por lo tanto de los méritos) de su acción de gobierno, nunca actuó en esa forma absolutamente unipersonal que le atribuían sus enemigos. Polanco Alcántara, quien ha estudiado a fondo el personaje, constata que Guzmán

> **«Demuestra un sentido de trabajo en equipo que le permite, sin perder el control del conjunto, hacer actuar a colaboradores escogidos entre personas de su más cercana confianza, a quienes respeta y deja trabajar, pero siempre dentro de los límites que les ha señalado»[4].**

A demostrar que esos límites no son siempre debidos a la voluntad autocrática de Guzmán, sino que provienen de la situación y las exigencias de la sociedad que le toca dirigir, está dedicada la segunda parte de esta exposición, que estudiará las relaciones del llamado «autócrata» con lo que llamaremos genéricamente «la Federación».

II. Vivir con la Federación

En otra parte hemos señalado que el segundo capítulo del acta acusatoria que contribuye a mantener a Guzmán en el infierno de la historia venezolana, está formado por los agravios centralizadores que infligió a una federación de donde provino su poder. Y sin embargo, nadie hizo tanto como él para respetar sus fueros.

Con todas sus tendencias autoritarias y por eso mismo centralizadoras, con todo y la exageración presupuestívora de su monumentalismo «caraqueño», con toda su egomanía centrípeta, fue sin embargo uno de los gobernantes más «federalistas» que haya tenido Venezuela. Para argumentar esta última afirmación, se impone precisar qué se quiere decir con eso de «gobernante» y, por supuesto, también con lo de «federalista».

Lo primero se refiere al hecho de ser Guzmán Blanco quien marcó los mayores hitos para la formación del estado venezolano en la República de Venezuela durante el siglo XIX; y un gobernante de verdad, que enfrentó en todos los sentidos a la «federación» y no que simplemente se dejó dominar por ella.

4 Tomás Polanco Alcántara, *Guzmán Blanco. Tragedia en seis partes y un epílogo*. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Grijalbo, 1992, p. 291.

Lo de «federalista» no alude tanto a una disposición constitucional como a una situación de facto. La Constitución de 1864 no «implantó» la federación en Venezuela: ella lo estaba en los hechos, no sólo desde el inicio de la república, sino antes de ella. Las diversas regiones que fueron administrativamente enlazadas en 1777 como Capitanía General de Venezuela, nunca formaron una nación orgánica.

Es así como, un siglo después de la formación de aquella Capitanía General, existía tan poca conciencia «nacional» venezolana, que al estudiar los pasaportes solicitados en la época, un grupo de investigadores de Maracaibo encontró que los únicos que solían considerarse sistemáticamente como «venezolanos», eran los caraqueños.[5]

En el terreno económico, igual situación. Las diversas regiones estaban acostumbradas a comunicarse directamente con las metrópolis europeas o americanas, o con sus colonias caribeñas, sin pasar por la capital de la República: poca, si alguna, comunicación o comercio había entre ellas. Manuel Rodríguez Campos sintetiza así esa situación: «En 1870, la economía venezolana estaba fraccionada por regiones, abierta a los intercambios ultramarinos y obstruida a los locales»[6]. De la misma manera, todas tenían su propia área de acción política, o lo que es lo mismo, todas obedecían en primer lugar a su propio caudillo, eran dominadas por la fuerza armada del mismo, y hasta soportaban el fardo de sus propias gabelas regionales.

Guzmán estaba plenamente consciente de esa situación. No se necesita ser adivino para saber que pensaba de esa manera, ni tampoco es necesario ir a espulgar los archivos para encontrar el documento que lo pruebe: eso era la evidencia misma. No era entonces muy original al ver eso como lo veía, pero sí tal vez la solución que encontró para asegurar la paz y su propio dominio en la regla de oro de los ingleses: *if you cannot fight it, join it.*

5 Germán Cardozo Galué, comunicación personal.

6 En Inés Quintero, *Antonio Guzmán y su época*, Caracas, Monte Ávila, 1994, p. 82.

Al verse incapaz de pacificar y dominar el país como más tarde pudo hacerlo Gómez, anulando su poder, decidió entonces que cada uno de esos caudillos actuase con bastante libertad en su territorio, siempre y cuando pudiese garantizarle allí la paz y la estabilidad. Es así como llegó a establecer lo que podría considerarse un atisbo de lo que en nuestro siglo llegarían a ser las proposiciones de regionalización, y que él mismo bautizó «delegaciones militares». Ellas no tendrían la organización ni el nombre de tales, sino más bien del respectivo caudillo. Eran las regiones dominadas por Joaquín Crespo, Jacinto Lara, José Eusebio Acosta, Gregorio Cedeño y Juan Araujo[7].

Este último nombre tenía carácter de símbolo, porque al revés de los anteriores, no era un caudillo liberal sino «godo». De modo que ese pacto con el «León de la Cordillera» revelaba que para Guzmán, la garantía de la paz pasaba por encima de cualquier congenialidad ideológica o compadrazgo político.

Eso no era todo: Guzmán va a asegurar también esa paz en forma diametralmente opuesta a la que, cuatro décadas más tarde, empleará el general Gómez: reduciendo el presupuesto del Ministerio de Guerra[8]. Esa era también una manera si no de limitar, por lo menos de dar cierta coherencia al poder de los caudillos: si querían tener su propio ejército, debían pagar su precio para ello. Hay que decir, por otra parte, que los propios «federados» se dieron cuenta de que serlo no sólo traía ventajas sino también perjuicios.

7 González Guinán, *op. cit.*, t. 12, p. 45.

8 I. Quintero, «El sistema político guzmancista», *op. cit.*, pp. 63-64.

Aquella ingenua creencia de Zamora, según la cual la federación no resolvería los problemas, sino que los haría imposibles[9], no resistía la más pequeña prueba de su aplicación práctica. Es así como los estados «pobres» (o sea los que no tenían minas, o salinas) al encontrarse en desventaja, acogían entusiasmados lo que al final era una forma de control por parte del poder central, como era el caso del situado constitucional.

No sólo eso, sino que fueron más lejos: llegaron a proponer ese control porque la autonomía de la explotación y comercialización de las salinas por parte de los estados, las había llevado a la ruina, y de paso a quienes habían creído beneficiarse con ese sistema.

José Eusebio Acosta, el jefe del distrito militar de Oriente expuso en términos simples esa situación al recordarle a Guzmán que las salinas de Araya producían bajo «el centralismo» cien mil pesos anuales de renta. Y que

> **«bajo aspecto tan halagüeño Cumaná acogió con entusiasmo la Federación, pero el resultado fue el peor posible: [...] los estados salineros se disputaron el mercado de la especie y a fuerza de vender barato sin aumentar el consumo destruyeron su renta».**[10]

Pero todas esas concesiones no tanto a la letra de la ley como a la realidad del país, tenían una contrapartida, hasta podría decirse una contraprestación: la autoridad de Guzmán Blanco no podía ser discutida. Y mucho menos con el habitual y casi único recurso de la revuelta armada. Y esto era algo que tal vez los caudillos dominantes, acaso a regañadientes estaban dispuestos a aceptar como garantía final de ese dominio en sus regiones. Pero no rezaba esa regla para quienes eran simples aspirantes a esa misma condición dominadora, ya señalada.

9 «Campaña de la Federación. Los jefes del Ejército Federal de Occidente a sus compañeros de armas. A los venezolanos todos». Laureano Villanueva, *Vida del Valiente Ciudadano General Ezequiel Zamora*. Caracas, Monte Avila, 1992 (Apéndice), p. 293.

10 Citado por Inés Quintero, *op. cit.*, p. 75.

Combínese todo eso con la teoría del «ciudadano armado» expresada por Falcón en Palmasola y se tendrá como resultado lo que el propio Guzmán expresó en aquella frase que ha terminado haciéndose famosa: «Venezuela es como un cuero seco: la piso por un lado, se me levanta por el otro».

Guzmán buscó aplanchar ese cuero seco recurriendo no solamente a su fuerza militar y a sus propias condiciones como jefe de ejércitos demostrada durante la guerra federal, sino también a espectáculos públicos que pudiesen golpear la imaginación popular e infundir miedo a los aspirantes, siguiendo el siempre eficaz consejo maquiaveliano: es preferible ser temido a ser amado, porque los hombres pueden cambiar de amores, pero el temor del castigo es siempre el mismo. El rigor llevado hasta la crueldad lo demostró en el fusilamiento de Matías Salazar el 18 de mayo de 1872[11].

Al ajusticiarlo, Guzmán estaba infringiendo la más importante garantía del Decreto de Falcón en 1863, que convirtió a Venezuela en el primer país del mundo en abolir definitivamente la pena de muerte. Pero, además, estaba fusilando a *Matiítas*, ese antiguo torero que llegó a ser uno de los guerreros más populares de la Revolución de Abril y que por todas esas razones, podía proponer una especie de guerra de clases o colores en el interior mismo de la causa liberal. Guzmán tenía en la historia el ejemplo del Libertador haciendo fusilar a Piar. Humillación suprema para el ajusticiado como para su verdugo, quien dirigió el pelotón fue uno de los más tristes personajes de la historia venezolana, Julián Castro.

El teatralismo guzmaniano se manifestó más abiertamente en el combate a la insurrección de Pío Revollo en Guayana. Guzmán

11 González Guinán, *op. cit.*, t. 10, pp. 71-84.

le dio a esa revuelta un tratamiento sin común medida con la importancia de su dirigente ni de la acción emprendida: no podía dejar pasar la ocasión de un castigo ejemplar. No por cierto quitándole la vida, como en el caso de Salazar, sino por medio de una espectacular degradación pública el 31 de marzo de 1880.

La culpa de todas esas tensiones no puede achacarse, como suele hacerse, exclusivamente a la egolatría del Ilustre Americano. Detrás de eso está la debilidad por no decir inexistencia de las instituciones públicas en Venezuela. Lo que hacía muy difícil despersonalizar un liderazgo nacional. O sea, que quien mandaba no era el presidente de la República, sino Antonio Guzmán Blanco.

Ni siquiera se podía decir que mandase el Partido Liberal, pues su propio padre fundador, Antonio Leocadio Guzmán, había acuñado una fórmula para designar a quienes gobernaban: «los liberales de Antonio», o sea de su hijo.

* * *

Hemos citado esto último para dejar claro que estamos conscientes de hasta dónde llegaba y llevaba la voluntad de dominio del Ilustre Americano. En un país donde la tradición o cuando menos las tendencias autocráticas no faltaban, debió contar, y lo hizo, con otro tipo de tradición: las pulsiones centrífugas que eran tan fuertes y tradicionales no sólo como una imposición de la geografía, sino de una vieja implantación en América donde si hemos de creer a Vallenilla Lanz, las palabras «federación» y «confederación» comenzaron a oírse mucho antes de que se hablase de independencia.

No es éste, por cierto, el único terreno donde sea posible demostrar que Guzmán Blanco no fuese un «autócrata», pero es el más significativo. No se puede decir que el Ilustre Americano haya sido un Louis XIV: más bien se parece a los predecesores del Rey Sol.

DE LA REGIÓN A LA NACIÓN*

La invasión de «los sesenta» señala el comienzo de un proceso que se llevará todo el siglo veinte: la formación del Estado-nación venezolano. Cien años es un buen lapso para analizar cuáles son las características de ese proceso, y para centrarse en él más que en el suceso de aquellos sesenta jinetes. Es el recorrido que se da en un siglo, de la región a la nación, pasando por la formación del Estado.

Trataremos de analizar aquí, partiendo de la situación de la Venezuela presente, los resultados. Es decir, cuánto debe a «los andinos» el hecho de que los venezolanos seamos como somos hoy en día. Nuestro propósito es asediar críticamente los cuatro aspectos más importantes del problema. El primero, la forma inicial del partido liberal restaurador como un partido regional. El segundo, el patriotismo antes de la nación; tres, la formación del Estado; cuatro, cuándo aparece la nación.

* Conferencia dictada en la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, con motivo de los cien años de la Revolución Liberal Restauradora de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.

I. El partido regional

Cuando Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y sus 58 seguidores cruzan la frontera, su movimiento no promete ser nada más que otro intento hegemónico personal y regional como los habituales en todo el siglo XIX. Lo que llega a Caracas es un partido familiar Castro-Gómez (pero a veces Gómez-Castro); un partido local (Los Capachos): un partido regional (tachirense primero, andino después). Para llegar a la formulación más general de «los andinos», se han debido cumplir varias etapas. La primera es que, como lo ha demostrado con mucho documento Arturo Guillermo Muñoz, hablar de «los andinos» refiriéndose a «los sesenta» es una generalización si no apresurada, por lo menos prematura. Es más, ni siquiera es adecuado hablar de los tachirenses. Porque será en el estado Táchira donde más recia resistencia se le oponga al invasor «capachero», al punto de que se puede decir que lo seguía solamente una parte de los habitantes de ese estado, muy delimitados geográficamente. Y ya que hemos citado a Muñoz, cabe anotar otra perspicaz observación suya: al revés de los pueblos de frontera, cuya tendencia es hacia la expansión, en el caso de los tachirenses la tendencia es hacia adentro, hacia la integración en esa madre patria, Venezuela, que se comporta hacia ellos como la madrastra del estereotipo.

Los apoyos y rechazos que Castro recoge a su paso hacia el centro son iguales o equivalentes a los recibidos en el Táchira: aquí es también abusivo hablar de «los andinos». Curiosamente, es en Caracas que se forma esa percepción, porque los «centranos» sólo conocen, de la gente de los Andes, esta montonera sombría que masca chimó, dobla las eses y practica juegos de envite y azar al pie de la estatua del Libertador.

Durante muchos años, esa percepción no sólo servirá a los caraqueños para definir a los invasores, sino que provocará en sus espaldas el friolento estremecimiento del terror. Desde la llegada

de aquel Castro grandílocuente y cojitranco a Caracas en octubre de 1899, hasta la derrota de la Revolución Libertadora, los caraqueños parecen vivir en un estado de perpetuo susto ante los horrores que les esperan cuando la horda andina se desate.

Esa percepción y ese rechazo por parte de los caraqueños, provoca una reacción pareja en los andinos: se voltean hacia adentro, aceptando la designación general, reconociendo como la parte más representativa o por lo menos más poderosa de su pueblo al núcleo más cercano a la frontera, los tachirenses.

II. El patriotismo antes de la nación

Vamos a circunscribir esta parte de nuestra exposición a cuatro elementos que señalan lo que podría llamarse los inicios de una conciencia nacional en aquellos rudos montañeses que llegan a Caracas: la huida «hacia adelante» de Castro; la proclama contra «la planta insolente»; la unión contra los andinos; y lo que podría llamarse «un nacionalismo tutelado». Acaso pueda sonar disparatado que los ciudadanos de una nación que no existe puedan manifestar un sentimiento, una actitud nacionalista. Pero siempre ha sido así: Juana de Arco está varios siglos atrás de la formación de la nación francesa; o, para no ir tan lejos, en los guerreros de la independencia no se tenía muy claro qué cosa pudiese ser una nación.

En todo caso, desde el principio, existe en la mentalidad de los tachirenses una confusa idea que de una forma u otra parece acercarse al concepto de nación. Ella está acaso presente en la decisión de Castro de irse al centro sin consolidar el terreno ganado con sus victorias militares. El futuro «Cabito» tiene ante sí dos opciones: o convertirse en un caudillo regional, para ocupar el puesto que dejó vacío el León de la Cordillera, Juan Araujo, o avanzar hacia el centro para arrancar el poder a esos insoportables «centranos».

Castro escogió esto último, pero de todas formas, esa hubiera podido ser una aventura militar más, si no hubiese introducido un elemento que, andando el tiempo, va a ser determinante en el desarrollo de la nación: que las verdaderas batallas son mucho menos militares que políticas.

El segundo elemento va a ser una experiencia muy particular, que por primera vez mostrará, a costa suya, que la nación puede unificarse, así esa unión esté pegada con alfileres, sea efímera y deleznable: es cuando la Revolución Libertadora, la de Matos y la *General Asphalt,* realice la inútil fusión de todos los caudillos, en un remedo de unidad nacional en contra de los andinos.

Del otro lado, cuando por la misma época Cipriano Castro deba hacer frente al bloqueo de las potencias europeas que quieren cobrarse sus deudas a la brava, lo más conocido y celebrado es su proclama contra «la planta insolente del extranjero», que se convertirá en una especie de Marsellesa criolla y en prosa, y que será repetida durante muchos años en todas las escuelas militares del continente.

Pero esa es una reacción del viejo patriotismo independentista, y más que la proclama de Castro, tiene interés e importancia la actitud del «Mocho» Hernández, quien «enterró sus odios» para apoyar al gobierno.

A un gobierno que lo mantenía encerrado, pero que a la vez estaba amenazado por el enemigo extranjero. En todo caso, es la primera vez que se expresa una actitud nacional, un atisbo de semejante conciencia. Aquí no hubo, como en 1810, provincias disidentes y mucho menos colaboracionistas. Es decir, que la unión «contra los andinos» que estaba presente y actuante en la Revolución Libertadora se transformó, también efímeramente, en unión nacional alrededor de los andinos gobernantes.

Aquella proclama y esa actitud nacional ha servido de base para la creación de una leyenda acerca del «nacionalismo» de Castro. Picón Salas, que conocía muy bien lo problemático de tal designación, prefiere compararlo con Abd-el-Krim, el caudillo marroquí de un nacionalismo primitivo, racial y religioso y, en todo caso, instintivo y nada culto. Por otra parte, se suele oponer la actitud de Castro hacia las potencias extranjeras, su condena altisonante de la «planta insolente», con la de Gómez al llamar en 1908 a la armada norteamericana para que patrullase las aguas venezolanas, impidiendo un regreso de Castro y protegiendo la reacción en su contra. Planteado en esos términos, el asunto no resiste la menor crítica: al final, no es más que la transposición al terreno de la historiografía, de una pelea política de la época.

A decir verdad, ni Castro ni Gómez podían tener tampoco demasiado desarrollada esa conciencia nacional en una nación que no existía realmente. Esta no es pura especulación. En los Archivos Nacionales de los Estados Unidos de América encontramos un documento confidencial que tal vez sea hoy la primera vez que se presente ante un público venezolano.

Se trata de una comunicación (numerada 103), que el 14 de junio de 1902 envía el embajador norteamericano Hebert Bowen al Secretario de Estado, relatando las últimas incidencias de la Revolución Libertadora. Ella parecía a punto de triunfar, pero esa perspectiva había llenado de pánico a los caraqueños, que pensaban que ante la inminencia de la derrota, Castro «soltaría» a sus andinos para que se dedicasen al pillaje y al asesinato, a las peores atrocidades. Ese terror llegó a tales extremos, que el 13 de diciembre de 1902, Bowen mismo informa a su Secretario de Estado que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña y Alemania en Caracas huyeron de la ciudad en volandas (dejando, por lo menos este último, abandonada a su mujer) aterrorizados por la «loca idea» de que si no lo hacían así «los iban a atrapar, encarcelar y torturar». Ante esa situación, Bowen aconseja enviar varios buques de guerra a patrullar las aguas venezolanas. Y lo explica así:

«He solicitado barcos de guerra, en primer lugar porque pienso que debemos tener una fuerza a mano que pueda aplacar los miedos no sólo de los americanos que viven aquí sino también de los propios nativos, y que pueda prevenir a los barcos de guerra de otras naciones si piensan iniciar en La Guaira o cualquiera otra parte del territorio venezolano una acción que pudiese perjudicar nuestros intereses y derogar nuestro prestigio; y en segundo lugar, porque posiblemente sea necesario desembarcar un fuerte contingente de nuestros *marines*».[1]

¿Cuál fue la reacción del presidente Castro ante esa situación? En el mismo documento, Bowen relata lo siguiente:

«Castro me mandó a llamar»... [y luego de hablar de otros temas] «Antes de dejarlo, le dije que había decidido pedir dos barcos de guerra. Castro me respondió que él veía a los Estados Unidos como el mejor amigo de Venezuela entre las grandes potencias y que se sentiría agradado de tener aquí nuestros barcos de guerra; y luego me preguntó si enviaría un cable para eso. Le respondí que no me parecía necesario».

¿Castro patriota, Gómez cipayo? Este documento revela otra cosa: la actitud de ambos es sensiblemente la misma. Ninguno de los dos tenía muy acusada la conciencia nacional. Y no la tenían porque no podían tenerla: ellos no están gobernando una nación, no pertenecen todavía a una nación. Revela también que esa conciencia no se da de una vez por todas, que tiene sus altos y bajos,

1 «Bowen to the Secretary of State». Subject: confidential report as to the progress of the Mathos revolution. Nº. 103. Caracas, june 14, 1902. La copia existente en FUNRES no tiene más precisiones en cuanto a su ubicación en los Archivos Nacionales de los EE.UU. de América, pero todo hace pensar que proviene, como todos los despachos de la época, del cuaderno *Venezuelan dispatches*, USANA.

sus vueltas y revueltas. Con ellos se va a dar, eso sí, el primer paso, con la formación del Estado.

III. La formación del Estado

En una carta enviada a su primo Eustoquio Gómez, y que (por su ortografía) parece no haber pasado por el filtro de un secretario, el Benemérito expresa su convicción de que «el ejército es la base del gobierno». Él no era capaz de hacer sutiles distinciones entre «Gobierno» y «Estado», pero tenía toda la razón del mundo; y en todo caso esa era no solamente su convicción, sino también la de su compadre Castro.

Su fuerza frente a la numerosa Revolución Libertadora se debe al grado de unificación que había alcanzado ya su ejército, frente a la dispersión y la anarquía de sus adversarios, deseosos de regresar lo más pronto posible a sus viejas querencias regionales. Su primera preocupación, pues, será esa de construir «la base» del Estado. Su: es decir, tanto de Castro como de Gómez.

En efecto, esas bases se van a echar en dos momentos, que corresponden a los respectivos gobiernos: la primera en 1903, a pocas semanas de que la batalla de Ciudad Bolívar señale el fin de las guerras civiles. Un decreto de Cipriano Castro crea la Academia Militar en Venezuela. Pero una cosa son los decretos, y otra la realidad: el país no tiene recursos para echar a andar el importantísimo proyecto. Habrá que esperar hasta el 5 de julio de 1910, cuando el general Gómez inaugure con 55 alumnos y en edificio todavía con las paredes a medio pintar, la Academia Militar de Venezuela.

Éste es el primer y muy importante caso para la formación del Estado venezolano, como por lo demás de cualquier otro. Porque un Estado sólo se funda y se consolida en la paz, y ese ejército será su garantía: ya no habrá más generales orientales, andinos o

«centranos» ni su variopinto liberalismo-liberal y liberalismo-conservador.

Pero no sólo es el hecho de crearlo: partiendo del principio de una lealtad absoluta a su creador y jefe, el general Gómez tratará de institucionalizar el Ejército, al no intervenir en sus reglas internas de escalafón, y prohibiendo nombrar militares activos en cargos civiles.

En todo caso, a la muerte de Gómez, la única institución del Estado venezolano es su fuerza armada. La derrota de la Revolución Libertadora y la constitución de este Ejército son las dos contribuciones más importantes que «el elemento andino» (como lo llamaba Eustoquio Gómez) haya hecho al establecimiento de la paz en el país, base indispensable para formar la nación.

Yo no diré, como solían decir los áulicos de Gómez, que a él se le deba la paz venezolana. Eso es tan falso como verdad es que hace ya pronto sus buenos sesenta y cuatro años que Dios llamó a su lado al Benemérito y esa paz la seguimos conservando los venezolanos. No diré aquello, pero tampoco se puede negar cuánto y cómo contribuyeron los andinos a establecer esa paz y por lo tanto a crear este Estado y esta nación.

Sin embargo, hay en la formación del Ejército, columna vertebral del Estado, un buen ejemplo de cómo ese no es un proceso lineal, sino que también ha conocido sus avances y retrocesos. La idea de crear una institución armada significaba, por supuesto, contrariar una de las banderas favoritas de la Federación, proclamada por Juan Crisóstomo Falcón al desembarcar en Palmasola en 1859: que él y sus huestes no eran soldados sino «ciudadanos armados».

A partir de 1910, se comienzan a separar los conceptos de «ciudadano» y «armado»: el civil es ciudadano, pero no debe portar armas; y el soldado sí las porta, pero no es ciudadano. Ahora bien, para que eso sea cierto, es necesario que el ejército sea nacional también en su composición humana. Así lo fue en efecto durante

los primeros años, cuando podían ingresar a la Academia Militar jóvenes venidos de todas las regiones de Venezuela.

Pero más tarde, Gómez cambia de idea. En el año 28, y en el 30, percibe que el sentimiento antiandino es todavía muy vivaz entre los caraqueños. Es decir, que en el interior del país no se está muy lejos de pensar lo que escribe Rafael Bruzual López desde la emigración.

Bruzual se libra allí a una curiosa contabilidad: del presidente abajo, ministros, presidentes de estado, jueces, congresantes, concejales, prefectos, jefes civiles, secretarios, obispos, archivistas, aduaneros, diplomáticos, telegrafistas. Todos andinos.

Como si eso fuera poco, Bruzual López proponía un método infalible para detectar a los insufribles y pervasivos andinos:

> **«Cuando cualquier venezolano lea en los periódicos de la barbarie que un individuo se llama Indecencio Gómez M., por ejemplo, tenga la seguridad, sin temor a equivocarse, que es andino, pues esa mayúscula final con su punto, para indicar el apellido materno es una costumbre colombiana de muy pésimo gusto que sólo la usan en Venezuela los andinos»[2].**

Eso lo resumía en el interior del país aquella copla (que tal vez nunca llegara a conocer el Benemérito) referida al gabinete de Juan Bautista Pérez, su títere en la Presidencia:

> **Es andino el Presidente**
> **andino el gobernador**
> **son andinos los ministros**
> **¡Misericordia, señor!**

2 *La oposición a la dictadura gomecista.* Colección Pensamiento Político Venezolano del siglo XX. Caracas, Congreso de la República, t. II, vol. 2, p. 53.

Pero sí tuvo Gómez, necesariamente, que leer una comunicación que le envía Rafael María Velasco en 1930, informándole sobre una manifestación donde se llegó a gritar: «Mueran los táchiras cabezas chatas!». Esa actitud real o atribuida de los «caraqueños malucos» (como también los calificara Eustoquio, quien por lo visto parecía estar dispuesto a decir lo que el Benemérito callaba) hace que éste cambie de política en cuanto al reclutamiento de su oficialidad.

Regresa así a sus inicios en la Restauradora e impone que sólo sean recibidos en la Academia, y por lo tanto en la oficialidad, quienes hayan demostrado su pertenencia a «la tierra» como llamaba sin muchas precisiones a la suya, el Táchira. No hemos encontrado hasta ahora un documento que avale esta decisión del Benemérito, pero los resultados están a la vista: por lo menos hasta 1958 el grueso, si no la totalidad de los oficiales son andinos, más precisamente tachirenses.

Es un regreso, conservador y temeroso, de la nación a la región. En esas condiciones, el Ejército andinizado va a aparecer como una fuerza extranjera de ocupación. Esa percepción ayudará a impedir que muera definitivamente el regionalismo: hasta 1930 por lo menos, todavía sigue mucha gente pensando que el problema de Venezuela son los andinos, y por lo tanto que muerto los perros se acaba la rabia.

IV. Aparece la nación

En abril de 1932 un grupo de emigrados venezolanos firma un «Manifiesto a la prensa libre de América». Se dice allí que «La barbarie oficial andina hay que RETORNARLA A LA MONTAÑA, de donde salieron desgraciadamente un 23 de mayo que fue funesto. Retornar salvajes al lugar de donde salieron implica: el filo de una

espada y el cañón de una pistola»[3]. No sabemos a quién se deba atribuir esas lindezas de estilo, pero uno de los firmantes del documento es Rómulo Gallegos.

Con tales apoyos, se podría señalar ese documento como el apogeo del antiandinismo en Venezuela, a lo que habría que agregar las manifestaciones del 17 de diciembre de 1930 en Caracas. Por el contrario es su canto del cisne. En el mismo año va a aparecer por primera vez una literatura que no combate a los andinos, sino al antiandinismo. Es la afirmación de un sentimiento nacional, que esta vez no le pertenece al gobierno sino a la oposición: es el primer atisbo acaso de la aparición de una conciencia nacional. Y lo más interesante de todo es que sus autores no son andinos, sino «centranos».

En mayo de 1932 aparece en *Venezuela futura* un ensayo firmado por Rómulo Betancourt y que inicia en los siguientes términos:

> «*Venezuela futura* –periódico de oposición a Gómez, que se publica en Nueva York– plantea en esta forma su tesis fundamental: "En Venezuela no existe la tiranía de un hombre sobre el resto del país, sino de una región, de la región andina".
> Estamos en radical desacuerdo con esa manera de plantear el problema político-social de Venezuela. Nos parece resultado de un análisis formalista, superficial, de nuestra realidad. Para los que con criterio materialista hemos analizado la historia y el hoy inmediato del país, no caben vacilaciones al afirmar que en Venezuela existe la tiranía –forma agudizada de la dictadura– de una clase, de todas las regiones del país y no de una región determinada, la andina»[4].

3 *Ibídem*, p. 220.

4 «Con quién estamos y contra quién estamos». *El comienzo del debate socialista*. CPPV-S.XX, t. VI, vol. 2, pp. 13-14.

Este escrito tiene dos aspectos fundamentales: por una parte, como los buenos textos polémicos, se opone a una percepción generalizada, destruye un mito colectivo, entra en batalla contra lo que parece evidente al sentido común generalizado.

Por otra parte, y es eso lo más importante, es la primera vez que un grupo de venezolanos –todavía pequeño y, peor aún, emigrado– se abre a la conciencia de pertenecer a una nación, y se dispone a combatir para proponerla e imponerla al resto de sus compatriotas. De una forma u otra, eso se debe a los andinos: quien los defiende, aun atacando a un régimen tildado de andino, es la nación entera, en la pluma de esos jóvenes emigrados sarampionosos.

Después de eso, viene el gran día de la nación venezolana, el 14 de febrero de 1936. Ésa es no sólo, como se ha dicho, la fecha auroral de la democracia venezolana, sino también, repetimos, de la nación. Porque es la primera vez que esa nación se da cuenta de que ni ella ni el Estado pueden reducirse al conjunto de instituciones gubernativas, sino que se expresa con los modos de una sociedad democrática. En una palabra, que la nación se realiza en la democracia.

Y a eso no serán ajenos los andinos, ya integrados, indiferenciados del resto de los venezolanos. Recordar que cuando ese gesto se produce está en el gobierno uno de los soldados iniciales de la Revolución Liberal Restauradora y un tachirense, el general Eleazar López Contreras, es apenas anecdótico; y en todo caso nunca lo pondríamos como ejemplo de aquella integración e indiferenciación de los andinos. Lo importante estará en otras acciones del gobierno: uno, cuando, seis días después del catorce de ese mes, anuncie su famoso «Programa de Febrero» donde recoge las reivindicaciones de toda la nación. Y cuando de esta manera integre en una sola voz al gobierno y a los andinos al cuerpo de la nación, que por primera vez se ha manifestado en una forma de «democracia directa» no muy lejana de aquella a que aspiraba Rousseau.

Dos, cuando se produce un cambio en su lenguaje dirigido a la nación y a sus Fuerzas Armadas. Comienza a hablar cada vez más de estas últimas como la «institución castrense». Tres, lo anterior se une a su decisión de dejarse recortar su propio período constitucional de siete a cinco años y prohibir la reelección inmediata. Ambas forman parte de un proceso que llega hasta nuestros días, aunque hoy se pretenda cuestionarlo: la despersonalización del poder. Mientras los dos primeros aspectos pueden atribuirse a conquistas de la nación venezolana, sería mezquino no reconocer cuánto le debe el país al desprendimiento de ese gran tachirense, ese gran venezolano que fue Eleazar López Contreras.

Y finalmente, viene la fecha que señala el fin de la dominación liberal-restauradora: el 18 de octubre de 1945. La hemos llamado así y no «de los andinos», porque los oficiales que derrocan al tachirense Isaías Medina Angarita son tachirenses ellos mismos.

Pero sobre todo, porque esa designación regional ya va perdiendo sentido: la gente va dejando de percibirlos así, para verlos como venezolanos al igual que los otros. Ese es el resultado de un siglo transcurrido desde que, entre gallos y medianoche, una pequeña falange cruzó, con la frontera, el Rubicón que, entre otras cosas, nos regalaría casi medio siglo de una dominación cesárea.

JUAN VICENTE GÓMEZ Y LA IGLESIA*

La relación de Juan Vicente Gómez con la Iglesia católica, apostólica y romana, se podría resumir diciendo que, en cuanto católico, fue un cristiano bastante indiferente en materia de fe; en lo apostólico, trató a los hombres de iglesia como a todos los otros: no por su relación con Dios, sino por su obediencia al César; y en cuanto romano, respetó y en cierta forma protegió a la institución, recibiendo un tratamiento recíproco.

Los que siguen son algunos breves apuntes destinados a puntualizar esos tres aspectos de la relación del Benemérito con la Iglesia católica romana y con sus representantes venezolanos. Ese carácter nos exime de la necesidad de acompañarlos con un pesado aparato crítico de citas y referencias.

I. Un católico «sociológico»

Juan Vicente Gómez nació y murió en el seno de la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero entre esas dos situaciones límite,

---

* Ponencia presentada en las Jornadas de Historia Eclesiástica, Seminario Interdiocesano de Caracas, 29 de mayo de 1995.

su relación con la fe parece haber sido la misma de todos los venezolanos. El pueblo venezolano no es ateo o agnóstico; ni siquiera, como algunas veces suele decirse, indiferente en materia religiosa. Yo acostumbro calificar su actitud como *indolencia* religiosa: se teme al Diablo, se impetra la ayuda de Dios, pero sin hacer demasiado esfuerzo para evitar el Infierno ni mucho menos para ganar el Cielo. En lo que podríamos llamar su fuero íntimo (en la medida en que eso sea posible calibrarlo) encontramos en Juan Vicente Gómez una actitud parecida: en esto, como en todo, el Benemérito fue siempre muy lacónico, para no decir discreto. Tanto, que es sólo interpretando sus escasas manifestaciones públicas (y en algunos caso, la ausencia de ellas) como podemos hacer algunas precisiones.

1. Como se sabe, la religiosidad de los andinos (estamos hablando particularmente de la vida de Gómez) es más manifiesta que en el resto de los venezolanos. Ello se debe posiblemente más al hecho de ser una sociedad estable, con instituciones tales, que a una fe muy profunda.

2. Como sucede en el resto de Venezuela, esa religiosidad se acompaña con prácticas que a veces bordean peligrosamente la superstición si no la magia, y que la Iglesia combate si no condena, muchas veces sin mayor éxito. En todo caso, se trata de un sincretismo al que no está desacostumbrada la Iglesia de Pedro y Pablo. Picón Salas se refiere, en la época de la invasión de «los Sesenta», al culto de «la Mano Poderosa», que la Iglesia no mira siempre con muy buenos ojos, y que sirve a los comentaristas políticos para hacer comentarios sarcásticos sobre el poder. Por otra parte, desde el siglo XVIII por lo menos, coexistían con la religión algunas prácticas que, sin situarse fuera de ella, podrían ser consideradas por algún espíritu rigorista como brujería; y por lo tanto, merecedoras del fuego eterno, después de haber pasado por el terreno de la Inquisición. Nos referimos en particular a la práctica del «rezo» para

curar algunas enfermedades, sobre todo de animales. No conocemos prueba alguna de que Gómez haya recurrido a ello, pero como ganadero, no debía desconocerlas.

3. Juan Vicente Gómez es bautizado, y seguramente, tras ser confirmado, tomó más de una vez la comunión. A su vez, fue padrino de niños de su entorno (Castro era su compadre, no sabemos por cuál lado). Pero se negó sistemáticamente a santificar sus uniones. Aunque la frase «los Gómez ni se casan ni se mueren» es seguramente una de las leyendas de su infinito anecdotario, retrata bastante bien una situación y, se puede inferir, también un sentimiento.

4. Finalmente, en su relación con la divinidad, hay una curiosa expresión suya, por excepción escrita, y a la cual hemos aludido en el último capítulo de nuestro *Gómez, el tirano liberal*, que citaremos a la letra:

> **«[Gómez] tenía una idea muy particular de su relación con el Altísimo. Ella está presente acaso mejor que en ninguna otra parte en un curioso papel escrito, de su puño y una letra bastante clara, firme y hasta elegante, en julio de 1911. Dice allí: "Vida que Dios cuida nadie la quita. A mí me cuidan Dios y la Patria Juan Vicente Gómez"».**

Esto podía parecer una profesión de fe doblada de una confianza supersticiosa en la protección divina. Pero hay algo raro en esas frases. La segunda vez que emplea el verbo cuidar, al pasar del singular al plural, la «n» del plural aparece más pequeña, como si hubiese sido una corrección, cuando no quedaba espacio para hacerla del mismo tamaño de las otras, es decir, agregada después de haber escrito la frase. Por otra parte, no hay un punto que separe la última frase de la firma. De modo que si se lee el papel sin la «n» que parece agregada y teniendo en cuenta la falta de este signo de pun-

tuación, el papelito se lee así: «Vida que Dios cuida nadie la quita. A mí me cuida Dios y la Patria Juan Vicente Gómez». Es decir, a Dios sólo le incumbe cuidar al General; éste, a su vez, cuida de la Patria.

Todo esto podría ser desechado como simple especulación psicologista en torno a un presunto «acto fallido» si no fuese porque corresponde a la naturaleza misma del culto oficial gomecista de los Padres de la Patria y de la unción legitimadora que de allí extraía el régimen. Incluso si se le da a ese papel la lectura que se le ha venido dando corrientemente, aun si la «n» del segundo plural estaba desde siempre en la mente del Benemérito, llama la atención la equiparación de Dios y de la Patria como guardianes del mismo poder capaces de proteger una vida.

II. A César lo que es de César

En lo que se refiere a los representantes de Dios en la tierra, Gómez no los tratará como tales: su conducta frente a ellos será la tradicional del poder. O sea, que mientras estén de su lado los colmará de atenciones y prevenciones; y cuando se le enfrenten, los tratará con la misma dureza con que trata a todos sus enemigos. Daremos cuatro ejemplos de ello.

1. Carlos Borges sabía combinar en su oratoria la exaltación de las divinidades de las dos religiones predominantes en Venezuela: la cristiana, y la religión patriótica. Así, a Gómez le importó poco que la Iglesia considerase al padre Borges como una oveja particularmente ennegrecida: sacó al cura dipsómano y lujurioso del relativo anonimato de su ministerio en la capilla del Cementerio General del Sur, para escucharle sus sermones en la capellanía de la Presidencia de la República.

2. Gómez tuvo una relación bastante cordial con algunos altos dignatarios de la Iglesia, pero en particular con monseñor Felipe Rincón González, arzobispo de Caracas.

Había una confianza tal, que el prelado parece haber sido el único capaz de inmiscuirse en los asuntos de Gómez con su familia. El hecho es que después de una entrevista con él, de la cual el tirano sale evidentemente conmovido, Gómez llama a su hijo «Vicentico», lo hace despojarse de sus arreos militares y lo envía a un exilio dorado. A la muerte de Gómez, se descubrieron algunas cartas del prelado, dándole consejos médicos al Benemérito, en particular el uso de semillas de níspero para tratar los males de próstata. La oposición de izquierdas, donde todavía era patente la influencia de la masonería y del anticlericalismo liberal, comenzó a llamarlo «el Arzonícspero».

3. Pero con sus enemigos de sotana, Gómez fue tan cruel como con los seglares. En 1913, a raíz de un sermón suyo contra el concubinato donde la alusión a Gómez no podía ser más clara, el padre Antonio Luis Mendoza, un formidable orador sagrado que además parecía estar implicado en la conjura de Román Delgado Chalbaud, fue a dar a La Rotunda donde murió nueve años más tarde. Pareja suerte corrieron los padres Evaristo Ramírez y Régulo Franquiz, de quienes Pocaterra dice que fueron envenenados. El mismo autor nombra sin más detalles pero corriendo la misma suerte, a otro sacerdote de apellido Monteverde.

4. Poco le importaba a Gómez que, además del traje talar, su adversario portase un apellido ilustre, «godo». Monseñor Salvador Montesdeoca se atrevió a repetir en Valencia la hazaña del padre Mendoza en 1913, condenando el matrimonio civil como concubinato. Corrió ligeramente con mejor suerte que el anterior: fue condenado al silencio. No sólo el figurado del exilio, sino el real de una cartuja italiana; y, mucho después de que Gómez abandonase el poder y de paso este valle de lágrimas, al silencio de la muerte al ser fusilado por los alemanes.

III. Petrus apostolus potestatem accepit

En cuanto a Roma, en cuanto al Papa (cuyo nombre, según una curiosa etimología lo pretende, provendría de las iniciales del latinajo con que se titula esta parte), las relaciones de Gómez fueron las mismas que tenía con todo poder terreno: respetuosas, y si el caso fuese, cordiales.

1. Desde muy joven, Gómez aprendió a auxiliar a la Iglesia. A los quince años, aparece como donante de una cierta suma de dinero para ayudar a la construcción de una capilla.

2. Por otra parte, si exceptuamos lo antes dicho sobre su alergia al matrimonio, Gómez será bastante respetuoso del ritual de la Iglesia. Es así como asistirá a los bautizos y matrimonios de los suyos, y sobre todo, a las celebraciones tradicionales de la Iglesia, particularmente en los actos oficiales del Estado donde se acostumbra su presencia.

3. En tercer lugar, y esto es lo más importante de todo, bajo el régimen gomecista ingresarán a Venezuela las órdenes religiosas que una tradición laica y anticlerical había mantenido fuera.

Esto era tanto más importante cuanto que al hacerlo, Gómez desoía a algunos de sus asesores intelectuales más conspicuos, masones y anticlericales como César Zumeta. A partir de 1915, llegarán así al país catorce congregaciones religiosas, entre ellas la más detestada por aquellos intelectuales gomecistas, la Compañía de Jesús, una de las primeras (o en todo caso no una de las últimas) en llegar (1916).

Se fundaron a partir de allí treinta colegios confesionales con el auxilio del Estado; se firman convenios con la orden capuchina española en 1922 y, después de la muerte de Gómez, con los salesianos. Por otra parte, en 1920 se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede, en el nivel de una Nunciatura Apostólica.

4. Roma premió todo eso con honores. Por Breve Pontificio del 25 de enero de 1916, Su Santidad Benedicto XV condecoró al Benemérito General Juan Vicente Gómez con la Orden Piana en su primera clase, o sea Gran Cruz con el Título de Caballero y nobleza transmisible a sus hijos (recordar que llegaron a ser ochenta). Lo cual quería decir que Gómez tenía derecho a ser llamado no simplemente *commendatore* como cualquier jubilado italiano, sino mucho más sangreazulosamente *cavaliere*.

* * *

Estos son pues, los breves apuntes que anunciamos al principio. Se puede concluir muy generalmente que, católico de nacimiento y muerte, el general Juan Vicente Gómez fue uno de esos gobernantes que, como Henri IV, pensaba que París (o en su defecto, Caracas) bien vale una misa...

De la relación del gomecismo con Roma tal vez lo que revista mayor importancia para los venezolanos de hoy sea lo que hemos examinado en último lugar, porque contribuyó a llevar a la Iglesia a un grado de fortaleza e influencia que nunca antes había tenido en la historia venezolana.

No solamente es hoy una institución cuyas opiniones son escuchadas con respeto más allá de lo puramente pastoral, sino que se da el lujo de haber tenido en este siglo tres presidentes formados en sus instituciones de enseñanza (Caldera I, Herrera Campins, Caldera II), y católicos practicantes; sin que eso haya estimulado el clericalismo a la manera clásica, ni por lo tanto tampoco a su hermano gemelo, el anticlericalismo.

LOS POSITIVISTAS EN VENEZUELA

Para hablar de positivismo en Venezuela, hay que disipar primero muchos equívocos. El primero es que, al ser la más brillante generación positivista también el más brillante soporte intelectual de la tiranía gomecista, se suele confundir positivismo y gomecismo; y se pretende también que sus tesis fueron una justificación *ex post facto* de ese régimen.

Igualmente, por la oposición entre tiranía y libertad, se puede pensar que los positivistas eran adversarios del liberalismo; o que todos los positivistas eran gomecistas. Finalmente, que a la par con la democracia que acabó con la influencia gomecista a partir de 1936, el marxismo liquidó la influencia de la ideología positivista en Venezuela.

Nada de eso es cierto, o cuando menos no lo es totalmente. En primer lugar, el ingreso a Venezuela del positivismo de Comte y de Spencer tiene su punto de partida en un discurso pronunciado por Rafael Villavicencio en la Universidad Central de Venezuela en 1866. Lo cual quiere decir dos cosas: la primera, que eso se produce durante el gobierno del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, y tres años apenas después de los acuerdos de Coche que pusieron fin a la guerra llamada Federal. La segunda, y la más importante, es que ese discurso será la primera presentación del pensamiento de Au-

gusto Comte en América del Sur, y si se exceptúa a México, en toda la América Latina.

A partir de allí, se pueden señalar tres hornadas de pensadores positivistas: la primera, formada por el mismo Villavicencio y por el sabio de origen alemán Adolfo Ernst (cuya cátedra de Historia Natural en la UCV se convirtió a partir de 1874 en tribuna de difusión de las ideas positivas); y por algunos intelectuales provincianos entre los cuales destaca Vicente Marcano. La segunda, formada por sus discípulos inmediatos, despliega su actividad en una época que, con razón o sin ella, se tiene tendencia a considerar en Venezuela como intelectualmente baldía: entre 1888 y 1908.

Los más destacados positivistas *fin de siècle* serán Luis Razetti, Lisandro Alvarado, el joven Gil Fortoul, Luis López Méndez y Manuel Vicente Romerogarcía. Es sólo la tercera etapa del positivismo la que coincide con la dominación gomecista entre 1908 y 1935: José Gil Fortoul, Laureano Vallenilla Lanz, César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya, Julio César Salas, Rómulo Gallegos y José Rafael Pocaterra.

Los primeros positivistas desarrollaron su actividad intelectual mayormente durante la dominación del Ilustre Americano, general Antonio Guzmán Blanco, y apoyaron su gestión progresista. Eran por lo tanto liberales; pero no sólo ellos: también sus sucesores se adscribían confesamente a esa doctrina y a esa praxis políticas. Esto a su vez tiene dos significados: la primera es que, menos que en el pensamiento de esos autores, esa contradicción, esa paradoja, se encuentra en la acción política del liberalismo, y no sólo en Venezuela. La segunda es que la teoría del «gendarme necesario» con o sin ese nombre, o sea la teoría del déspota ilustrado, no es una racionalización de su apoyo a Gómez, sino que la precede, y se encarnó en el más liberal de los gobernantes venezolanos, Guzmán Blanco.

Es más, esa teoría del «gendarme necesario», tomada de Laboulaye, la había expuesto Vallenilla Lanz en *El Cojo Ilustrado* antes de la entronización de Castro y de Gómez, los dos tiranos andinos.

También es falso que el positivismo haya sido «enterrado» doctrinalmente en Venezuela por el marxismo. Si se aparta la idea general de que el marxismo es una crítica del positivismo, al que opone su utopismo y su dialéctica, en este país el marxismo es largamente tributario del positivismo. El libro con que se abre la teorización marxista sobre la historia venezolana, *Hacia la democracia* de Carlos Irazábal, aunque se pretenda una refutación de *Cesarismo democrático* de Laureano Vallenilla Lanz, es sobre todo una glosa del mismo.

En el centro de la filosofía positivista está lo que podría llamarse su «culto del hecho». El hecho es lo positivo, lo real, lo dado, y no un simple fenómeno. De allí parten sus mayores aportes y también sus más grandes errores.

En el terreno de las ciencias sociales, que es donde mayores han sido sus contribuciones en Venezuela, eso se puede ver con bastante claridad. Por una parte, los positivistas venezolanos, pero en particular Laureano Vallenilla Lanz y José Gil Fortoul, abrieron caminos de gran novedad y de preciosa utilidad para la comprensión de nuestra sociedad y de su historia. Ellos se alzaron, con excelente pluma y una ironía demoledora, contra las explicaciones «providencialistas» de nuestros procesos sociales, de nuestra historia; e igualmente contra la historiografía romántica que pretendía sustituir los dioses celestiales por otros dioses terrenos, los libertadores.

Hoy ya nadie discute la tesis de Vallenilla Lanz, que en 1911 causara tantísimo escándalo, según la cual nuestra guerra de independencia no fue un conflicto entre dos naciones distintas, sino una guerra civil entre venezolanos. Y se necesitaba toda la autoridad intelectual de Gil Fortoul para atreverse, en la Venezuela de 1909, a combatir la acusación de «parricidio» que contra los venezolanos de 1830 había lanzado la historiografía romántica.

Se necesitaba esa autoridad para escribir que... «no fue solamente movidos por ambición personal que muchos antiguos ami-

gos del Libertador lo abandonaron. Lo veían ahora convertido en el portavoz de la reacción; ya olvidaba que desde 1808 había sido el genio representativo de la revolución»... «para la revolución americana –intelectual, social, política– Bolívar no murió realmente en 1830», sino en 1828, cuando se había proclamado dictador y abdicado de sus principios liberales.

Pero ese culto del hecho explica también –por encima de consideraciones de beneficio personal que nadie niega seriamente– la larga y fiel adhesión de los positivistas al régimen de Gómez. Un gobierno es un hecho, y ¿qué hecho podía ser más rotundo que una tiranía como la gomecista que duró veintisiete años? Laureano Vallenilla Lanz lo expresó con una fórmula que también había recogido de Laboulaye: que todo gobierno es tácita o expresamente representativo. Es por eso que, librepensador, sin embargo recibía como muy positivo el «cesarismo teocrático» que creía ver en Colombia.

Finalmente, hay que decir que no todos los positivistas eran gomecistas. Cierto, como toda Venezuela, los intelectuales recibieron alborozados la sustitución de Castro por Gómez en 1909.

Que eso pudiese venir del seno mismo del castrismo, que fuese su segundo de a bordo quien lo defenestrase, parecía cosa del cielo, y así lo bautizó entre otros Rómulo Gallegos, quien habló entonces de «milagro político»; también José Rafael Pocaterra apoyó en 1908 a Gómez. Pero luego se separaron de él, y Pocaterra fue a dar a la cárcel y a un largo y polémico exilio.

En verdad, se puede decir que todo el pensamiento venezolano de la época estuvo influido de una manera u otra por el positivismo. Positivista era Gallegos, para quien la sociedad venezolana se debatía en una lucha mortal entre la civilización y la barbarie («Doña Bárbara»); y Pocaterra, quien parecía aceptar que Gómez fuese un César democrático, pero un César de la decadencia...

EJÉRCITO Y SOCIEDAD: LA EXPERIENCIA VENEZOLANA

I

En un discurso suyo de los años veinte, Laureano Vallenilla Lanz sostenía que Venezuela era «un legado de glorias militares». Durante mucho tiempo, semejante frase era normal, casi obligada, en la retórica conmemorativa, y aún hoy se recurre a ella alguna que otra vez. Desde que comenzamos a leer los trabajos de Luis Castro Leiva y ahora el muy premiado *Discurso de la Fidelidad* de Carol Leal Curiel, hemos aprendido que la palabra, por muy repetitiva y estereotipada que pueda parecer, nunca es vacía, que ella siempre encierra un contenido si no enteramente individual, sí social y sobre todo, un significado epocal.

No solamente cambia con el emisor y con el receptor: debe tomarse en cuenta también el momento cuando ella sale de nuestros labios o de nuestras plumas. Sus significados cambian también con harta rapidez, en un lapso a veces muy corto: es, por ejemplo, asombrosamente reducido el que un término como *constitución* invirtió para trasladarse del vocabulario médico al político, ambos en el lenguaje corriente, en los años finales de la dominación colonial española en nuestro país.

De igual manera, aquella frase no sólo va a contener una proposición diferente con el paso del tiempo, sino que dejará de ser conmemorativa para volverse imperativa, de referirse al pasado para reflejar el presente y comandar el futuro. Su lectura integrada en sucesivos contextos históricos, sirve para dibujar un cuadro asaz claro de la relación entre la sociedad venezolana y su fuerza armada.

De entrada, al hablar de «legado de glorias militares» se refleja un hecho cierto: la independencia de Venezuela se logró a través de una guerra muy cruenta, la más devastadora del continente. A eso se refiere lo de «militar». Pero allí se habla también de «gloria», un término moral, y de «legado», que lo es jurídico.

La gloria impone el reconocimiento, y algunos (pocos) hombres se satisfacen con recibirlo; pero a veces también lo exigen, y es entonces cuando la gloria de uno (pero también de muchos) debe pagarse. A partir del 18 de Brumario, eso se llamó «bonapartismo».

En este caso, sin embargo, es lo de «legado» lo más significativo. Porque el bonapartismo fue un mal común a las repúblicas hispanoamericanas, las cuales una vez emancipadas de los españoles, no siempre pudieron libertarse de sus libertadores. Pero en Venezuela (debía haber sido en Colombia, pero no fue así) se tenía *al* Libertador. Y con él sí se complicaban las cosas. Porque imbuido de la *vertu* jacobina (la *virtú*, para el Maquiavelo de los *Discorsi*..., contenía la gloria, la implicaba) y del espíritu romántico, Bolívar podía contentarse con los aplausos que lo recibían en todas partes.

Pero como hombre político sabía que ni sus secuaces libertadores se conformarían con tan poco, ni que tal vez sus repúblicas debiluchas tenían manera de enfrentarse a manos desnudas contra el «vicio» del despotismo, y menos un vicio armado.

De allí su proposición del «cuerpo intermedio» si no de una aristocracia, por lo menos una *estratocracia* (Blanco Fombona) militar contenida en el Discurso de Angostura y en la Constitución Boliviana. Esa era la herencia del Libertador, ese su «legado».

Después de 1830, si alguien repetía la frase consagrada, ella tenía dos lecturas, y a poco una sola. Una lectura subversiva, la de la revolución integrista de José Tadeo Monagas, quien en 1831 se alza contra la nueva república enarbolando la bandera de «religión y fueros». Queriendo decir con esto último que *los* libertadores se consideraban maltratados en la disposición testamentaria, la protestaban y buscarían cambiarla por las buenas o (casi siempre) por las malas. La otra lectura, la oficial pero casi unánime hasta los años cuarenta, del siglo XIX, enseñaba que la Patria era un legado de *la* gloria militar del libertador (con minúscula) de Venezuela, del Ciudadano Esclarecido, del general José Antonio Páez. El procerato civil de la República había encontrado hasta entonces una manera de protegerse de los libertadores y a la vez vacunarse contra las veleidades oposicionistas, arrimándose a la sombra del más prestigioso, del más poderoso de esos libertadores.

Pero en 1848, la oposición encontró la manera de colarse por una rendija, buscando la aceptada protección de otro de ellos, también muy prestigioso, también poderoso. Hasta 1858, la lectura de aquella frase continuó siendo la misma, sólo que durante diez años ella aludirá al brillante desempeño militar del general José Tadeo Monagas.

Todo eso durará hasta que en febrero de 1859, luego de un año de incertidumbres y de buenas intenciones civiles, el «general del Pueblo Soberano», Ezequiel Zamora, proclame en Coro la Federación dando origen al más largo desangramiento en la historia venezolana. El cual durará los próximos 44 años: hasta que en 1903, en la batalla de Ciudad Bolívar, el general Juan Vicente Gómez contenga la hemorragia aplicando un torniquete exitoso y acaso definitivo.

La Guerra Federal será llamada también «Guerra Larga». Quienes lo hacían estaban pensando en su período inicial, 1859-1863, pero pocas veces un proceso fue tan bien nombrado, sin darse

cuenta quienes así lo hacían: ¡casi medio siglo de combates! Por eso, y siguiendo la brillante aunque no desarrollada idea de Gil Fortoul, en lugar de hacerlo en singular, es más correcto hablar de *las guerras federales*.

Ellas tendrán como consecuencia la protesta definitiva de aquel «legado», la extensión, la democratización del reparto presumido de sus beneficios. Y se manifestará en dos formas de profunda influencia en la historia venezolana hasta nuestros días, como un primer resultado de la relación entre la sociedad venezolana y su fuerza armada (en ese momento, la dispersión hará que sí se pueda hablar *stricto sensu* de «sus fuerzas armadas»).

En primer lugar, si la Patria es «un legado de glorias militares», pero se quiere que ella sea de todos y no de un puñado (de una «oligarquía»), la solución es entonces tan sencilla que bastaba pensar en ella: todos seremos libertadores, todos seremos militares. Una vez más, la palabra es acción y ese proceso está, más que planteado como una opinión, descrito como una realidad por el general Falcón, en su proclama de Palmasola, en 1859:...«la cuestión no es que las leyes que hagáis sean buenas o malas; la cuestión es que el derecho de hacerlas no es vuestro, sino de la mayoría, porque en las repúblicas corresponde a aquéllas el ejercicio de todos los poderes sociales». El problema que el futuro mariscal evadía es que «la mayoría» no sabe hacer leyes. Que ella sólo sabía pelear y esa era su única manera conocida de ejercer «todos los poderes sociales». Y la fórmula para poner en acto ese ejercicio (como si el venezolano común no la supiera o intuyera) se la daba Falcón al abrir la misma proclama: «No soy», dice con orgullo, «...un militar de cuartel que hace la guerra por oficio; como tal, la guerra me inspira horror, y menosprecio al que la hace. Soy lo que todo hombre de conciencia que ciñe espada y lo que he sido desde que Venezuela me prestó la de su libertad: un ciudadano armado y nada más».

En adelante, todo hombre venezolano lo será «de conciencia» y por lo tanto, buscará ceñir espada. Todo el mundo será ciudadano («horror a la oligarquía»), y ciudadano armado. Durante casi medio siglo Venezuela no será ni una nación, ni mucho menos un Estado: será casi siempre un campamento. De allí proviene otra consecuencia, la segunda de este prolongado suceso guerrero: el famoso «igualitarismo» del venezolano, uno de los lugares comunes más tenaces de nuestra sociología de café.

El cual por ser lo uno y lo otro no es necesariamente falso. Esa igualación no se ha dado tanto en los hechos (no es que haya desaparecido una clase, o un tipo de dominación, o toda forma de ella), sino que es un sentimiento difuso o si se prefiere, una actitud más que una realidad social. El inceremonioso estilo del venezolano corriente proviene de ese aire de *vivac* que se respiró por medio siglo. La guerra democratiza las relaciones sociales y en la trinchera, frente a la Gran Igualadora, todos somos iguales de verdad. Si eso dura demasiado, para quienes sobrevivan se convertirá en una segunda naturaleza.

El «igualitarismo» del venezolano será también así una consecuencia de la guerra, un «legado militar», aunque esta vez no siempre lo sea de la «gloria» sino del miedo corriente y moliente, el más libre e igualitario de todos los humores.

II

En 1936, Mariano Picón Salas pronunció una frase que tuvo una fortuna singular: «hemos entrado en el siglo XX». En verdad, y tomando como referencia lo mismo que a él lo hacía expresarse de tal manera, esa entrada se había producido en 1903.

Por lo menos en un terreno nada desdeñable, en general como en la particular historia venezolana del siglo XIX: en el militar.

Lo anterior no se refiere por esta vez a la ya citada batalla de Ciudad Bolívar y con ella al fin de las guerras civiles, sino al decreto de creación de la Escuela Militar en el mismo año, muy pocos días antes de aquella batalla. Eso cerraba el ciclo abierto por la proclama de Palmasola: en adelante, ya dejaba de ser oficial el menosprecio a quien hace la guerra por oficio, y también su contrario, la exaltación del «ciudadano armado». Se iniciaba así un proceso cuyos primeros resultados se apreciarán bajo el gobierno de Eleazar López Contreras: la separación de las voces «ciudadano» y «armado», haciéndolas si no antitéticas, por lo menos incompatibles. O sea que el ciudadano no puede andar armado («libertad de reunión pacífica y sin armas»), y el hombre de armas no puede ser ciudadano («obediente y no deliberante»).

Cierto, un decreto nada significa, y por eso, la victoria de Gómez en Ciudad Bolívar figura con justicia en sitio prominente para ganarle, con el de «Fundador de la Paz» en Venezuela, un título que le dará la prensa desde 1903 mismo y no sólo a partir de 1908. Aquel decreto de 1903 lo pondrá en ejecución el mismo Gómez en 1910 cuando, para abrir las muy rumbosas fiestas del Centenario, inaugure la Academia Militar con 55 cadetes, un edificio todavía inconcluso y un instructor chileno, Samuel Mc Gill.

«Para celebrar el Centenario de la Independencia, el Presidente de la República, General Juan Vicente Gómez, inaugura la Escuela Militar». Esta es otra frase que vale la pena descomponer, porque traduce un nuevo estadio de la relación de la sociedad venezolana con su fuerza armada. Se celebran cien años de la Independencia o en otras palabras, del proceso que a partir del 19 de abril de 1810, desencadenó el incendio guerrero que se cerró apenas en 1903. O sea que se conmemoran cien años de la guerra, pero se celebran en paz. Y para hacerlo, el vencedor de la guerra, el «fundador de la paz», el general Gómez, crea la escuela que va a convertir en institución al garante de esa paz, al ejército venezolano.

Ese ejército es pues creación de Gómez: le es impensable ser otra cosa que un ejército gomecista. Pero a la vez, se irá formando lentamente como institución, hasta convertirse en la columna vertebral del Estado venezolano. El cual es también *un estado gomecista*. Como es normal, él será la niña de los ojos del dictador, pero, una vez asegurado por siempre jamás (o sea, mientras él viva) su carácter gomecista, gozará de una relativa, si no independencia ni autonomía, por lo menos algo que se podría llamar con mucho tiento «personalidad» propia. Ella se refleja en la relación que mantiene el general Gómez con quien, después de ser desde 1919 por lo menos la segunda figura militar del régimen, lo sucederá como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas: el general Eleazar López Contreras.

Eleazar López Contreras es señalado siempre como el puente que usará la sociedad venezolana para pasar del despotismo a la institucionalidad: así pinta su flaca y acaso tambaleante humanidad una benevolente caricatura de *Fantoches* en 1937. Pero cuando se decía –cuando se dice– eso, la referencia es el año 36, y en general, su gobierno después de la muerte de Gómez. En verdad, aquello viene de antes. Y si después de 1931 se puede ir hablando del Ejército como la *institución armada gomecista venezolana*, y de la conversión del gomecismo en una *dictadura militar nacional*, el «puente» para esa transición será López Contreras. En todo caso, esa será la situación a la muerte de Gómez. Con él (se dice, se quiere y en líneas generales así será) muere también la dictadura. El Estado venezolano comienza entonces a andar con sus propios pies, sin la andadera personalista: comienza a institucionalizarse.

Pero con un peligro grande: el tono de esa institucionalidad vendrá dado por el Ejército. Se podría decir que eso siempre es así y que en toda Constitución la fuerza armada es la guardiana de las leyes. Pero en una sociedad estructurada diferentemente, es posible que la sociedad civil logre formar otros organismos que pue-

dan servir de contrapeso a la institución castrense. En Venezuela, ni siquiera la Iglesia ha alcanzado nunca esa categoría. En otras palabras, que a la muerte de Gómez el país intenta inaugurar la extraña situación de un régimen institucional donde, en materia de instituciones, respetada, permanente, coherente, fuerte, prácticamente no hay sino una: el ejército.

Por eso, la utilización obsesiva del culto bolivariano iba acaso dirigida menos a la población civil que a los hombres de armas, a quienes al recordarle a cada rato su condición de guardianes de «las gloriosas tradiciones que nos legaron nuestros antepasados» (una de las frases favoritas de López Contreras), se les estaba diciendo que podían tener muchos fuerza y armas, pero por encima de ellos vigilaba el genio tutelar del Libertador. Como toda religión, la bolivariana buscaba así servir de freno, o de cauce.

En los años cuarenta, esa institución va a entrar en crisis. Cuando se emplea esta última palabra, se suele ligarla a una situación catastrófica. Éste no es necesariamente el caso. La institución armada, en el momento en que llega a su cumbre, esto es, cuando se le asoma la posibilidad de dominar como tal el más importante Poder del Estado, se divide y propicia el crecimiento de otra institución que en adelante le hará contrapeso: el partido político.

Al decir que el dominio de la institución armada llega a su cumbre, no se está aquí aludiendo al 18 de octubre de 1945, sino al 5 de mayo de 1941, cuando el general Isaías Medina Angarita tome posesión de la Presidencia de la República. Porque él es el primer militar de escuela que llega a Miraflores. Vistas así las cosas, lo que los conspiradores militares del 18 de octubre (e incluso los del 24 de noviembre de 1948) van a lograr no es que las Fuerzas Armadas tomen el control de los poderes del Estado, sino exactamente lo contrario. Porque aquí va a tener lugar una de esas paradojas que no lo son en política, que son por el contrario asaz corrientes. Los sectores más conservadores de la sociedad

son bastante desconfiados y llegan a sentirse alérgicos, si no a aborrecer, al partido político. Andan –por lo menos en el caso venezolano– siempre a la busca de una «solución independiente». La traducción preferida de ese eufemismo es «solución militar»: no en vano son ellos los únicos venezolanos a quienes su profesión les prohíbe la militancia partidista. En todo caso, el Ejército es tomado como símbolo de la «Patria y de la Unión» frente a la labor disolvente de los partidos, armados en el siglo pasado, desarmados ahora.

Pero en octubre de 1945, en Venezuela se dio un caso especialísimo que, visto con el lente de estos «independentólatras» podría considerarse un *harakiri*. Cuando la mayoría de la institución armada insurja contra el gobierno del presidente general Medina Angarita, va a buscar el apoyo, no de civiles aislados que le acompañen en la aventura o sirvan de «flor en el ojal» para adornar sus manifiestos y dar forma a sus leyes y decretos, sino *al partido político*.

El lector habrá advertido el número singular. «Acción Democrática» lo es por varias razones. En primer lugar, es un partido que se está formando en la calle, en la oposición legal, no un apéndice burocrático como ese que algún insensato quiso inicialmente llamar «Partido de Partidarios de la Política del Gobierno», antes de que Arturo Uslar Pietri se diera cuenta del sabroso plato propagandístico que iban a servir con eso a la oposición.

Lo va a ser porque a su cabeza se encuentra un hombre a quien la lección del leninismo le ha aprovechado más que a nadie (increíble como pueda parecer, más que a los propios comunistas) y esa lección dicta que no puede haber transformación del país sin toma del poder y no hay toma del poder sin formar un partido político homogéneo doctrinalmente, centralizado en lo organizativo y, sobre todo, implantado en todo el territorio del país. Lo va a ser en lo inmediato, porque entre 1945 y 1948, «Acción Democrática»

será prácticamente un partido único. Y finalmente, porque remedando su modelo o copiando su ejemplo, se van a formar los partidos de la Venezuela contemporánea.

El «legado militar» del 18 de octubre será así bastante contradictorio: los conspiradores, buscando afirmar el poder del ejército, echan abajo la posibilidad real, efectiva y ya en acto, de esa afirmación. Las Fuerzas Armadas Nacionales perderán con eso su condición institucional hegemónica y casi única, porque harán entrar en liza al partido político, el cual andando el tiempo, sobre todo después de 1958, les servirá de contrapeso. Ese equilibrio hará la fuerza del régimen instaurado a partir de ese año, y de la Constitución de 1961, la más longeva de nuestra historia.

Eso ya sería bastante, pero no es todo. Aparentemente, a partir de 1962 las Fuerzas Armadas recuperan al menos uno de sus más importantes atributos, que habían perdido al producirse la separación entre los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita: la unidad de comando. En efecto ellas se unifican, si bien esta vez bajo comando civil: en los próximos treinta años, siempre un civil será comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Aparentemente, porque en verdad, nunca las Fuerzas Armadas Nacionales habían estado tan divididas. Lo están porque es imposible que no lo estén: al entrar en contacto cotidiano con la sociedad venezolana, dejarían de ser seres de nuestra propia galaxia si no se contaminan, si no se infectan con las divisiones que caracterizan aquella. Por lo tanto, es también imposible que no haya militares adecos, copeyanos, incluso masistas y hasta nos atreveríamos a decir comunistas si no hubiesen sido pulverizados después del «porteñazo» (evitándose así sufrir las readaptaciones de la *perestroika*). Por lo demás, la Constitución no prohíbe que tengan opinión, incluso política: lo que prohíbe es que ella se imponga sobre la obediencia, o que vaya a convertirse en la base de una deliberación no estrictamente técnica.

Pero lo que diga la Constitución, lo sabe todo el mundo, vale bien poco si no lo respalda una realidad de poder. El sistema político venezolano extrae una gran fuerza de esa división del ejército en fronteras políticas. Porque no solamente indica que, al tener opinión, son sus militares seres pensantes, sino porque esas opiniones pueden estar respaldadas por un poder de fuego. Si un militar copeyano (o adeco, o masista) quisiera tomar un atajo y llevar a su partido a la felicidad suprema del poder sin pasar por el cura y el jefe civil, puede estar seguro de que enfrente estarán los simpatizantes del partido rival para guardar el honor de la familia, y hacer que las alianzas sean legales y públicas. Al contrario de cuanto podría creerse, poca gente hay menos partidaria del recurso a las armas como los militares, quienes saben cuánto daño hacen de verdad. Dicho en otros términos, así como es muy difícil hacer tragar a alguien la idea de que puedan ser compatibles democracia y partido único, igual cosa puede decirse de las opiniones en el interior del ejército.

Esa tal vez sea la mejor respuesta, sobre la base de la realidad y no de los deseos, a quienes, tal vez para no oxidarse enteramente, cada cierto tiempo vuelven a hablar de la posibilidad de un golpe militar. Por supuesto que eso nunca está excluido, pero parece casi imposible que pueda reproducirse un «golpe frío» como el del 24 de noviembre.

LOS SESENTA MEJORES AÑOS EN LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA

La Contraloría General de la República es una de las primeras concreciones de lo que, en 1936, era un anhelo de toda la sociedad venezolana harta del descarado latrocinio gomecista. Eso había llevado a hacer lo que Gómez había hecho con los bienes de Cipriano Castro a principios de siglo: encontrar un atajo legal para revertirlos a la Nación.

La frase anterior puede parecer un rodeo, casi un eufemismo, pero no es capricho nuestro, sino que corresponde a la realidad de la medida tomada, porque si se quería actuar de manera legal se debía tomar en cuenta que la legislación venezolana prohíbe la confiscación.

Sea como fuere, esa medida podía tener mucho de ejemplar, pero no bastaba: en la historia venezolana el «gobierno anterior» nunca tiene la razón. Era necesario crear mecanismos para que eso no se reprodujera jamás. Es decir, condenar el ladronismo gomecista, pero impedir también el de sus sucesores. Y así se creó entonces, hace sesenta años, la Contraloría General de la Nación.

Pero el haber ocupado los primeros párrafos de este artículo en ese asunto y en esa fundación no proviene del hecho de que sea,

aquella, la institución que los edita, sino porque otros tantos años tiene la serie de cambios muy profundos que han transformado casi totalmente la sociedad venezolana. Ellos incluyen casi cada aspecto de nuestra vida cotidiana, pero nos centraremos en tres fundamentales: la movilización social horizontal; la búsqueda de la participación; y los cambios culturales. Lo primero se refiere al paso de una sociedad rural a otra urbana; lo segundo, al proceso de democratización; lo tercero, cómo aquellos procesos han incidido sobre la ideología, la mentalidad y las actitudes del venezolano.

I

En 1938, todavía la inmensa mayoría (que por cierto era mayoría, pero nada «inmensa» en un país despoblado) de los venezolanos vivía en el campo. La única ciudad digna de tal nombre era Caracas, y no llegaba al cuarto de millón de habitantes. Medio siglo más tarde, en 1991, según los datos del *Censo General de Población*, mientras algo más de quince millones de venezolanos vivían en la ciudad, menos de tres millones lo hacían en el campo. Se sabe o se intuye que ese proceso, en lugar de detenerse, mucho menos revertirse, se ha acelerado y completado: hoy podemos decir que Venezuela es un país de ciudades. Grandes y pequeñas, pero todas ellas con las ventajas y desventajas de la concentración poblacional.

Las ventajas: accesibilidad de la mano de obra y por parte de ésta, a los centros de trabajo; las mayores facilidades para una política de salud pública, no sólo por la voluntad de los gobiernos, sino por la presión de las clases acomodadas temerosas del contagio, de las viejas y terroríficas epidemias (la última de las cuales parece haber sido la pandemia o «gripe española» en 1918). Y finalmente, mayores facilidades para el despliegue de una política educacional exitosa.

Las desventajas: una, el rápido crecimiento poblacional y su excesiva concentración agudizan sus problemas, con, entre otras cosas, la presión de los sectores marginales que, al trasladarse del campo a la ciudad esperaban mejorar sus condiciones de vida, esperanza generalmente frustrada.

Dos, la inseguridad ciudadana, con el ambiente generalizado de una actitud de violencia provocada por el dinamismo de la vida citadina. Tres, la desorganización consecuencial de la rapidez de los cambios, que hace colapsar los servicios públicos y dar la impresión de ineficacia e ineficiencia. La lista contenida en los dos párrafos anteriores no agota el elenco de problemas, ventajas y desventajas de la ciudad frente al campo. Pero además, decirlo de ese modo podría dar la falsa impresión de que fuese posible escoger entre las dos opciones. En verdad, el proceso de urbanización es mundial, propio del siglo veinte más que de cualquier anterior y, hasta donde se sepa, irreversible. De modo que el problema no es vivir en la ciudad o en el campo, sino cómo vivir en la ciudad: mal o bien.

Hay sin embargo un hecho que, visto positivamente, puede señalar algún camino de esperanza: a los urbanizadores se les hace difícil comprender cómo Caracas, que ha sufrido una transformación tan grande en un tiempo tan corto, no haya generado más problemas de los que actualmente tiene.

II

Así como en la primera parte, aquí hay también dos cifras a contrastar, esta vez en el tiempo: desde 1938 a esta parte hemos vivido cincuenta años de democracia contra 10 años de dictadura militar (de los cuales, por cierto, los cuatro primeros fueron de «dictablanda» si se les compara con los que le siguieron, la tiranía personal de Marcos Pérez Jiménez).

Éste es tal vez el cambio más significativo de cuantos han tenido lugar en la Venezuela del siglo veinte. De la guerra permanente desembocamos en la tiranía; y se llegó a pensar que sólo una tiranía fuese capaz de contener las pulsiones guerreras de un pueblo sediento de sangre. Esa idea predominó en los primeros treinta años de este siglo.

Y hace sesenta años largos, a raíz del 14 de febrero de 1936, ese mito fue seriamente golpeado (aunque nunca enterrado completamente): la tiranía desapareció con su creador y sin embargo la guerra civil no regresó.

Pero la percepción de la democracia, con su discusión permanente y su apego a la legalidad, hace que se le considere popularmente un sistema ineficaz y desordenado. Es que llegar a adquirir una real conciencia democrática no es nada fácil ni se gana de la noche a la mañana. En todo caso, es un proceso que, amén de largo, conoce necesariamente de avances y retrocesos.

Con todo, en los últimos sesenta años se ha producido un sistemático avance hacia la formación de una mentalidad democrática. Eso podría contrastar con las pulsiones autoritaristas que de vez en cuando afloran con mayor o menor fuerza del seno del electorado: la increíble votación de Pérez Jiménez en 1968, la actual nostalgia del autoritarismo y el paternalismo en una parte nada desdeñable de la población.

Pero es tan evidente el apego de los venezolanos a las formas consagradas del ejercicio democrático, que aun para contrariar y posiblemente destruir la democracia, sus peores enemigos han debido vestir la piel del cordero democrático. Así, el pueblo se negó a seguir los llamados de quienes tuvieron la fuerza como primera opción en 1992, y hoy parece bastante dispuesto a creer en sus promesas si éstas se formulan en el cuadro de una confrontación democrática, la cual tiene por igual la posibilidad de ganar o de perder.

¿Formalismo puro? Véase la historia venezolana de este siglo: el país no ha permitido que se pretenda irrespetar los lapsos constitucionales: en 1952, la mayoría votó contra la pretensión de Pérez Jiménez de imponer el continuismo; y en 1957 la dictadura creyó haber resuelto el problema haciendo votar un plebiscito sin oposición.

El resultado: un mes más tarde un despavorido Pérez Jiménez salía de Venezuela entre gallos y media noche. Para quienes acostumbran seguir los procesos y no simple y llanamente sorprenderse con la eclosión de algún suceso, ese es un serio tema de reflexión.

Por supuesto, ese no es el único elemento de la formación y sobre todo la consolidación de una mentalidad democrática en el conjunto de la sociedad venezolana en estos sesenta años. A medida que el tiempo pasa, se va abriendo, en las *élites* y en el resto de la población, un deseo cada vez mayor de participación. Es cierto que la elección directa de gobernadores y alcaldes no fue algo impuesto por el electorado si no de una forma u otra otorgado por el Poder, pero esa concesión ha sido bien aprovechada por el país, contento de tener más cerca, para premiar o castigar, a los hombres en el poder.

Ese deseo de participación se ha venido manifestando de una manera negativa: como el rechazo de lo que fue el primer canal de participación popular a partir de 1936: el partido político. Que eso sea simplemente el movimiento pendular de una opinión caprichosa o una ola de fondo que lleve a su liquidación, depende en primer lugar de los partidos mismos. Cuya única posibilidad de supervivencia está en comprender que (gracias en parte a su propia acción) vivimos en otra Venezuela distinta y que ya no poseen ese dominio monopólico que fue su característica durante casi medio siglo.

Que deben estimular el desarrollo de organizaciones que no tienen por qué ser rivales, sino colaboradoras en la tarea imposter-

gable de crear una democracia de ciudadanos, y no de monolíticos coreadores de consignas.

III

Estos sesenta años han sido también los de la más grande transformación cultural del venezolano en todos sus cinco siglos de historia. A ello ha ayudado, sin duda, el proceso de urbanización, pero son múltiples los factores que lo han estimulado. Como sea, hoy casi un millón de venezolanos ha pasado por las aulas universitarias, o sea, no sólo más, muchísimo más que en toda la historia de Venezuela, sino tal vez también de toda América Latina hasta el siglo XIX.

Si ese hecho fuese único, ya sería bastante para caracterizar un cambio, una transformación social. Pero en estos sesenta años no se ha quedado allí. Hay que señalar varios aspectos que, muchos de ellos ligados a los avances políticos, no son necesariamente sus consecuencias inmediatas. Por las limitaciones de espacio, nos contentaremos con enumerar apenas tres.

1) La homogeneización del patrón cultural. Ni en la lengua, existe ya en la práctica un habla «cumanesa» y un habla «valenciana»: tan sólo es hoy relativamente fácil reconocer a un zuliano del resto de los venezolanos. Sobre todo, no existe la diferencia en el habla según la clase social: los «señores» y la «chusma» hablan para bien y para mal la misma lengua, socialmente indiferenciada.

2) En sus costumbres, o sea lo que suele llamarse su «moral», el venezolano de hoy es en cierto modo más libre, o cuando menos más abierto, más decrispado en sus relaciones sociales. Hace sesenta años, hasta los jóvenes de pantalón corto usaban corbata y sombrero (la moda era la pajilla). Una mujer divorciada era puesta al margen de la sociedad, como por lo demás lo estaban todas, reducidas al estrecho ámbito de su casa.

3) Si hemos citado esos dos casos es porque no sólo son típicos, sino que son los más importantes: la invasión de los jóvenes y de las mujeres a los espacios hace sesenta años reservados a los adultos del sexo masculino, significó una verdadera revolución en las costumbres.

Y como sucede que los jóvenes son la mayoría de nuestros habitantes; y por el poder real que pueden llegar a tener las mujeres en una sociedad que lo reconozca, por la razón o por la fuerza del número, los hábitos que trae esa mayoría se extienden al conjunto social, al punto de darle sus características. Para bien y para mal, entonces, la sociedad venezolana de hoy está impregnada de efebolatría: toda acción política o cultural va dirigida a conquistar a los jóvenes. Eso abre, como todo cambio, perspectivas positivas y negativas.

La primera de las positivas ha sido su *politización* en los primeros años de este lapso de sesenta años sobre el cual estamos reflexionando; la segunda su *despolitización* de los últimos años. El primero hecho de esperanzas, el segundo de desilusión. Y de la misma manera, tiene esa situación dos perspectivas abiertas: o se deja que la juventud se hunda en la despolitización, y en resumidas cuentas se desinterese del país, o se busca reconquistarla mediante una profunda reflexión autocrítica, y su acción correctiva necesaria.

APUNTES SOBRE LIDERAZGO E HISTORIA

Uno

Lo que sucedió en la *ci-devant* Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inmediatamente después de la renuncia de Mijail Gorbachov no era tan lejano ni tan extraño como pudiera parecer a quienes apartan siempre del diario la sección internacional, como otros lo hacen con la deportiva. La confrontación Gorbachov-Yeltsin no era una oposición personal (aunque también lo sea: la política no se hace con ángeles ni con máquinas, sino con hombres) sino que puede ilustrar con claridad la diferencia que existe entre un líder histórico y un líder político. Gorbachov es un líder histórico que, llegado el momento decisivo, equivocó la táctica y se lo tragó la política. Yeltsin es un brillante líder político en quien nadie vio entonces un líder histórico, pero eso no puede decirse nunca, o casi nunca, por adelantado.

Dos

Un líder histórico puede o no gobernar. A veces puede ser derrotado estruendosamente, y hay casos, como el de Gorbachov, en que resulta más grande en su derrota de cuanto lo hubiera sido en

una victoria circunstancial. Mijail Gorbachov no fue vencido por Boris Yeltsin, que en gran parte fue creación suya: fue derrotado por las mismas fuerzas que desencadenó. En el momento de hacerlo, no sabía seguramente cuál sería su destino, o mejor dicho, que su destino sería el que finalmente fue. Pero supo jugar el juego, salir de escena con grandeza. De él se puede decir lo que William Faulkner dijo alguna vez de la soledad del artista: que más grande es su victoria cuanto mayor es «el esplendor de su derrota». O sea, en un caso como en el otro, la soledad del vencido.

Al decir que un líder histórico puede o no gobernar, lo hacemos a conciencia de que esto último es excepcional. La diferencia entre un simple líder político y un líder histórico es que el primero puede ser buen o mal gobernante; mientras que, una vez aparecido el líder histórico, una vez que asume su papel y sobre todo, una vez que cumple su destino, la vida de sus contemporáneos ya nunca será la misma. Y esto sucede –excepcionalmente, repitámoslo– incluso cuando ese líder histórico nunca llega a gobernar.

Tres

Tal vez algunos ejemplos sirvan para dejar clara nuestra idea sobre el particular. Antonio Leocadio Guzmán entre 1840 y 1846, el «Mocho» Hernández hacia el final del siglo, nunca llegaron a gobernar; y si bien se impone limitarlos temporalmente porque a ambos les faltó grandeza (a Antonio Leocadio reciedumbre moral y al «mocho» talento), no cabe mucha duda de que influyeron más en la historia y en la vida de los venezolanos de su tiempo, y de los que siguieron, no ya que pobres comparsas a lo Ignacio Andrade o Julián Castro, sino incluso que dominadores como José Tadeo Monagas o Joaquín Crespo o de gobernantes «buenos» como Soublette. De la misma manera, no porque se lo haya tragado a veces la *politique politicienne* deja de ser Jóvito Villalba mucho más importante y decisivo para la historia de los venezolanos que un Leoni, un Medina Angarita, un Herrera Campins, un Lusinchi. No es ni siquiera necesario que sea un dirigente muy popular y con gran arrastre de masas, porque no lo fueron siempre ni Betancourt antes de 1945, ni Villalba después de 1936 y hasta 1952; ni Caldera hasta 1946; ni lo ha sido nunca mucho Teodoro Petkoff.

Tampoco los define una prolongada estancia en Palacio: los dos ejemplos clásicos son el de John Kennedy, a quien no fue sólo su trágica muerte lo que lo convirtió en mito, sino la proposición de nuevos horizontes para su país; y Pierre Mendès-France, quien en los mezquinos siete meses de su paso por el gobierno demostró que Francia necesitaba y aceptaba un nuevo programa y una nueva perspectiva para salir del pantano en que la habían hundido la politiquería y el clientelismo.

Cuatro

Lo ideal, por supuesto, es la combinación del líder histórico con el líder político. Y que ambos puedan resumirse en el gobernante. El ejemplo habitual es Rómulo Betancourt. El otro es Rafael Caldera. Lo que los hizo tales no es sólo la percepción del nuevo país, su diagnóstico, sino sobre todo haberse dado cuenta de cuál era la fórmula que mejor convenía para curar al viejo de sus males y para edificar este nuevo sobre las cenizas de aquel. El programa de ambos (que se puede resumir en un sustantivo: democracia) era muy parecido, con las variables de rigor por la formación, las fuerzas a que apelaron inicialmente y hasta el carácter de cada uno.

Pero había algo en lo cual no eran parecidos, sino idénticos: la sociedad democrática que proponían (o que paulatinamente fueron proponiendo, pues cada cual traía pegados sus pañales de radicalismo marxizante y de conservatismo católico) pasaba por la fundación, crecimiento y fortaleza de un partido, hasta que pudie-

se ocupar por lo menos la mitad de la escena política. Para ello, debían comenzar con dos firmes negaciones. La primera era a demonizar el partido, lo que durante veinte años (no exactamente desde 1908, sino más bien desde 1913) había practicado Gómez. La segunda, a confundir partido con armas, a crear un partido armado.

Cinco

Eso llegó a ser tan importante, que alguna vez hemos llegado a pensar que si Rómulo Betancourt hubiera muerto el 17 de octubre, la noche antes del golpe, lo fundamental de su obra ya estaba cumplido: la creación de «Acción Democrática», su implantación en todo el país y lo más importante de todo, su reconocimiento por la «otra» institución, hasta entonces la única, el Ejército. Reconocimiento efectivo en la invitación que le hizo para participar en una conjura.

Al aceptarla, AD renunciaba a una parte sustancial de su condición de partido político, y se volvía conspiradora; al proponérselo, el Ejército baja de su pedestal, se embadurnaba de política de una vez y para siempre. En ambos casos se debilitaron moralmente pero se fortalecieron políticamente; en adelante, necesitarán el uno del otro, como la pierna izquierda de la derecha. La escogencia que hicieron se reveló tal vez perversa, pero no por ello menos necesaria. En todo caso, histórica.

Con todo el 18 de octubre es relativamente accidental: hubiera podido fracasar. Lo importante había arrancado por lo menos desde 1936. Era el programa de toda la Venezuela antigomecista, y era la decisión de ponerlo por obra a través de organizaciones cuya forma sería la que conocemos actualmente.

Hoy, se dice, esa forma está agotada. Y lo está porque su paradigma, el partido leninista, acaba de ingresar a ese infame «basurero de la historia» que Trotsky auguró a sus rivales en 1917. Con la

avidez mono-importadora que es la nuestra desde siempre, hay entre nosotros demasiada gente dispuesta a convertirse en el sepulturero del partido político.

Seis

Entre ellos hay de todo, desde el viejo odiador de partidos, que gusta repetir fuera de contexto la proclama final del Libertador, hasta los pescadores de río revuelto, pasando por los desilusionados de buena y mala fe.

Y por supuesto, con la ingenuidad de la ignorancia o con la ignorancia de la ingenuidad, los hay que están dispuestos a embarcarse desde ya en la *Pinta*, la *Niña* y la *Santa María* para descubrir nuevas organizaciones que nada tienen que ver con el partido político, pero que se parecen a América hasta en el lenguaje florentino de Américo Vespucci.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la historicidad de un líder? Hace medio siglo, hubo quien supo intuir que era la fundación de los partidos políticos modernos lo más importante. Hoy tal vez estemos en el otro extremo del balancín.

Pero seguir la corriente de un movimiento pendular no es cosa de líderes históricos: ni siquiera de líderes políticos dignos de tal nombre. Si el partido político ha llegado al final de su carrera en Venezuela, y en el mundo, hay que tener el coraje de decirlo, si se cree así.

Pero aquel famoso *horror vacui* no es sólo de la naturaleza, sino que también lo siente el poder. Quienes quieren enterrar al partido político deben decir por qué cosa piensan sustituirlo. Y que no vengan después a parirnos el ratón de un partidito «nuevo» al estilo de aquellos efímeros e insustanciales FND de Uslar Pietri o FDP de Wolfgang Larrazábal.

CUATRO APUNTES SOBRE LOS PARTIDOS

I. Que los muertos que matéis no gocen luego de salud

En 1936, se sale de 35 años de dictadura. Una sola voz recorre Venezuela: hay que acabar con la más espantosa lacra de la tiranía, la corrupción; y al mismo tiempo, dar al pueblo la ocasión de expresarse a través de elecciones generales sin trabas. Para ello se constituyen entonces por primera vez partidos políticos, todavía por supuesto con pañales y andaderas. En 1992, una sola voz recorre Venezuela: hay que acabar con la más espantosa lacra de la democracia, la corrupción, y al mismo tiempo, dar al pueblo la ocasión de expresarse a través de elecciones generales sin trabas (es decir, sin partidos).

¿Es correcto el paralelo? Es demasiado fácil para no producir desconfianza. Sin embargo, la actual situación de descrédito generalizado de los partidos, su repudio por gruesos aunque indeterminados sectores de la población, aunados a la prédica tradicional en su contra, hacen que sea fácil dar el salto, y se llegue a adoptar el paralelo, no sólo en la calle, sino también entre la *intelligentsia*, tácitamente las más de las veces, expresa en algunas; por convicción profunda en los menos; por auténtico y comprensible desencanto de un viejo amor en otros; por simple moda, en los más.

Por nuestra parte, no vamos a desdeñar el paralelo ni a encararlo en forma polémica, señalando los horrores de una dictadura y cantando las perfecciones de la democracia. Razonaremos en torno a una sola idea: la dictadura significa unidad, la democracia significa pluralidad (no tengo inconveniente en cambiar esta última palabra por otra menos popular: significa *división*).

La unidad es lo propio de una sociedad militar; la pluralidad es lo propio de una sociedad civil. Cuando la primera acepta la pluralidad, es porque se ha impregnado de civismo; cuando la segunda clama por la unidad es porque se ha contaminado de militarismo. Si la sociedad militar es unitaria, unicista, única, es porque el Estado es único: él es, como decía Tomás Hobbes, «la soberana potencia». Si la sociedad civil es plural, contradictoria, divisiva, es porque existe, o sea que ella es el contrario del Estado, no su reflejo ni mucho menos su sosías. Lo propio de la primera es la fuerza, y se suele encontrar reflejada en su poder preferido, el Ejecutivo; lo propio de la segunda es la persuasión (o sea, pese a la mala fama de esa palabra, la *retórica*) y su poder preferido es el Parlamento (que según el DRAE, viene de *parlar*). El Ejército es el brazo armado del Estado; cuando ese brazo se vuelve también cabeza, lo toma (y generalmente lo hace en la forma como la fuerza suele manifestarse: con un *golpe*). Estamos entonces en presencia de un *gobierno militar*. Finalmente, cuando la sociedad logra poner a uno de los suyos a la cabeza del Estado y sobre todo, hace que se le someta la fuerza militar, tenemos un *gobierno civil*.

Lo sé, todo lo anterior suena demasiado a pedantería profesoral. Pero en los momentos de crisis, cuando las cartas se embrollan y algunos –demasiados– tratan de que se embrollen más, nunca está de más recordar cosas resabidas, a saber que quien propicia una sociedad sin partidos (dirigida por «independientes» o por un partido único) está propiciando *nolens volens* una sociedad y un gobierno militares. Aborrezco el tono profesoral y estoy dispuesto

a aceptar que me equívoco desde la primera hasta la última letra. Pero (como no me canso de repetir a mis alumnos) la mera afirmación no es prueba. Por lo tanto, espero que me den, en el mundo contemporáneo, ejemplos de lo contrario. No soy ambicioso: me conformo con uno.

En el párrafo anterior, pido que me den ejemplos en el mundo contemporáneo. Porque es muy posible que sí se encuentren yendo hacia atrás, antes de la aparición del concepto y de la realidad misma de sociedad civil. En verdad, la «partidofobia» es una actitud típicamente *reaccionaria*. No estamos empleando este último término, como es habitual hacerlo, como un insulto político. Le damos el mismo sentido de Cioran al estudiar el pensamiento de Joseph de Maistre. Lo característico de ese pensamiento es el sentimiento de la *Unidad* perdida y el deseo de su reconstitución.

¿Era entonces Simón Bolívar un reaccionario? En él se ligan dos cosas. Como aquél es un sentimiento recurrente, con Rousseau esa unidad bajó del cielo a la tierra. Se laicizó, se convirtió en *voluntad general*. Y Bolívar era rousseauniano «de hueso colorado»: era jacobino. Pero además, el Bolívar de la proclama final era un Bolívar *reaccionario*. Si los «bolivareros» quieren quemarme, deben hacerlo primero con Gil Fortoul, pues la expresión es suya. Por supuesto que hay un tercer elemento, pero eso escapaba a su voluntad y es el hecho de que, aislando de su contexto las frases del Libertador (o de cualquier otro) se le puede hacer decir lo que nos dé la gana. La prueba la tuvimos en 1983 cuando, con motivo del Bicentenario, se descubrió que Bolívar había previsto todo, desde la ecología hasta el turismo, pasando por el desarrollo de la aviación. Y debemos dar gracias a Dios de que no nos gobernaba entonces un narcotraficante como aquel general Meza de Bolivia, porque se hubiese encontrado alguna pluma para demostrar que «Mi delirio sobre el Chimborazo» era nada más ni nada menos que una *trona* de la vieja y noble coca...

Dejemos eso, y vengamos a nuestros días. El desprestigio de los partidos es un hecho contemporáneo: su desaparición definitiva la señaló el carrillón del Kremlin cuando tocó a doble por el partido de Lenin.

Hay en todo eso dos mentiras, o si se prefiere dos medias verdades. Una es que se hayan desprestigiado los partidos. Otra que el partido de Lenin haya muerto con la URSS. Creemos posible demostrar que el desprestigio no es de los partidos, sino *del partido leninista*. Y que la muerte del Partido Bolchevique no se produjo ahora, sino el 7 de noviembre de 1917 (la Revolución «de Octubre» del calendario juliano) con la llegada al poder de los leninistas.

Quienes *sinceramente* aborrecen hoy el partido político (o sea que esto excluye a los partidarios abiertos o embozados de la dictadura militar), cuando se les pide una alternativa al mismo, si no se reducen a «un no sé qué que quedan balbuciendo» (y que nos perdone San Juan de la Cruz por meterlo en estos bretes tan terrenales), terminan pariendo el ratón de otro partido. Un partido «diferente», pero un partido al fin. En verdad, lo que está de capa caída hoy en el mundo, y en Venezuela en particular, es el partido leninista.

Sobre todo, sus características organizacionales, esas mismas que su inventor, Vladimir Ilich, bautizó como «centralismo democrático», o sea «aceite vinagrero». En pocas palabras el autoritarismo, la verticalidad y el elitismo (la «cogollocracia») en su dirección; la disciplina «a machamartillo» (como la llamó Betancourt antes de adoptarla) y su cerrazón sectaria y clientelar. No en pocas sino en una palabra: la *militarización* de esos partidos.

Ese partido no murió en la URSS hace pocos meses, sino hace setenta años largos. Porque ese tipo de partido es el ideal y tal vez el único posible para luchar bajo un régimen tiránico, porque es una organización de conspiradores. Por lo tanto, perdió su razón de ser al tomar el poder, porque no iba a conspirar contra sí mismo. Pero no se disolvió. Uno, porque se convirtió, confesamente, en una conspiración mundial: es la Tercera Internacional Comunista. Dos, porque si, antes, como parte de la sociedad, tenía cosas que ocultar del Estado autoritario, ahora, como Estado, tenía cosas que ocultar de la sociedad. La primera y más importante estaba en la base misma del régimen: que la «dictadura del proletariado» se iba a convertir en «tiranía del proletariado», primero una abstracción, luego una concreción: el remiso camarada Lenin primero, el consentidor camarada Stalin, después.

Traslademos eso a Venezuela: no es por casualidad que bajo la tiranía de Gómez, sea el partido leninista el primero en formarse. Tampoco que bajo el régimen de López Contreras, con un pie en el gomecismo y el otro en la democracia, Betancourt haya propuesto un partido semileninista, con un pie en el leninismo y el otro en la socialdemocracia. Al hacerse el partido más fuerte y exitoso, todos los otros buscaron imitarlo. Pero como desde hace 34 años ininterrumpidamente no hay de qué ocultar la actividad del partido, éstos dejaron de ser organizaciones de conspiradores para convertirse, unos más otros menos, en organizaciones de cómplices. La solidaridad se ejerce entonces no para proteger a los camaradas de la policía zarista o gomecista, sino de la policía pura y simple: para proteger a los compañeritos corrompidos o, como se prefiere decir ahora, corruptos.

Como sea, se nos dirá, hay que acabar con el partido. ¿Para qué? ¿Para que se forme otro, con nombre distinto que al cabo de cierto tiempo caiga en lo mismo? Peor aún: hay otra manera de acabar con los partidos «corruptos» y esa manera es prohibirlos. Pregúntenle al comandante Chávez cómo se las arreglaría. Lo que es muy seguro es que ésa sería la mejor manera de prolongarles la vida, porque, pasada la dictadura militar, resurgirían lavados por el martirio para volver a las andadas, sin haber tenido tiempo ni voluntad de cambiar. De lo que se trata entonces no es de acabar con los partidos sino de transformarlos.

II. Ha muerto el Rey-Partido: ¿Viva el Rey-Partido?

La semana pasada, el calumniadísimo duendecito del taller, se comió casi un párrafo, el final de mi artículo. Y dejó como remate una frase («De lo que se trata entonces no es de acabar con los partidos sino de transformarlos») que así, cortada del resto, parece un mal plagio (de la música, no de la letra) de aquella conocida tesis de Marx, sobre Feuerbach, los filósofos y todo eso. Pero no hay mal que por bien no venga: esto me sirvió para comprobar que hay alguna gente suficientemente desocupada (por desempleo, por rentas, por prisión, por jubilación o por burócrata) como para leerme y hasta para estar en desacuerdo conmigo. Y en segundo lugar, me da la oportunidad de precisar algunas ideas.

Sobre todo, dos de ellas, que me fueron expuestas en forma de pregunta o de rotunda afirmación. Primera: ¿no hay sitio para otro partido en Venezuela, sin los vicios de los existentes, que sea realmente diferente a ellos y por supuesto, los mande al museo como a partir de 1936 entraron allí godos y liberales? Segunda: es absolutamente imposible que los partidos se reformen ellos mismos. Teórica, organizacional y humanamente están exhaustos: hasta hombres de buen natural, se muestran con ellos partidarios de la eutanasia.

Claro que la sociedad venezolana, como cualquier otra, acepta y acoge con facilidad no uno, sino mil partidos más. No estamos saliéndonos por la tangente con una ironía: no hablamos de «mil» en el espacio sino más bien en el tiempo: uno después de otro. Y uno más «diferente» que el otro. El problema es que nadie nace alcohólico, drogadicto o tabaquista; nadie nace ladrón ni asesino sistemático.

Y ni siquiera el más sabroso y comprensiblemente adictivo de los vicios, la lujuria, empieza a tentar a uno sino después de cierta edad (ni siquiera ese niño prodigio del erotismo, Arthur Rimbaud, quien juraba traerla en las venas por sus ancestros galos y además la exaltaba como una pasión *magnifique*). De igual manera, ningún partido nace corrompido, ni clienteloso, ni «encogollado». No lo han sido Acción Democrática, ni Copei, ni el MAS, para no hablar de los más pequeños y recientes.

Y antes de seguir adelante, quiero hacer una digresión: no lo han sido *ni lo son*. Vamos a emplear las cifras de confesos militantes (es decir, los que participan en empresas tan arriesgadas como votar en unas elecciones internas) de un solo partido, que además es tomado hoy como la encarnación demoníaca de todos los vicios: hablamos de Acción Democrática. Eso hace setecientos mil venezolanos. Daremos, para que nos cuadren las cuentas, otro tanto a Copei. El MAS no ha hecho que sepamos tales alardes, pero tomando en consideración que en los últimos comicios, su votación llegó hasta setecientos mil, y que tradicionalmente, en los partidos de su origen, la cercanía entre el elector y el afiliado es más grande que en los otros, se puede usar esa cifra, porque en los tres casos las recortaremos: todo partido tiende a inflar el número de sus militantes y, si posible, de sus votantes. Dejemos ese total en un millón quinientas mil personas para los tres partidos.

Si en este país hay millón y medio de ladrones, corrompidos, traficantes, delincuentes comunes, en fin, carne de presidio, Venezuela es definitivamente una letrina: ni siquiera el diablo se va a encochinar llevándosela. Sin contar que (pese a que los periodistas, por mor del disparate, los llaman «antisociales») los delincuentes andan siempre en bandas y tienen cuando menos un cómplice, lo cual llevaría la cifra a tres millones.

En tales condiciones, no veo cuál sería la inquietud por estar formando partidos nuevos o reformando los viejos: basta con importar algunos *capos* para que nos organicen la sección venezolana de la *Cosa Nostra*. También hay la posibilidad de que seamos desde ya la nación más feliz de la tierra, si, como dijo hace unos siglos aquel Mandeville en su *Fábula de las abejas*, los vicios privados terminan por producir virtudes, y sobre todo bienestar, públicos.

Pero aceptemos que los partidos nombrados, y los otros también, sean sólo pandillas de delincuentes. ¿Quién nos garantiza que un partido «nuevo y diferente» no va a caer después en lo mismo? ¿Que lo propongan hombres honestos? Hasta el presente no se conoce un solo ladrón que no haya sido honrado hasta el preciso momento en que dejó de serlo; ni de una sola virgen que... bueno, pero no vayamos a recargar este artículo de ejemplos.

Aceptemos igualmente que un *currículum* de honestidad sea un buen comienzo, el mejor posible. Por lo general, todos los partidos nuevos, como todas las empresas nuevas, son formados por jóvenes; o sea por quienes no han tenido tiempo ni ocasión de contaminarse. Si están actuando en un universo político donde la corrupción es el aire que se respira, tienen dos opciones: o eliminan los otros partidos, o se vuelven como ellos. Se conocen mil versiones de la parábola de la manzana podrida que corrompe el cesto entero; pero hasta ahora no he escuchado ninguna donde sea la manzana buena la que haga regresar a las otras de su hedionda condición putrefacta.

Todo el razonamiento anterior podría llevar a la conclusión, que (dicen quienes han pasado por allí) está inscrita en letras de fuego a las puertas del infierno: *lasciate ogni speranza*. Porque mientras existan los partidos actuales con sus vicios, no hay lugar para otro que no vaya a ser «más de lo mismo»; y entre esos vicios está el de la imposibilidad absoluta de reformarse desde adentro.

O sea, de reformarse pura y simplemente, de transformarse: la serpiente se muerde la cola. Para remate de todo esto, diré que yo tampoco creo que los partidos puedan reformarse por sí solos desde adentro. ¿Y entonces? Que mis lectores me excusen, pero en la línea siguiente voy a escribir algunas expresiones que la moral y las buenas costumbres de hoy día han convertido en obscenidades. Con el perdón, pues, de las malas palabras, pienso que a los partidos hay que *nacionalizarlos, estatizarlos, socializarlos.*

Trataré de no ofender más a mis lectores, volviéndolas a emplear, y confieso sentirme como Víctor Hugo después de que reveló en *Les Misérables* la verdadera respuesta de Cambronne en Waterloo. Pero la base de mi razonamiento no puede ser más simple: si aceptamos que esos partidos han crecido gracias al clientelismo y la corrupción, es decir, gracias a los dineros públicos, ¿por qué dejar que se comporten como corporaciones privadas? ¿Por qué no obligarlos a someterse, por la ley, al escrutinio público?

Hay pues que acabar con el *partido-ostra*, con la organización cerrada, e imponer la organización abierta en su gestión. Para emplear la más ramplona de las metáforas (en el estilo de algunos resucitados jorungamuertos del idioma), que de la ostra del partido leninista nazca la venus boticelliana de la nueva organización, mostrándose desnuda a todas las miradas.

Resumiendo: para que florezcan partidos nuevos, hay que acabar con la plaga que ha infectado los partidos viejos y que contaminará sin remedio a los recién llegados. Esa desinfección debe hacerse necesariamente desde afuera, por vía de acción popular; si es posible con una fumigación desde el aire. Si los partidos actuales son incapaces de resistir el tratamiento y mueren envenenados, que lloren los ambientalistas, porque yo no lo haré.

A fin de no quedarnos en las generalidades, cerraremos estas notas con algunas proposiciones para cambiar esos partidos. Pueden ser erradas o disparatadas, pero por lo menos alguien las hace. Hay sin embargo una que no incluimos en la enumeración, porque debe estar en cualquier propuesta o grupo de propuestas: *deben imponerse desde afuera, por presión popular.*

1. Ningún registro de militantes será secreto. Todo afiliado a un partido, autoriza por el mismo hecho de su afiliación a que su nombre y cédula sean registrados igualmente en el organismo correspondiente del Consejo Supremo Electoral, y puedan ser consultados por cualquier ciudadano.

2. Los cargos de presidente, secretario general, de finanzas del partido, serán electos por votación abierta, controlada por el CSE, lgualmente lo será el candidato presidencial, como los parlamentarios del partido.

3. Los cargos de dirección de un partido son incompatibles con cargos de dirección en organizaciones empresariales, sindicales, gremiales, religiosas o militares. La única excepción serán las organizaciones deportivas.

4. Existirá por ley un comité de ética supra-partidos, electo anual o bienalmente, en forma a determinar. Se ocupará de los casos relativos a las direcciones nacionales; los partidos deberán nombrar sus comités regionales de ética. Las decisiones del Comité Nacional de Ética, no podrán ser revocadas por ninguna instancia partidista y sólo ella misma podrá reconsiderar sus decisiones, por vicio de forma o por elementos nuevos de prueba.

5. La organización de la secretaría de finanzas es cosa estrictamente interna de los partidos, pero el origen de esos fondos debe ser público: se creará entonces una Contraloría externa que lo examine y establezca si ese origen es legal.

6. El Estado financiará las campañas electorales, estableciendo su duración y ámbito. Los partidos podrán recibir contribuciones individuales que no pasen de una cifra a determinar por ley y de acuerdo con el valor de la moneda, pero que en todo caso no sea nunca mayor del salario mensual de un obrero calificado. A partir de allí, no podrán recibir contribuciones sino a través del Consejo Supremo Electoral, quien podrá rechazarlas si considera que no tienen un origen lícito y las hará públicas una vez aprobadas.

Esos contribuyentes especiales deberán comprometerse a no contratar con el Estado en el quinquenio siguiente, si gana el candidato que han apoyado financieramente.

7. Todo esto se aplicará a los partidos existentes y a los nuevos, así como a los grupos de electores.

Si un partido o grupo de electores se niega a acogerse al reglamento anterior, es libre de hacerlo. Pero igualmente deberá renunciar al financiamiento estatal de sus campañas. Y en cuanto al origen de sus fondos, no podrá sustraerse a su escrutinio público: el desacuerdo con la ley no excusa de su cumplimiento.

¿Bastará eso para reformar a los partidos, para acabar con la corrupción? No seamos tontos: se necesita la ignorancia, el primitivismo de un Ezequiel Zamora, para pretender que una ley (o en su caso, el establecimiento de una constitución federal), pueda, más que impedir aquello, hacerlo imposible. Los partidos le darán la vuelta a todo eso para volver a corromperse. Lo único que puede garantizar lo contrario es que dejemos el hábito de votar una ley, elegir un presidente o unos congresistas y después desentendernos de ellos, hasta dentro de cinco años. O hasta que cualquier empistolado y emboinado tocador de cuatro nos ponga de carreritas.

III. Partido civil y partido militar

En 1952, en la Cárcel Modelo, las autoridades empleaban algunos inofensivos raterillos para hacer la limpieza general en las celdas de los prisioneros políticos. Un día, luego de cumplida su labor, el guardia los retiró y pasó la llave al candado. Sin darse cuenta, había dejado encerrado a uno de los «comunes». Éste llamó a sus compañeros para prevenir al guardia, pero aquéllos, mientras tanto, comenzaron a chotearlo: «¡Adiós cará, ahora eres político!». Todo remató con una frase que ha conocido una relativa celebridad, pues al ser «rescatado», el muchacho respondió a las bromas diciendo: «¡Yo seré ladrón, pero no político!».

Este episodio tiene todas las características de una leyenda, pero es verdad: yo fui testigo del suceso, frente a mí se pronunciaron esas palabras; y en esa misma sección de la cárcel estaban entonces Luis Herrera Campins, Luis Piñerúa Ordaz y Jaime Lusin-

chi, que acaso también la escucharon o en todo caso, a quienes la salida le fue comentada en el momento mismo, pues durante todo el día reímos con ella. Si lo recordamos ahora es porque, curiosamente, esa parece haber terminado por ser la filosofía de los partidos clientelares. Así, a José Ángel Ciliberto se le reintegró hace tiempo con todos los honores al seno de un partido del cual Luis Raúl Matos Azócar acaba de ser expulsado definitivamente.

El primero fue acusado –con razón o sin ella, ese no es el punto– de un delito común, la apropiación indebida; el segundo es reo de un delito político: disentir del llamado «paquete económico» y de sus ejecutores.

No vamos a hacer una crónica moralizante, a quejarnos de que en esta sociedad diabólica triunfan los malos y pierden los buenos. Desde que el mundo es mundo, las cosas son así: con la bondad se va al Cielo, pero no se llega a Palacio. Y ni siquiera se tiene segura la felicidad en el otro mundo con sólo ser bueno. Así, cuando Luzbel y sus paracaidistas le entraron a plomo a La Casona de Dios Padre, el Arcángel Miguel no los enfrentó con buenas palabras: tuvo que echarlos de allí a plomo limpio, e incluso suspender las garantías celestiales formando cadena con la frase ritual: «¿Quién como Él?» (Apocalipsis: XII, 7).

El problema hay que situarlo entonces en otro ámbito (aunque sólo sea para evitarnos ir al Cielo, sitio al que definitivamente es tentador renunciar cuando uno sabe que ahora deberá soportar el fast-food teológico del beato Escrivá de Balaguer). No se trata de que en el Partido del Pueblo se tengan dos pesos y dos medidas, y de que el delito tenga pena o absolución según quien lo cometa. En verdad, se trata de dos delitos diferentes. Ciliberto fue acusado de atentar contra la *ética* partidista; Matos Azócar lo hizo contra la *disciplina* partidista.

No se crea que estamos jugando el papel de *advocatus diaboli* si decimos que AD tiene razón de expulsar a Matos Azócar y de

reintegrar amorosamente a su seno a un Ciliberto ni siquiera lavado de sus culpas por el arrepentimiento. Porque este último, aun siendo culpable, perjudica sólo parcialmente al partido al reducir su credibilidad y dificultar así su relación con la sociedad. Pero aquél se ha enfrentado a lo más sagrado que el partido tiene, su cohesión interna, esa «unidad monolítica» que ante la tumba de Vladimir Ilich juró el camarada Stalin defender «como la niña de los ojos».

Tampoco estamos resucitando al viejo demonio georgiano para tratar todo aquello en clave de ironía. La de Stalin –en verdad, la de Lenin– era una concepción del poder y del partido muy coherente y sobre todo, que demostró durante tres cuartos de siglo ser bastante eficaz, hablando en términos estrictamente políticos: eficaz para la toma y la conservación del poder. Esa concepción es la del partido como una organización militar.

No vamos a entrar en detalles de un asunto sobre el cual hemos escrito bastante. Nos bastará con una frase: para Lenin, lucha de clases quería decir *guerra de clases*. Las guerras se ganan con un ejército y para ello formó el suyo, el partido bolchevique. Como en todo ejército, la disciplina es fundamental. Cierto, que sea fundamental no quiere decir que sea *lo* fundamental. Pero a medida que la discusión política va perdiendo terreno en un partido con esas características, la disciplina priva por sobre todo. Es así como en todas partes del mundo, los militantes del partido comunista que se atrevían a disentir de la política de la dirección, por lo general no encontraban oposición a sus tesis, sino el reproche de que el crítico no hubiese seguido para hacerlo «los canales regulares» del partido.

¿Por qué el partido leninista (y no estamos hablando sólo del bolchevique) deriva fatalmente hacia eso? Durante mucho tiempo, la moda inaugurada por los trotskistas fue explicarlo por la muerte de Lenin y el irresistible ascenso de Iossif Stalin. No poca gente piensa en Venezuela que si Betancourt estuviese vivo, esas

cosas no estarían pasando en su partido. Esa especie de «culto a la personalidad» al revés es poco seria. La explicación es menos personal, y puede encontrarse quizás en la estructura del partido, en su forma. Hecho para la guerra y la persecución, el partido podía concentrarse en reforzar su aparato interno, porque su relación con la sociedad era muy pequeña, y mayormente en términos de enfrentamiento. No se olvide que el partido era una organización de conspiradores en busca del «eslabón débil» que le permitiese «tirar la parada», si se nos permite mezclar así leninismo y carujismo.

Dicho sea de paso, viendo las cosas con ese lente, la participación de «Acción Democrática» (partido leninista si bien no marxista) en la conspiración del 18 de octubre es menos casual de lo que se piensa; es menos una «desviación» militarista de su vocación civil que una consecuencia lógica de su propia filosofía organizacional: fue el encuentro entre dos organizaciones militares, una ilegal pero con armas, la «Unión Patriótica Militar», y otra legal pero sin ellas, «Acción Democrática».

Al encuentro de una sociedad relativamente abierta, democrática –previa a su arribo al poder, pero ampliada luego, y gracias a AD– lo más normal hubiera sido que la relación con esa sociedad hubiese pasado al primer lugar, y el cuidado del orden puertas adentro, a un segundo plano. Por razones que no tocaremos, pues son muchas y diversas, «Acción Democrática» continuó dándole tanta importancia a una cosa como a la otra.

A esto no fue ajeno el propio Betancourt, quien podía ser flexible y hacer concesiones en otros, pero fue siempre intratable en dos terrenos: en la relación con la sociedad, el ético (la lucha contra la corrupción); y adentro del partido, la disciplina (aborrecimiento de las corrientes internas). Pero casa de dos puertas, difícil de guardar. Era imperativo escoger entre las dos opciones: o se abría, con la relación partido-sociedad, la puerta de delante, o se lo hacía con la puerta de atrás, la «unidad monolítica» del partido.

El partido leninista «segregó» la solución: separar lo organizativo de lo político. Isaac Deutscher llamaba a eso «el error histórico» de los trotskistas.

Pero dejemos de lado las citas: es lo que en «Acción Democrática» señala la evolución de la Secretaría General desde las manos de Rómulo Betancourt hasta las de Luis Alfaro Ucero, de quien uno se pregunta si, aparte del Mantilla, habrá leído alguna vez un libro en su ya no tan corta vida. Esa separación, además, no es un error histórico: es un disparate, porque si la guerra fuese solamente organización de la milicia, todavía estaríamos peleando como los romanos, sin olvidar la faldita. Para plantearlo en los mismos términos militares en que los partidos lo han hecho, es como tener el ejército más disciplinado del mundo, pero que no sepa (y sobre todo no quiera) pelear.

Todo lo anterior no lleva a, sino que prácticamente impone, dos reflexiones (no queremos hablar de conclusiones). La primera es que si los partidos dan de esa forma la espalda a la sociedad, ¿van a ponerse a lloriquear porque se les pague con la misma moneda? La segunda tiene relación con nuestra actitud frente a la intentona del 4 de febrero. Si nos parece aborrecible la actitud de los partidos políticos porque su vocación y su estructura militar los ha llevado a cortarse en tal forma de la opinión de la sociedad, *de mi opinión*, nada más lógico que aborrecer una solución exactamente igual pero además, armada. Desde el primer momento, nos molestó que Chávez y los suyos intentasen imponernos su solución sin dejarnos otra alternativa que seguirlos. O sea, «cogollismo» en estado puro: Chávez se nos presentaba como un Alfaro Ucero emboinado, treinta años más joven y con pistola al cinto.

Desde entonces, no ha demostrado que tenga más en el seso. El parecido se agranda con el hecho de que, después del 4 de febrero, nada nos ha dicho que vaya más allá de aquello. Como siempre tiendo a ver la gente en la forma más positiva, quiero creer que no

quiere decir nada y no, como algunos piensan, que nada tenga que decir. Igual cosa digo de las declaraciones de Álvarez Bracamonte recogidas por una deslumbrada reportera de *El Globo*, quien por el físico le calcula 23 años pero que, por sus declaraciones, representa doce.

Está bien, pero si son iguales, ¿a qué se debe mi reiterada preferencia por un mal gobierno civil antes que un buen gobierno militar? Voy a responder con una parábola. Cuando yo vivía en Londres, pasó por allí mi amigo Aníbal Nazoa. Era junio y sin embargo, se quejaba sin cesar del frío. Al final lo increpé: «No seas cobarde, Aníbal ¡más frío hace en Mérida!». Me dio una respuesta que nunca he olvidado: «La diferencia entre el frío de Londres y el de Mérida es que el de Mérida *se quita*».

IV. Sobre el bipartidismo

El presidente Ramón J. Velásquez declaró que el bipartidismo ha vivido su hora, porque en los comicios de 1993 había cuatro candidaturas con parejo chance. Claudio Fermín le responde que el bipartidismo nunca ha existido en este país, porque el suyo, en otras ocasiones, ha debido enfrentarse a varios partidos y candidatos. Fermín no tiene razón en su argumento; pero por su parte, tampoco el Dr. Velásquez la tiene, tal como la expuso o la recogió el periodista. El bipartidismo existe desde 1945, y quién sabe si antes: en todo caso, es una de las más exitosas invenciones de Rómulo Betancourt. Es cierto que ahora existen cuatro candidaturas nacionales y como sucede al arrancar, con iguales posibilidades, aunque no creemos que mucha gente piense seriamente que en febrero tengamos los venezolanos en Miraflores a Claudio Fermín o a Andrés Velásquez; aunque eso, sólo Dios lo sabe, por ahora...

Pero no en un futuro hipotético, sino en un pasado muy real y demostrado, en 1968 hubo también cuatro candidaturas de las

cuales la menos votada estuvo a unos trescientos mil votos por debajo del ganador, en un total de cuatro millones.

Y sin embargo, eso no mató el bipartidismo, sino que por el contrario, le dio un envión monumental; a partir de 1973, la polarización electoral entre AD y Copei pareció dar una sanción popular, electoral, al bipartidismo. Dejar clara la diferencia entre bipartidismo y polarización no es una discusión puramente semántica; no sólo es importante para comprender un segmento muy próximo de la historia política venezolana, sino para desentrañar la madeja actual y, quién sabe, actuar sobre ella sobre la base de realidades, no de deseos o ilusiones.

Desde que, a finales de 1938, afirmó su poder sobre lo que en aquel entonces era un puñado más bien íntimo de sus seguidores, el PDN, y sobre todo a partir de 1941, Rómulo Betancourt comenzó a trabajar por la creación de un sistema político bipartidista, si bien no lo expresaba de esa manera y acaso no lo tenía bien claro. Entonces lo veía, como era normal, en los términos de gobierno y oposición. Y como todo partido en la circunstancia, buscaba que el suyo fuese la cabeza visible de la oposición; lo cual, siendo como era él también su cabeza visible, equivalía a hacerlo personalmente el jefe de la oposición.

Eso no es ni una posición original suya, ni tampoco la seña de una ambición desmesurada. Todo partido se crea para ser eso en la oposición o en el gobierno. Sólo que en este caso, la fuerte personalidad de Betancourt, y sobre todo su incansable energía y su capacidad de organización hicieron realidad esa aspiración. En cuatro años, logró hacer de Acción Democrática ese partido: era el centro de la oposición, era la oposición. Porque Jóvito Villalba se había quedado sin partido; y Rafael Caldera apenas compartía con Pedro José Lara Peña el dificultoso liderazgo de un grupo, Acción Nacional, al cual nadie le veía mucho futuro, y ni siquiera pensaba que alguna vez llegase a ser un partido de verdad.

Al llegar al gobierno en hombros de un golpe militar, Betancourt se dio cuenta de que una proposición que le había dado tan buen resultado en la oposición, servía también para cuando estaba en el gobierno. Necesitaba una oposición «leal», como la británica aunque sin las pelucas de la aristocracia. La necesitaba para hacerse los dientes en la lucha cívica, porque no podía estarse peleando con la más peligrosa de las oposiciones, la militar, entre otras cosas porque en principio, las Fuerzas Armadas no hacen esas cosas y además porque en ese momento no eran sus enemigas sino sus aliadas.

Entonces surgió Copei, el cual tenía dos ventajas: una, que aceptaba el hecho del 18 de octubre, y nacía así como un partido «octubrista»; y dos, porque era un partido conservador, lo cual le permitía acentuar, sin apoyar demasiado en la tecla, el carácter «revolucionario» del suyo. Sobre todo, le servía en alguna forma de colchón que le evitaba aparecer como partido único civil; y tener que enfrentarse a solas con un partido militar. Pero todavía las cosas estaban muy verdes para que pudiese dar sus frutos esa estrategia (que como todas y al revés de la simple táctica, necesita de tiempo): el partido militar actuó como todo el mundo temía (o esperaba) que hiciese, y el 24 de noviembre de 1948 mandó entre otras cosas a las duchas un fugaz y prematuro ensayo de bipartidismo.

Pasados los diez años de gobierno militar, la intención de Betancourt se hizo más clara, como que de una forma u otra lo había expresado en *Venezuela: política y petróleo*: este país marchaba (o debía marchar) hacia un sistema de dos partidos. Claramente, prefería que el otro polo fuese Copei. No estamos diciendo con esto que Betancourt haya «inventado» Copei: este partido surgió por la fuerza misma de las cosas, entre ellas por tener también en Caldera un líder incuestionado.

Pero no se puede decir que a Betancourt le haya disgustado que su predicción se cumpliese y en todo caso, hizo de necesidad

virtud: el Pacto de Punto Fijo era una especie de *ménage à trois* donde AD mantenía una relación de amor con Copei y a la vez otra de conveniencia un tanto incestuosa con URD (partido gemelo del suyo y por tal detestado), el cual al retirarse del gobierno en 1960, dejó los otros dos disfrutando de una frutal monogamia.

Betancourt armó uno de sus famosos berrinches, con quebradura de pipa y todo, cuando su sucesor Raúl Leoni decidió formar gobierno con el uslarismo y el villalbismo, porque no concebía que se rompiese así una alianza que le había sido tan provechosa. Pero sobre todo, porque era enfrentar traidoramente al betancurismo, borrando el 18 de octubre de la política venezolana. Al final, los acontecimientos le dieron la razón a Leoni, quien remató brillantemente la tarea que Betancourt se había impuesto, al «comerse» al uslarismo y al villalbismo; al dar a Copei la ocasión de darse un «baño de oposición» que nunca es desaconsejable; pero conservando, con el «Pacto Institucional», la posibilidad de que con todo y ser la oposición, continuase repartiéndose con su rival lo que los italianos llaman *il sottogoverno*, o sea la burocracia estatal.

En las siguientes elecciones, el bipartidismo se consolidaba, al ser electo Rafael Caldera presidente de la República. Y tendría su sanción electoral en la llamada «polarización» de los comicios siguientes: los candidatos de AD y Copei obtuvieron en 1973 casi cuatro millones de votos, mientras José Vicente Rangel, candidato entonces del MAS, llegaba dificultosamente a 190 mil; Paz Galarraga, candidato del MEP, superaba ligeramente esa cifra, y Jóvito Villalba, a su vez, superaba escasamente los cien mil. O sea, 550 mil votos magros contra aquella obesa avalancha del bipartidismo intrapolarizado, valga el trabalenguas.

Desde entonces, la realidad ha hecho que lleguen a confundirse bipartidismo y polarización electoral, pero hay una diferencia muy importante, que se prolonga hasta hoy, y es que al revés de lo que sucede en una situación puramente electoral, el partido

que va a la oposición continúa siendo poder, no sólo a través de las «cuotas» burocráticas, sino por el respeto debido a la «leal oposición de Su Majestad».

¿Es eso bueno, es eso malo? En teoría, no es ni lo uno ni lo otro (y ni siquiera todo lo contrario). El bipartidismo ha sido nefasto en algunas partes, como lo ha sido el pluripartidismo en otras. Y en Venezuela misma, ha sido lo uno y lo otro sucesivamente.

Hoy se habla de la muerte del bipartidismo. Sé que lo que voy a decir es casimente un sacrilegio en período electoral, y mucho más si lo dice alguien que nunca ha ocultado su oposición a AD y a Copei. Pero sería bueno que alguna vez dejáramos de confundir nuestros deseos con las realidades. La inmensa mayoría de quienes hablan del fin del bipartidismo están pensando en que eso significa el entierro de AD, siguiendo el ejemplo del APRA peruano. Pero las dos situaciones no son iguales: el APRA llegó al poder después de más de medio siglo de oposición, y la situación general, amén de la incapacidad manifiesta del joven líder que sustituyó al Jefe Máximo Víctor Raúl Haya de la Torre, contribuyeron a hundirlo.

AD, en cambio, ha sido gobierno durante 28 de los 48 años que nos separan del 18 de octubre. Para bien y para mal, los venezolanos somos hoy lo que somos, gracias en no escasa parte a su acción de gobierno. Incluso si uno dijera que sólo ha sido para mal (pero nadie podría sostenerlo seriamente), esa cantidad de años de gobierno crea fidelidades y compromisos, agradecimientos mendicantes y lealtades ciudadanas: al fin y al cabo, el Benemérito General Juan Vicente Gómez gobernó un año menos que los adecos, y todavía hay gente que le prende velas. Pero el problema no es ni siquiera ese. Sino que de nada vale liberarse del bipartidismo adecopeyano para sustituirlo por algún otro que, nacido del rechazo popular al actual, termine siendo «el mismo musiú con diferente cachimbo».

Ni mucho menos para sustituirlo por el no-partidismo de los militares felones y sus hierofantes de proclamada virginidad pero

de canina hambre de escándalos periodísticos. La estructura política venezolana del presente no es mala por ser bipartidista, sino por *no serlo*. El rechazo presente a los partidos, no es tampoco por serlo, si no porque no lo son. Maquiavelo pensaba que así como la monarquía degeneraba siempre en despotismo, y la aristocracia en oligarquía, la democracia también degeneraba en demagogia. Sin llegar al pesimismo esencial del secretario florentino, tal vez debamos pensar cuánto hay de cierto en eso, para vivir en vigilia permanente e impedir que eso suceda.

El partidismo (e incluso el bipartidismo) ha sido una etapa necesaria en el desarrollo de nuestra sociedad civil. Pero los partidos degeneraron, y se han transformado en sociedades de parientes, de compadres, de amigos, de clientes: de cómplices.

En esas condiciones, no es el partidismo (ni siquiera al bipartidismo) lo que se debe combatir, mucho menos exterminar, sino la falta de partidos; de organizaciones que luchen por alternativas reales, no agencias de empleos y contratos. Pero eso no se dará nunca, porque volverán a degenerar. A Dios gracias: porque lo peor que puede suceder a una sociedad democrática es que llegue a instalarse de tal manera en la perfección, que cese entonces de criticar y cuestionar.

¿FIN DE LOS PARTIDOS Y DE LAS IDEOLOGÍAS?

Dudo que, en la reflexión sobre la política e incluso en el lenguaje cotidiano cuando se habla sobre el tema, haya una expresión tan repetida, de tal manera transformada en lugar común, como esa de «el fin de las ideologías». El origen está en el título de un libro de Daniell Bell sobre el asunto, y no, como la generalidad piensa, que trata de estos años noventa en que el mundo ha visto conmoverse tantas cosas. No: el libro de Bell fue escrito hace muchísimos años, y había publicado 38 ediciones antes de que la universidad de California, en una típica pirueta académica (pero en este caso más que justificada por la originalidad del planteamiento y el rigor de su demostración) lo aceptase como tesis doctoral a fin de que Bell pudiese dar clases en ese claustro.

Cuando esa formulación se intenta aplicar a Venezuela, quien lo hace se refiere al deterioro de los partidos tradicionales, los mismos que han venido dominando la escena desde hace 40 años (porque incluso su derrota del 93 no fue tan aplastante como sus adversarios deseaban). Son, sin embargo, dos cosas diferentes, si bien conexas: una cosa es el deterioro, la corrupción de los partidos, y otra cosa es el fin de las ideologías, incluso de las asumidamente suyas.

Vamos a comenzar por esto último. Sólo hay dos maneras de acabar con la ideología de un partido: o que ella sea asumida por el conjunto de la sociedad, o que el transcurso del tiempo vaya mostrando su obsolescencia. En el caso venezolano, tomaremos como ejemplo lo sucedido con Acción Democrática por ser el partido más importante, históricamente hablando, no sólo del siglo XX, sino de todos los que se han fundado en la historia de Venezuela: porque el partido liberal dominó (para bien y para mal) a Venezuela durante un siglo; Acción Democrática transformó a Venezuela (para bien y para mal) en medio siglo.

Eso se puede resumir así: mientras que el partido liberal «liberalizó» a Venezuela, Acción Democrática «democratizó» a Venezuela. Al final del siglo nadie con pretensiones políticas podía situarse fuera de la inmensa bandera amarilla del partido liberal. Es así como Castro era «Liberal restaurador» y combatió al «Liberal legalista» Ignacio Andrade, y estuvo aliado circunstancialmente al «Mocho» Hernández, «liberal nacionalista». Hasta 1928, todos los caudillos que se oponían a Gómez eran liberales y su gran reproche al Benemérito era que su régimen no fuese en verdad liberal, como sí lo sería un eventual gobierno de ellos.

Con Acción Democrática ha sucedido algo parecido. Pero antes de entrar en el detalle de cuál ha sido ese proceso, conviene establecer algunas analogías y diferencias entre el liberalismo decimonónico y el democratismo sigloveintero. Hay una percepción generalizada y no sin razón aceptada, de que el fundador del partido liberal fue Antonio Leocadio Guzmán, así como el fundador (e incluso, como lo escribió alguna prensa perezosa, «el padre») del partido democrático fue Rómulo Betancourt.

En ambos casos, eso es mitad verdadero y mitad falso. Lo falso es confundir la condición de fundador con la de demiurgo: es pensar que si no hubiese sido por ellos, ni uno ni otro partido hubiesen visto la luz. Cuando *El Venezolano* nació en 1840 (creo que fue

Gil Fortoul quien lo destacó así) ya se había venido formando en diversas formas el partido liberal, confluyendo en él diversas corrientes y situaciones. Guzmán el viejo le dio el aporte de sus talentos políticos y periodistas, pero sin él, igual se hubiese formado. Lo mismo podría decirse de Betancourt y de AD. Pero, como en el caso de Guzmán, no se trata sólo del aporte de sus talentos político y propagandístico, sino de lo que llevó a la victoria a uno, y a una semivictoria (derrota en lo personal, triunfo a través de su hijo) en el otro. Eso fue la comprensión de que sólo podían hacer política y hacer historia si derrotaban a los gobiernos enfrentados situando el campo de batalla fuera de los límites propuestos por los sectores dominantes: sufragio censitario en un caso, elección de tres grados en el otro.

En el caso de Guzmán, si eso no tuvo la trascendencia que tuvo, digamos, el movimiento cartista en Gran Bretaña, o la institución del sufragio universal en la Francia de 1848, fue porque al final, no fue la voluntad popular expresada por el voto la que decidió lo decisivo, sino la voluntad de un hombre (de una miríada de «únicos») y sus armas.

En el caso de lo sucedido en el siglo veinte, la forma como planteó el asunto Betancourt se ha cumplido plenamente, se ha hecho ideología nacional.

Ya nadie se atreve a contrariar abiertamente la idea de que en Venezuela la democracia sea superior a la tiranía, sino incluso la de que esa democracia pasa por su elección en un comicio popular directo, universal y secreto.

De modo que ese es el hecho fundamental, que trasciende la personalidad del fundador y explica en mucho la obsolescencia programática del partido. El programa que a partir de 1936 comenzó a agitar Betancourt con sus compañeros, ya había planteado su condición de ideología nacional, así fuese en la forma de «proyecto nacional».

La prueba de esto se obtiene comparando no sólo los programas de todos los partidos en 1936, sino también y sobre todo con el Programa de Febrero del gobierno de López Contreras. Pero a diferencia de Antonio Leocadio Guzmán, Betancourt pudo dirigir personalmente la conversión de su propia ideología en ideología nacional. Sin embargo, con su acción y su palabra, demostró cuando pudo que no creía en hombres insustituibles y mucho menos providenciales. Es por eso que siempre le dio prioridad absoluta al partido que lo prolongaba en el espacio y en el tiempo, sobre los gobiernos, incluyendo el suyo. Dicho de otra manera, supo diferenciar con claridad las nociones de poder y gobierno.

No es ese, por cierto, el único aspecto de la ideología de AD y más allá de ella, de los partidos venezolanos en el siglo veinte. Pero allí está la base, y ello es una aspiración nacional desde 1936: la democratización de la vida pública. El cuestionamiento de hoy indica que esa ideología se ha hecho nacional, y que no se critican sus logros sino sus carencias reales o supuestas.

REVOLUCIÓN, REACCIÓN Y CONSTITUCIÓN*

Introducción

De entrada, hay que dejar claro que el que sigue no es un texto de derecho constitucional, y ni siquiera de historia de esa disciplina. El tratamiento que se dará al asunto propuesto no será pues jurídico sino histórico. Si en algún momento se apelase a la letra y el espíritu de las constituciones, sería sólo para incorporarlos como material histórico.

La idea central que nos proponemos desarrollar en esta exposición es que, contrariamente a lo que se cree, las asambleas constituyentes y sus productos no son siempre revolucionarios, sino todo lo contrario. Eso lo haremos en dos partes.

En la primera, nos proponemos analizar por una parte la recurrencia «constitucional» en la historia de Venezuela; y por la otra, los problemas de su aplicación práctica.

En la segunda, el uso y abuso de la palabra revolución; los avances reales en las constituciones venezolanas, para rematar

* Ponencia presentada en el Simposio Internacional Opciones frente al Porvenir. Maracaibo, 5 de julio del 2000.

tratando de responder a la pregunta de si la constitución llamada «bolivariana» es realmente revolucionaria.

I. Reacción y revolución en los procesos constituyentes venezolanos

A. La recurrencia constitucional

a) En primer lugar, conviene dejar claro que no tenemos la intención de meter baza en el problema de si en nuestra historia republicana hemos tenido una o varias constituciones. Nos parece esa una discusión con su sesgo de bizantinismo.

Por lo tanto, aceptaremos que en la historia de Venezuela hayamos tenido una sola constitución, en el sentido de que, a partir de la Independencia, y muy particularmente a partir de la reconstitución de la República de Venezuela, siempre hemos tenido una constitución.

O sea que de una forma u otra, hemos sido un país que obedece a leyes, por lo menos teóricamente. Pero igualmente, cuando hablamos de «constitución» no nos referimos a esa situación o a ese carácter de nuestra república, sino a los diferentes textos constitucionales que se han sucedido en nuestra historia.

b) Una vez dejado claro eso, asombra la cantidad de esos textos constitucionales que han sido aprobados en una historia, como la de la República de Venezuela, relativamente corta: para ser exactos, en 170 años. Y asombra también el hecho de que en su casi totalidad, no hayan pretendido ser simples reformas, sino constituciones plenas, destinadas a refundar la república. Allan Brewer-Carías enumera veintiuna (*Las constituciones de Venezuela*. Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1997).

Estamos excluyendo de la enumeración las de la primera y segunda repúblicas venezolanas, y por supuesto, la de la República de Colombia (aparte también de la actual, llamada «bolivariana», que no están en el texto citado, sino en una publicación aparte).

Ellas son:

1) La de 1830, destinada a reconstituir la República de Venezuela separada de Colombia.
2) La de 1857, votada para permitir la reelección de José Tadeo Monagas.
3) La de 1858, que deroga la anterior.
4) La de 1864, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela.
5) La de 1874, destinada a asentar el dominio de Guzmán.
6) La de 1881.
7) La de 1891.
8) La de 1893.
9) La de 1901.
10) La de 1904.
11) La de 1909.
12) La de 1914.
13) La de 1922.
14) La de 1926.
15) La de 1928.
16) La de 1929.
17) La de 1931.
18) La de 1936.
19) La de 1945.
20) La de 1947.
21) La de 1953.
22) La de 1961.

Aun a riesgo de cansar al lector, las hemos enumerado en esa forma, para acentuar su carácter adocenado y reiterativo. En efecto,

muy pocas de ellas han introducido cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico y político del país; y mucho menos en su organización económica y social. Se trata de textos por lo general ignorados por el país y (deliberadamente) ignorados por sus dirigentes.

c) Pero hay algo más que conviene agregar a aquella enumeración. Las muy escasas entre ellas que han significado un cambio en el país, lo han sido menos con esa intención que con la de consolidar una hegemonía, y provienen generalmente de un cambio violento en la cúpula del poder, por medio de un proceso «revolucionario» que por tal ha interesado o implicado a la sociedad entera.

Los casos más emblemáticos han sido los de la Constitución de 1830, destinada a entronizar en el poder a lo que tiempo después se llamará con intención polémica «la oligarquía conservadora». La Constitución de 1864, que se propuso volcar en un texto el triunfo de las armas federales y su continuación en la de 1874, destinada a imponer la hegemonía de Guzmán Blanco; la de 1904, cuyo propósito era consolidar la hegemonía andina; así como las de 1909 y sobre todo la de 1914, para hacer lo mismo muy especialmente con la dominación personal de Juan Vicente Gómez; la de 1947, destinada a consolidar la hegemonía de los triunfadores del 18 de octubre de 1945; y la de 1999, destinada a hacer lo propio con los actores de las insurrecciones militares de 1992.

Hay dos comentarios más que hacer sobre esas constituciones: tal vez con la única excepción de la de 1961, ellas han sido redactadas bajo una dominación militar; y de hecho, no se les debería considerar por eso de pleno derecho constituciones de poder civil. El otro comentario es que tal vez el único caso de una constitución consensuada, a pesar de provenir del triunfo de una insurrección armada, ha sido la de 1961.

No es por eso casual que también sea la de más larga existencia en toda la historia de Venezuela; y que en muchísimos aspectos, la del 99 no haya hecho sino copiarla al pie de la letra.

B. País legal y país real

a) En esta parte, vamos a referirnos a dos series de asuntos: lo primero, a la ingenua creencia de que los problemas de un país se pueden resolver por decreto, o por una ley, y *a fortiori*, por una constitución; lo segundo, al irrespeto sistemático de la letra y el espíritu de la ley por los gobernantes, pero también por los gobernados.

En primer lugar, hay la frase que se atribuye al general José Tadeo Monagas: «La Constitución sirve para todo». Tradicionalmente, eso tiene dos interpretaciones. La primera, la más usual, es tomar esa frase al pie de la letra, y ver allí (como posiblemente era la intención de Monagas) el cinismo presidencial, dispuesto a retorcer hasta el extremo límite el texto constitucional, para apartar todas las cortapisas a un poder discrecional, si no absoluto.

Pero hay una segunda interpretación, menos usual pero acaso no menos perniciosa: es la creencia en el poder fáctico o mejor, en la omnipotencia de las leyes: una vez que se haya escrito la constitución perfecta, todos los problemas del país encontrarán solución.

Falcón pensaba así que la libertad estaba conquistada, porque un arriero esgrimía su decreto de garantías para proteger su magra propiedad de los desmanes de alguna autoridad. Es también la no por ingenua menos famosa frase de Zamora referida a la Federación: no es que curará nuestros males, sino que los hará imposibles. Si eso no sucede, es porque la constitución es imperfecta. Por lo tanto, hay que hacer una revolución que nos permita redactar otra que, esa sí, será perfecta.

En segundo lugar, la confrontación de aquella ingenua creencia con la realidad cotidiana, lleva a la conclusión expresada en aquella frase que han venido repitiendo desconsoladamente en Venezuela todos los profesores de Derecho Constitucional: «La Constitución es un librito de tapas amarillas que se cambia todos los años y se viola todos los días».

Si esto fuese producto del gracejo popular para condenar la mentira de sus dirigentes, podía tomarse como un signo de sanidad social, de un pueblo capaz de ingeniársela así para expresar su crítica.

Lo malo es cuando eso se toma como patente de corso para la violación de toda norma legal por parte de la sociedad en su conjunto: la anarquía precede siempre al despotismo.

b) De todas formas, la inconformidad con un texto constitucional no es necesariamente negativo. Antes bien, puede ser muy positivo al expresar la conciencia social de que no hay en la sociedad y en su historia nada inmutable, y mucho menos un texto constitucional: las constituciones no son ni deben ser tampoco verdades reveladas, divinas y por lo tanto intangibles. Pero el problema es que, tradicionalmente, en Venezuela es muy poco usual que las reformas constitucionales provengan de un clamor o de una necesidad social: así, la abolición de la esclavitud, que sí implicaba un cambio social profundo, no necesitó una reforma constitucional. Pero esa reforma sí se impuso tres años más tarde, cuando se quería cambiarla para eliminar la cláusula que prohibía la reelección.

Esa reforma constitucional de 1857 dio el tono a todas las siguientes en la historia venezolana (con las escasas excepciones de la constitución de 1936, la de 1947 y la de 1961): que todas ellas han tenido nombre y apellido. Como ellas se han propuesto fundamentalmente para eliminar el artículo que prohíbe la reelección inmediata, nunca han sido otra cosa que cortar un traje a la medida del hegemón de turno.

Es por eso que las discusiones sobre el asunto nunca han sido argumentaciones abstractas sobre temas constitucionales. Porque la reelección presidencial no es necesariamente sinónimo de tiranía ni en los regímenes presidenciales como EE.UU., ni en los regímenes semipresidenciales como Francia ni mucho menos en los

regímenes parlamentarios. Pero en Venezuela en particular, eso no ha sido nunca una discusión teórica ni constitucional, sino una cuestión política cotidiana. Hasta 1913, el gobierno del general Juan Vicente Gómez era tal vez el más consensual que hubiese conocido la república desde la primera presidencia de Páez.

Pero el país comenzó a sospechar de las verdaderas intenciones de Gómez cuando en 1913 se planteó el problema de la sucesión, o lo que es lo mismo, de la alternabilidad real que había sido proclamada por la república desde 1830. La oposición tuvo razón al desconfiar: el general llegó para quedarse. Y se quedó 27 años.

c) En todo el desarrollo anterior, hemos puesto el acento sobre la ingenuidad (o a veces, el cinismo) de confundir el país legal con el país real. Pero eso no quiere decir que la recíproca sea exactamente verdadera: los textos constitucionales y legales pueden representar el país real.

Lo pueden hacer cuando ellos se hacen, más que ideología, conciencia social, cuando ellos se ponen por sobre cualquier voluntad de dominio e incluso por encima del respeto y acatamiento debido a símbolos, tendencias o prejuicios del imaginario popular. Dos ejemplos, en las dos alternativas diferentes, nos servirán para ilustrar lo que intentamos decir:

El primero: en los años noventa, en los EE.UU., algunos manifestantes radicales de pensamiento o actitud anárquicos, tomaron la costumbre de quemar la bandera de las barras y las estrellas en son de protesta. El presidente Bush intentó entonces hacer votar una ley para encarcelar a quien, en territorio norteamericano, fuese capaz de parejo sacrilegio. Como suele suceder, más que una cuestión de principios, detrás de la propuesta de Bush se escondía una cuestión política: arropándose con la bandera nacional, Bush pretendía arrancar la del patriotismo a sus rivales demócratas.

Pero éstos, a su vez, se refugiaron en la Constitución, cuya muy famosa Primera Enmienda prohibía formalmente todo aten-

tado contra la libertad de expresión. El final del asunto dejó claro que la Ley estaba por encima de cualquier símbolo, así fuese uno tan querido y respetado como esa bandera que los norteamericanos llaman *Old Glory*.

Imaginemos qué sucedería en Venezuela si alguien pretendiese poner la letra de la Constitución por encima de la palabra de Bolívar, así sea ella expresada por algún autodesignado profeta suyo.

El segundo: Más que un ejemplo, es una reflexión del historiador Gil Fortoul a raíz de las exitosas maniobras de José Tadeo Monagas para reformar la constitución de 1830 eliminando el artículo que prohibía su reelección inmediata:

> «A contar desde 1830 todas las revoluciones habían fracasado. La de Monagas el 31, la de Gabante el 34, la de Reformas el 35, la de Farfán el 37, la de los liberales guzmancistas el 46, las de Páez en los años de 48 y 49, las de los conservadores y liberales en 53 y 54, fueron fácilmente vencidas por el Gobierno constitucional. En los seis años que siguen al plan usurpador de 1857, sucede lo contrario: triunfa contra Monagas la revolución de marzo; los batallones de Casas derruecan a Castro en 1859; los pretorianos de Echezuría deponen a Gual y proclaman la dictadura en 1861; vence finalmente la Federación al Gobierno dictatorial de Páez en 1863. Y seguirán triunfando otras revoluciones. No cabe duda que al desgarrarse la Constitución del año 30, hubo en este país un profundo choque moral, que dejó desorientada a la Oligarquía [se refiere por igual a la llamada Conservadora de Páez y a la Oligarquía Liberal de Monagas], hasta su próxima desaparición, y abrió el cauce donde veremos a la democracia venezolana fluctuar por largos años entre el tumulto anárquico y el orden despótico». (José Gil Fortoul. *Historia constitucional de Venezuela*, Caracas, Ministerio de Educación, 1954, t. III, p. 90.)

Una conclusión preliminar a esta parte de nuestra exposición podría formularse de la siguiente manera: en Venezuela, nada más banal y más habitual que estar reformando las constituciones, o estar convocando constituyentes para redactar una nueva.

En cambio, lo nuevo, y en ese sentido lo revolucionario, es buscar la aplicación de la existente: que las leyes se cumplan. En el entendido que el impersonal «se» no atañe solamente a los gobiernos, al Estado, sino al conjunto de la sociedad. Porque hay que insistir aquí lo que hacemos machaconamente a lo largo de toda esta exposición: la salvaguarda de la Constitución, de la Ley en su sentido más general, nunca tendrá ningún sentido si es cosa del gobierno sólo, del Estado, sino de la sociedad entera.

II. 1999: ¿Revolución o reacción?

En esta parte, hablaremos primero del uso y el abuso de la palabra revolución; en segundo lugar de los avances, que en la historia de Venezuela, se pueden considerar revolucionarios al ser inscritos en una constitución; y en la tercera parte, a la luz de los ejemplos anteriores, cómo puede ser considerada la más reciente de las constituciones venezolanas y el régimen actual.

A. Usos y abusos del término «revolución»

a) En el término «revolución» suele siempre haber una connotación positiva. Hasta el más conservador, reaccionario y misoneísta de los fabricantes de automóviles hará propaganda de su último modelo presentándolo como «revolucionario». En la historia de América Latina, tal vez no haya en política un término más y peor empleado.

Todas «nuestras matazones», como las llamaba Vallenilla Lanz, adoptaban el pomposo nombre de «revolución», y todas prometían, como Castro en el 99, «nuevos hombres, nuevas ideas, nuevos procedimientos». Para presentarse generalmente con las

mismas gentes, con los mismos lugares comunes liberales, y el mismo procedimiento de ignorar la ley.

Por cierto, en el siglo XIX venezolano, los términos «revolución y reacción» no solían ser opuestos, sino complementarios: generalmente, una reacción contra el gobierno anterior llevaba implícita una revolución.

b) Eso no sucedía en la Antigüedad, y Aristóteles consideraba «revoluciones» a todos los movimientos que se produjeran en uno u otro sentido. La simpatía por las revoluciones proviene de las revoluciones inglesa, por haberle arrancado sus poderes al rey para entregárselos al Parlamento, representante de la voluntad popular; la norteamericana, por el establecimiento de la república federal; la francesa, por la abolición de los privilegios de la aristocracia; la mexicana, por su carácter de reivindicación agraria; la rusa, por ser otro tanto con las reivindicaciones obreras; la cubana, en fin, por su carácter antiimperialista.

c) Los movimientos fascista y nazi se presentaban como confesamente *reaccionarios*. Es lo que llegó a decir Musssolini en su primera intervención ante las cámaras como jefe de las huestes fascistas: «vengo a pronunciar un discurso reaccionario». La reacción no era solamente contra la revolución bolchevique, sino tal vez sobre todo contra la revolución francesa, por lo que ésta significaba de avance en materia de derechos políticos, civiles y humanos. Es lo que llevó a uno de los más destacados jerarcas nazis a declarar ante el Parlamento de la Francia derrotada en 1940: «Hay que borrar el año 1789 de la historia». Y sin embargo, los movimientos fascistas, sobre todo el alemán, se comportaron como revolucionarios al llegar al poder: la vieja Alemania dejó de existir, aunque la que la sustituyó sólo haya significado la mayor vergüenza posible para el pueblo alemán.

Eso lo vio con suma claridad un hombre que no tenía la menor simpatía por ese régimen. Jorge Dimitrov, secretario general

de la Internacional Comunista, advirtió a sus camaradas que lo que había sucedido en Alemania a partir de 1933 no era un simple cambio de gobierno sino un *cambio de sistema*.

B. Los avances constitucionales

Lejos de nosotros la idea de rechazar de plano toda la historia de las constituciones venezolanas: lo que rechazamos es la idea de que toda nueva constitución, por serlo, haya constituido y constituya un paso de avance; por el contrario, muchas de ellas han significado retrocesos institucionales y sociales. Es más, y es lo que veremos a continuación, hasta las más progresistas contenían gérmenes de reacción y conservatismo que en mucho negaban sus aspectos progresistas.

a) Es así como la Constitución de 1830 tiene la importancia de haber reconstituido la República de Venezuela dentro de los límites y con la conformación que hoy le conocemos: es el primer paso para la formación del Estado-nación venezolano, lo que se completaba con la eliminación de los fueros militar y eclesiástico. Pero al mismo tiempo, contenía un elemento de reacción, al significar, en materia de esclavitud, un paso atrás en relación con la Constitución de Colombia. Y por otra parte, establecía, con el sufragio censitario, «una república de propietarios» que excluía de la ciudadanía a la determinante mayoría del país.

b) Las constituciones liberales de 1864 y de 1874 son un paso más, y éste particularmente largo, para la formación del Estado-nación venezolano, por ser las del establecimiento de un país laico, donde se separaban definitivamente la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1864, además, nos convirtió en el primer país, acaso en el mundo y en todo caso en América, en suprimir la pena de muerte. Pero su laxo federalismo contribuyó mucho a la anarquía que significó el régimen de Falcón; y la de 1874 tenía demasiado claras las intenciones hegemónicas de Guzmán Blanco y sus libe-

rales, incluyendo la que aparentemente buscaba lo contrario, la llamada «la Suiza» cuyos presidentes no debían durar más de dos años en su ejercicio.

c) De la Constitución de 1904, así como de sus sucesoras de 1909 y 1914, se puede decir que fundan el Estado venezolano. Sobre todo, porque bajo su férula se disuelven los ejércitos regionales, es decir, los ejércitos personales de los diferentes caudillos que asolaron Venezuela a lo largo de «la guerra de los cien años» que fueron los del siglo XIX. Vale decir, fueron las constituciones de la paz. Pero esa paz se sabe a qué precio fue pagada.

Para quedarnos en el terreno estrictamente histórico, diremos que fueron los de la eliminación de la federación venezolana, confundiendo unificación con centralización.

d) Las constituciones de 1947 y sobre todo la de 1961 fundan realmente el poder civil en Venezuela; y le dan solidez con el establecimiento de la democracia y con el sufragio universal, directo y secreto, incluyendo a las mujeres y los jóvenes en edad militar, y lo más importante de todo, a los analfabetas, lo que amplió el cuerpo electoral hasta dimensiones entonces desconocidas.

Pero la Constitución de 1947 fue aprobada en un ambiente demasiado conflictivo, donde se veía, como en 1864, demasiado clara la intención hegemónica de los triunfadores del 18 de octubre. Y además, esos triunfadores incluían, en su ala más poderosa, a los militares, que finalmente la enviaron al cesto. En cuanto a la de 1961, con ser como se ha dicho la más consensual y por lo tanto la de mayor duración en la historia venezolana, prestó poca atención al desarrollo de la sociedad civil, y se basó fundamentalmente en el poder de los partidos políticos, formando así una «democracia de partidos» que al final sufrió las taras y el rechazo que producen todos los monopolios.

C. Una constitución reaccionaria

Esta parte está consagrada a estudiar en qué medida se puede creer a quienes pretenden que la de 1999 sea una constitución «revolucionaria»; confrontándola con los elementos de reacción que ella contiene, en todas las acepciones de esa palabra.

a) El elemento de reacción más importante y más inmediato que contenga esta Constitución reside en los factores que la inscriben dentro de un contexto de re-personalización del poder. En efecto, desde 1936, cuando el general Eleazar López Contreras comenzó a referirse a la Fuerza Armada como «la Institución castrense», introdujo un elemento muy importante en el proceso de despersonalizar el poder, esto es, inscribirlo dentro de un contexto de gran modernidad.

En el pasado, como es bien sabido, los ejércitos eran personales: obedecían al capricho de un caudillo, y su oficialidad era escogida sobre todo entre los más cercanos al jefe, generalmente familiares, compadres y paisanos. Después, al imponerse un hegemón, las fuerzas armadas venezolanas comenzaron un proceso que las llevó a convertirse al final del régimen de la «Rehabilitación Nacional», en la institución armada nacional gomecista.

Cuando muere el dictador, ellas dejan de ser lo último, pero no para convertirse en «lopecistas»: es así como la columna vertebral del Estado comienza a ser percibida como institución. Pero no es sólo eso: López Contreras hace reducir su período constitucional de siete a cinco años y prohíbe la reelección. En verdad, eso no era nuevo, puesto que Gómez había hecho otro tanto en 1908: lo novedoso, significativo y en resumidas cuentas histórico fue que López cumplió su palabra y no fue reelecto.

De modo pues que al extender el mandato presidencial y establecer que puede ser reelecto («¿por ahora»?) por una vez, y sobre todo, al hacerlo pensando en el mandatario bajo cuya férula se ha aprobado la nueva constitución, la constitución reacciona contra

un proceso que había concluido en una verdadera revolución política y cultural. Esa revolución que hizo que los venezolanos sintiesen que quien gobernaba el país era el presidente de la República y no el general tal o cual.

Venezuela había llegado a internalizar de tal manera esa realidad, que al ser derrocada la dictadura de Pérez Jiménez por una marejada nacional, no se estaba echando a cualquier gobierno, sino a la dictadura personalista más corta en toda la historia de Venezuela.

De modo que en las actuales circunstancias hemos retrocedido 65 años, a aquel 17 de diciembre de 1935 cuando Gómez abandonó el poder y de paso este valle de lágrimas.

b) Igual cantidad de años hemos retrocedido en el terreno de la descentralización y más generalmente de la desconcentración del poder. El proceso de descentralización no se inicia en Venezuela, como se cree, con la fundación de la COPRE o con su primer resultado con las elecciones de gobernadores de estado en 1989. No: en verdad, ese proceso comienza, como un hecho político y no simplemente administrativo, en 1936, a la muerte del máximo centralizador y concentrador del poder de toda nuestra historia. Con la creación de los partidos políticos, y con la lenta aunque segura adquisición de poder por parte de los poderes clásicos, se habían ido arrancando parcelas de poder al Estado para ponerlas en mano de la sociedad.

Ésta es una situación contra la que se reacciona hoy en los hechos, cuando no existen poderes independientes del Ejecutivo, porque no han sido electos sino designados «a dedo». Pero además, se inscribe esa situación en la nueva constitución, cuando se da al Ejecutivo el poder de disolver el Parlamento, cosa absurda en un régimen presidencialista.

Éste es, pues, el segundo de los más importantes elementos reaccionarios en la nueva constitución.

c) Pero, por supuesto, la cosa no se queda allí. Echando por la borda la idea del sometimiento del poder militar al poder civil, se arranca del control del Parlamento no solamente la vigilancia del cumplimiento correcto, legal y no discrecional y caprichoso del escalafón castrense; sino que también se establece que la Fuerza Armada no se someterá, en materia financiera, a los mismos controles de las otras instituciones del Estado. Con esto se retrocede nada más y nada menos que 170 años en la historia de Venezuela, desde que la Constitución de 1830 suprimió los fueros militar y eclesiásticos, unos privilegios que se habían hecho odiosos en todos los países del mundo civilizado y muy especialmente en el nuestro.

d) Hemos señalado esos tres aspectos muy importantes de reacción frente a las mejores tradiciones constitucionales venezolanas, pero tal vez haya uno que los englobe a todos, y que por supuesto, no está inscrito en el texto aprobado a la carrera en 1999. Se trata del absurdo de que un Tribunal Supremo de Justicia nombrado «a dedo» proclame sin la menor vergüenza que las actuaciones de quien lo nombró son «supra-constitucionales».

Con ello se da una patente de corso para su desconocimiento más flagrante y sistemático por el poder; como se dio el caso (pero por supuesto no es el único) de la violación que implicó haber establecido una fecha presurosa para unas elecciones que después hubo que suspender por su inviabilidad. De esta manera se nos lleva mucho más lejos que todo lo anterior: las acciones señaladas (haciendo además la salvedad de que no son las únicas) de todos modos señalaban un retroceso; pero en el desarrollo histórico de las constituciones venezolanas, no dejaban de inscribirnos mal que bien en un país con una constitución.

Pero esto último nos hace retroceder mucho más que los 170 años de vida republicana: nos lleva a los tiempos en que no existía constitución alguna en nuestro país.

Conclusiones

1) La conclusión más general nos lleva a decir que ningún proceso constituyente, por el solo hecho de serlo, es revolucionario. Por el contrario, o bien puede ser solamente un pobre papel que señale un simple cambio de gobierno, o señalar más bien un retroceso histórico, una contrarrevolución, una reacción.

2) En la historia de Venezuela, lo realmente revolucionario no es cambiar un texto constitucional a través de una Asamblea Constituyente: eso es lo normal y rutinario. Por el contrario, no es cambiar las leyes, sino cumplir primero las existentes, lo verdaderamente revolucionario.

3) No se puede decir que el texto aprobado en 1999 y la situación política presente contengan elementos reaccionarios. Eso sería decir demasiado poco. Lo correcto es decir que el actual régimen venezolano, y su constitución, son los más reaccionarios que haya tenido Venezuela en 170 años de vida republicana.

LAS TRANSICIONES EN LA HISTORIA DE VENEZUELA

A manera de introducción, abramos el Diccionario de la Real Academia Española, que siempre sirve para sacarnos de estos trances. Allí se define el término «transición» como «Acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto». Adoptaremos esa definición, pero con algunos retoques para adaptarla al estudio de las realidades sociales, históricas: para hablar de las transiciones en la historia de Venezuela, conviene precisar de entrada qué se quiere significar con eso.

1. En un país con las tradiciones del nuestro, «régimen de transición» se tiende a confundir con «gobierno provisional»; esto es, el que se forma a la caída de un régimen y mientras se organizan las instituciones del futuro inmediato (que, como también es tradicional, muchas veces significa prolongar *sine die* la «provisionalidad»).

Pero la transición a la cual queremos referirnos hoy es algo diferente: es el tránsito no hacia un nuevo régimen político, sino hacia un nuevo régimen social, entendiendo por esto último no lo que habitualmente tiende a llamarse «social» y que sólo se refiere a las clases subalternas, sean productoras o marginales, sino a algo mucho más amplio, y que ocupa todos los espacios de la sociedad.

2. En tales condiciones, la transición no tiene plazo fijo, y mucho menos inmediato: puede incluir el gobierno provisional y uno o unos de los gobiernos «normales» (o constitucionales) que surjan de allí. Para aclarar esto con un ejemplo, la transición duró algunos meses en la España posfranquista (y fue acelerada por el golpe de Tejero, que pretendía por el contrario, detenerla o hacerla retroceder); y en el caso venezolano después de Gómez, el régimen de transición se extendió por nueve años, hasta que fue bruscamente acelerado el 18 de octubre de 1945.

3. Para hablar de transición, es preciso que lo sea de verdad, y no un simple cambio en la cabeza del Estado: se trata, repetimos, de un cambio en la sociedad. Por lo tanto, sólo podrá considerarse un régimen de transición aquel que contenga un proyecto de sociedad.

Es decir, no sólo gubernativo, sino de la sociedad entera, o para llamarlo como algunos historiadores lo hacen, de un *proyecto nacional*. De los cuales hemos tenido dos en nuestra historia: el proyecto liberal de los años treinta del siglo XIX y el proyecto democrático de la década del treinta en el siglo XX.

4. Finalmente, el período de transición no comienza a partir del momento en que se cambia de gobierno, sino desde el momento en que el proyecto se hace conciencia social. Es la situación que vivimos en el presente venezolano.

Aclarado esto, postulamos que en Venezuela sólo han ocurrido dos verdaderas transiciones, pero cada una con dos momentos diferentes. En el siglo XIX, la transición que llevó al establecimiento del liberalismo «conservador» (o paecista) en 1826-30 y al liberalismo «liberal» (o amarillo, o guzmancista) entre 1863 y 1870. Y en el siglo veinte, la transición que llevó al establecimiento de una democracia elitista (1936-1945) y de una democracia de masas (1945-1958).

Trataremos de demostrar también que hoy vivimos en un nuevo momento de la transición democrática, cuya fecha de inicio podría ser el 10 de diciembre de 2001.

1. Hacia el proyecto liberal

Como hemos dicho, esa transición conocerá dos momentos, que se pueden ubicar así: un primer paso hacia el proyecto liberal conservador o paecista (1826-1830); y hacia el proyecto liberal-«liberal» amarillo o guzmancista (1863-1870). La estructura misma de la sociedad política, salida de la guerra, hace que esté marcada por la fuerte personalidad de sus caudillos y por lo tanto que se le deba señalar con sus respectivos nombres.

A) El proyecto paecista

Comienza la etapa de transición con el movimiento llamado de «la Cosiata» que produce la separación *de facto* de Venezuela de la República de Colombia; la cual se dará *de jure* con la Constitución de 1830. De este proyecto se pueden señalar tres características principales:

a) La primera es una acción que podría ser llamada «liberarse del Libertador», lo cual quiere decir no de su ideología y de su acción como dirigente del proceso independentista, sino como jefe del Estado colombiano, o como se le llama oficialmente, como «Libertador-Presidente».

b) Lo segundo podría llamarse «liberarse de los libertadores», o sea, de la influencia de los militares que reclaman para sí una serie de fueros y privilegios en su condición de Padres de la Patria. Esto lo logrará el estamento civil poniéndose bajo el abrigo del más prestigioso de esos libertadores, el general José Antonio Páez.

c) Elaborar una constitución que refleje, más que proponga, el país tal y como él está formado en los hechos, esto es, con el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela; con un gobierno representativo y alternativo; en lo económico con un proyecto liberal ortodoxo que presenta, según Elías Pino Iturrieta, un interesante intento de edificar una sociedad capitalista: y en lo social, conservando la esclavitud y estableciendo el sufragio censitario.

Es de destacar que en este caso, la transición comienza antes del establecimiento de la nueva república, aunque el gobernante sea el mismo.

B) El proyecto guzmancista

La etapa de transición comienza con los acuerdos de Coche y el Decreto de Garantías de 1863, para culminar con la Revolución de Abril de 1870. Se caracteriza por una situación cercana a la anarquía muy parecida al lustro que le precedió: ni la revolución puede derrocar al gobierno, ni el gobierno puede vencer la revolución; sólo que con los papeles cambiados, porque esta vez los liberales están en el gobierno. Este proyecto liberal sólo será puesto por obra verdaderamente bajo el guzmancismo. Se pueden señalar también tres rasgos fundamentales de ese proyecto:

a) La creación de un estado federal. Al contrario de lo que se suele decir, no se trata de una ficción constitucional, sino que se trata de un proyecto que responde a la realidad de un país aislado, incomunicado y con una población diseminada en un territorio inmenso.

b) El primer intento de formación de un Estado moderno, laico, con la separación de la Iglesia y el Estado, el desarrollo de la educación pública. Aquí se puede señalar una curiosa contradicción entre la transición de Falcón y el régimen de Guzmán: Falcón era partidario de declarar la católica religión del Estado. Guzmán, en cambio, era laicista y muy a fondo.

c) La creación del marco jurídico y de infraestructura para el desarrollo de una sociedad capitalista industrial; la búsqueda afanosa de capitales extranjeros y en menor grado, una política de inmigración con la idea de transformar a Venezuela en un país «caucásico».

II. Hacia el proyecto democrático

El proyecto democrático es el de nuestro siglo veinte y se da igualmente en dos momentos de transición: uno que va de 1936 a 1945, punto de partida hacia lo que podríamos llamar «la democracia elitista». Y otro período de transición hacia el proyecto que a su vez podríamos llamar «democracia de masas» y que se extiende desde 1945 hasta 1958.

Podría parecer extraño que incluyamos en ese período a la dictadura militar (1948-1958). Pero es que no hablamos de gobiernos democráticos sino de una *sociedad democrática* por el sentimiento y la conciencia populares, que no se extinguen jamás, como lo demuestran al menos la derrota electoral de la dictadura en 1952 y el derrocamiento en 1958 de la dictadura personalista más corta de nuestra historia (1952-1958).

Por otra parte, el proyecto de desarrollo no difiere esencialmente del planteado desde 1945 y luego después de 1958: la diferencia está en que el de Pérez Jiménez se basa en la fuerza armada como dirigente del desarrollo con un fuerte tinte autoritario, mientras que el posterior a 1958 se basa en los partidos políticos como dirigentes, y se desarrolla en un ambiente democrático y en todo caso antiautoritario.

A) La democracia elitista

Como hemos anotado, esta transición comienza a la muerte de Gómez, se extiende a todo el período de López Contreras y en muchos aspectos al de Medina Angarita. También se pueden señalar tres aspectos:

a) Se trata de un régimen más liberal que democrático, y que en todo caso busca apegarse lo más estrictamente a la legalidad. Son los primeros gobiernos no solamente legítimos (de una legitimidad no carismática sino institucional) sino también legales que hayamos tenido en el siglo veinte.

b) Son gobiernos que buscan más el consenso que la popularidad (con las diferencias de carácter y de estilo entre López y Medina) y que si bien rinden parias a la deidad democrática, de todas maneras quieren conservarle un carácter restrictivo, elitista: no existe sufragio universal ni directo.

c) Aunque se trate de gobiernos liberales, serán sin embargo los primeros que en la historia venezolana presenten planes de desarrollo económico basados en la intervención del Estado: serán el Programa de Febrero de 1936 y la política petrolera de Medina anunciada en 1942.

B) La democracia de masas

Arranca en octubre de 1945 y su período transicional llega hasta el fin de 1958. Señalaremos también tres aspectos del proyecto:

a) En el aspecto político e institucional, se trata del lanzamiento de una democracia liberal, esto es, con los componentes clásicos del Estado liberal, pero con un basamento de masas a través del sufragio universal que incluye a los analfabetas, a las mujeres y a los jóvenes en edad militar. Aquí nuevamente hay que precisar que eso no es solamente una iniciativa gubernamental, sino que la ratifica su aplicación por el electorado, así sea en contra del gobierno, como sucedió en 1952.

b) La transición se caracteriza por un combate sordo y a veces abierto entre el poder civil y el poder militar, lo que permite dividir esa transición en un período democrático y otro dictatorial.

c) El proyecto de desarrollo es el más ambicioso que haya conocido Venezuela en toda su historia. De hecho, es entonces cuando se comienza a hablar en términos de «desarrollo» y no sólo de «progreso», como se solía decir en el siglo XIX. Se trata de construir una sociedad industrial moderna, con una poderosa intervención del Estado y un fuerte componente social.

III. ¿Vivimos una nueva transición?

Queremos rematar este conjunto de hipótesis con algunas relativas a la situación actual. Como habíamos dicho al principio, la transición no comienza con un nuevo gobierno, sino que puede precederlo.

Por esa razón, postulamos que la transición ya comenzó en Venezuela, y se le puede señalar como fecha el 10 de diciembre de 2001. Ese día se produjo la eclosión de una fuerza social que muy pocos sospechábamos que existiese con tal potencia. No es la masa que, siguiendo quién sabe qué instintos gregarios, sigue a un líder o a unas banderas ideológicas, sino el conjunto de las fuerzas productoras que muestra su presencia y lo hace con una contundencia tal, que podría estar señalándonos el acceso hacia ese nuevo proyecto social, hacia ese nuevo proyecto nacional. Pensamos que será una ampliación del proyecto democrático, pero con algunas características nuevas o, mejor, renovadoras. Esto se ha reafirmado con la imponente manifestación de la sociedad civil el 23 de enero de 2002, la más grande que hayan visto jamás las calles caraqueñas en toda su historia.

Partiendo de lo que la realidad de estos días parece irnos revelando, con mucho tiento, y sin pretender dar lecciones ni mucho menos hacer afirmaciones absolutas, nos atreveríamos finalmente a señalar también tres de lo que podrían ser los elementos fundamentales del nuevo proyecto democrático.

a) En el terreno institucional, reafirmación del primado del poder civil sobre el poder militar. Eliminación, de acuerdo con la tradición constitucional desde 1830, del fuero militar, de todo tipo de privilegios abiertos o encubiertos.

b) Elaboración y puesta en práctica de un plan concreto de lucha contra la pobreza, para que su superación sea también la mejor forma de incrustar en la mentalidad popular la idea de que democracia y elevada calidad de vida son sinónimos, y arrinconar de

tal manera las tentaciones salvacionistas, mesiánicas, autoritarias. Se debe en este caso ser muy concreto: no hacer promesas en el aire, sino elaborar rápidamente planes específicos, con plazos fijos, financiamiento accesible y participación popular: en una palabra, viables.

c) En el terreno económico, el punto fundamental es eliminar una actitud que nos viene desde la tradición regalista de la monarquía española, a esperarlo todo del Estado. Se trata de transformar la nuestra de una sociedad de pedigüeños en una sociedad de productores.

EL MITO DEL ORDEN EN LA HISTORIA DE VENEZUELA

Al proponernos como tema «El mito del orden en la historia de Venezuela», podría pensarse que al desglosar esa frase, se debe precisar qué cosa sea «mito» y qué cosa sea «orden». En verdad, hay un tercer término a desglosar y contornear, y es «Venezuela»: eso condiciona los dos otros elementos de la proposición, porque para hablar de orden en un territorio, es preciso saber cuáles son los contornos donde ese orden campea, se impone o se practica. Hacerlo ayuda a comprender los otros dos: en qué medida un orden puede ser mítico, y en qué medida deja de serlo.

Hablaremos entonces de la República de Venezuela, tal y como se reconstituyó en 1830 y dura hasta nuestros días. El asunto puede verse así mejor en todo su lento proceso, desde una dispersión real donde el orden nacional es las más de las veces una realidad lejana y un voto pío.

A eso sigue la personalización del orden bajo la tiranía (o su búsqueda) hasta rematar en el límite entre la modernidad y nuestro mundo antiguo, cuando el límite entre el orden mítico y el orden real pasa por la elaboración, la implantación, la consolidación y la obediencia al orden despersonalizado de la ley. Éstas son las tres aproximaciones que proponemos para el tema.

I

Aunque más arriba proponíamos el tratamiento del asunto a partir de la reconstitución de la República de Venezuela en 1830, se impone hablar de algunos antecedentes, aunque sólo sea para poner de relieve que el orden que precede a esa fecha duró muy poco. Porque el primer término de la ecuación comienza a plantearse cuando (casi es tentador decir que de un plumazo) se crea Venezuela.

Se trata de la formación de la Capitanía General de Venezuela en 1777: es la primera vez que, territorialmente hablando, podemos aludir a este país casi en los términos en que lo hacemos hoy; es la primera vez que se puede hablar de un «orden colonial» en Venezuela. Antes de eso existía el orden: lo que no existía era Venezuela.

Ese orden duró, pues, exactamente treinta y tres años, edad crítica en la cual, con la salida de Emparan, se puede considerar muerta la Capitanía General. Ése es un lapso demasiado corto en la vida de un pueblo; no solamente Venezuela no tuvo tiempo de acostumbrarse a aquel orden: no tuvo tiempo de acostumbrarse a ser Venezuela. Es así como apenas se producen en 1810 los acontecimientos que van a dar al traste con aquel orden, afloran los particularismos: en la actitud de la provincia de Coro y en la actitud de Maracaibo no hay que ver tanto (o no sólo) un acto de fidelidad a la Corona como una afirmación de la igualdad entre las provincias, una negativa a dejarse liderar por Caracas. La cual no logra imponer su propio orden al conjunto de la antigua Capitanía General: es así como lo que se pretende, el orden republicano, se transforma en un mito, porque para buena parte del país es apenas el orden caraqueño.

Sin haberlo logrado imponer, muere la Primera República. La Segunda pareció haber nacido con buena estrella y, tras de recibir el título de Libertador, Bolívar está encaminado a imponerlo. Vana

ilusión, mito efímero: lo que va a imponerse es un desorden social hasta entonces desconocido.

El naciente Estado va a ser demolido por las patas de los caballos de una masa informe hasta entonces ignorada y que si alguna característica identificatoria posee, ella es menos cultural que social: su rechazo de todo orden, se encarne él en la existencia de jerarquías sociales, o se manifieste en el terreno político.

Finalmente, y por primera vez en el proceso de independencia, será un ejército extranjero, el más grande que España haya enviado a América, el que impondrá su orden en la antigua capitanía general. Pese a todos los intentos por romperlo, la pacificación de Morillo durará sus buenos siete años. Hasta que el Libertador idee un nuevo orden para Venezuela: será la sustitución del antiguo orden colonial y del todavía inexistente orden republicano, por uno nuevo que trascienda las fronteras nacionales: es la creación de la República de Colombia.

II

Ese orden durará lo que dure la guerra, lo que equivale a decir que durará lo que dure el desorden: lo que duren las guerras del Sur, o sea que se mantendrá trabajosamente mientras continúe brillando el prestigio de las armas colombianas y el muy personal del Libertador.

Pero una vez terminado eso en Ayacucho, las regiones que forman la República de Colombia vuelven a sus querencias, que son los particularismos regionales y, en Venezuela particularmente, el rechazo de toda autoridad, de todo orden. Se reconstituye así la República de Venezuela, pero no por ello se logra una paz permanente: fuera de la capital, y de las regiones más organizadas del centro, la regla será el rechazo del Estado, la anarquía dificultosamente contenida mientras dure el prestigio y el dominio polí-

tico del general Páez, primero, y de otro libertador, el general Monagas, después. Eso quiere decir que el orden lo mantiene quien ha adquirido su fuerza en el desorden de la guerra. Desobedecerle no es entonces sino una forma de crearse su propio orden, su propia legitimidad.

Como lo expresara algún tenaz guerrillero a principios del siglo veinte, el acceso a la legitimidad y al orden propios no es sino una cuestión de distancias: «la misma que hay de Capacho a Caracas, la hay de Guaitó a Caracas». Es aquí donde la idea del orden va tomando sus características míticas más acusadas: vendrá amarrado a la cola de un caballo. Pero es imposible la abstracción, porque hay demasiados caballos, y quienes los monten.

Ésa será la historia de nuestro siglo XIX: la búsqueda inútil de un orden, que en el ámbito cotidiano traduzca paz y seguridad, y en el de la abstracción teórica la creación de un Estado. A lo largo de una guerra que va a durar cien interminables años (de 1810 a 1903), el orden adquirirá caracteres míticos, y se situará siempre en el futuro. Cada vez que uno de los caudillos regionales se alce para romper el frágil equilibrio entre la paz y la guerra, siempre será con la promesa de instituir, no su orden particular, sino el orden general.

O sea, ese mismo orden que el país anhela: cada vez que un caudillo se alce, la suya será, en el discurso, «la guerra que cerrará el ciclo de nuestras guerras civiles».

El hombre que mayores esfuerzos haga por imponer ese orden, por crear el Estado, será quien mejor defina la situación permanente: «Venezuela es un cuero seco, lo piso por un lado y se levanta por el otro», dirá Antonio Guzmán Blanco. Pero apenas él abandone la escena, sea temporaria o sea definitivamente, el cuero vuelve al alzarse, prácticamente sin zonas lisas.

La situación es tal, entre 1888 y 1903, que muchas de las mentes más lúcidas llegan a pensar que Venezuela no conocerá como nación el siglo XX, sensación que se afirmará cuando, al terminar el

año 1902, las más poderosas y hasta entonces (y también después) enfrentadas potencias europeas lleguen a bloquear sus costas.

Venezuela parece haberse dado cuenta entonces de que un país no puede vivir en anarquía; que mientras no exista como nación no se le podrá tomar en cuenta como nación. Es así como la llamada «Revolución Libertadora» será el último «orden» propuesto que al final derivará en su contrario, en el orden real y permanente de la creación de un Estado.

El hecho es que la situación permanente de disolución social, la transformación del país en un campamento, irá creando un peligroso reflejo: el anhelo del orden privará por encima de cualquier otra consideración, otra reivindicación: el país estará así maduro para una dictadura.

La confusión entre la paz y el orden, o mejor entre la paz y la dictadura, facilitarán el arribo al poder de Juan Vicente Gómez. Un poco de verdad y un poco de propaganda han hecho de él, como lo calificó su propio jefe, Cipriano Castro, a raíz de su victoria en Ciudad Bolívar, «el pacificador de Venezuela».

Después de esta batalla, en efecto, Venezuela se ha pacificado. En cambio, Cipriano Castro, en parte por sus ultranzas verbales, hace planear sobre el país horrorizado, la amenaza de una nueva guerra, esta vez acaso internacional. Al final, comenzará a plantearse, primero sutil y escondidamente, luego en forma más abierta, la idea de un Gómez pacificador y un Castro guerrero.

Así, en 1908 ya estará completo el cuadro. Gómez tiene el control de sus ejércitos, y la seguridad, al menos de la benevolencia de la opinión que en ese momento quiere cualquier cosa menos Castro y menos aún que Castro, la perspectiva de una nueva guerra. Es por eso que, por boca entre otros de Rómulo Gallegos, la reacción de Gómez contra Castro, su asunción de la totalidad del poder, serán saludados como un «milagro político»: el orden, por fin, se aposentaba sobre Venezuela.

Hay algo que no se dirá o por lo menos se evitará sospechar en 1908, pero que se hará patente a partir de 1913: el orden que se instala en Venezuela no será, por así decirlo, un «orden-orden» y nada más. La verdad es que será un orden personalizado, un orden gomecista. Esto condicionará aquello, esta particularidad condicionará la generalidad.

Pero ese orden así establecido va a adquirir por primera vez su condición de mito, a través de su transformación en ideología, gracias en el ámbito teórico a la labor de maquillaje ideológico de los positivistas. Es bien conocida la fascinación que esa sola palabra, orden, produce desde siempre entre los positivistas, a comenzar por el propio Comte que, pese a ser, como solía decirse entonces, librepensador, se sentía fascinado por ese modelo de orden y de coherencia que era la Iglesia católica.

Los países donde la ideología del orden tuvo mayor audiencia e influencia fueron Brasil (donde llegaron a inscribir en la bandera de aquel país la consigna «*Ordem e Progresso*»); México (sobre todo a través de la prédica de Justo Sierra y con la magnífica concreción práctica que fueran los treinta años del porfiriato); y Venezuela, donde Vallenilla Lanz, luego de mezclar concienzudamente los términos de democracia e igualitarismo, dándole a ambas la connotación de barbarie, parroquialismo y rechazo de todas las reglas sociales, daba cuerpo a un hegemón hijo de tal democracia, encarnándola y sublimándola, para establecer el orden necesario al progreso de toda república.

Pero el orden personalizado tiene un problema, y es que el binomio «orden-ordenador» tiene una tendencia irrefrenable a aceptar una lectura inversa. Así, no es que todo ataque al orden gomecista derive en un ataque al general Gómez, sino que todo ataque al general Gómez es un ataque al orden. Y el régimen del general Gómez, aparte de autoritario y peculador, es también nepótico y compadresco. Así, bajo la cubierta del orden general de la

sociedad, en verdad se protege el desorden de la familia Gómez, extensa por la consanguinidad, por la afinidad y por la asimilación de la amistad simple o del sacramento a la relación de consanguinidad.

Como si eso fuera poco, si los venezolanos han aceptado el orden gomecista es porque habían hecho la traducción, corriente en 1908, del nombre propio *Gómez* como antónimo del sustantivo *guerra*; pero una vez hecho del poder, o mejor dicho, una vez que, a través de la consolidación de su régimen, había logrado asentar su propio orden y, seguía pretendiendo, la paz, el general Gómez reintroduce la guerra, es decir rompe el orden a través del empleo de métodos guerreros en una Venezuela pacificada: son las horribles torturas, el aislamiento y el maltrato de sus opositores políticos en la cárceles de la tiranía.

De esa forma, los venezolanos comienzan a aprender una dura lección: la dictadura no es la forma más notable y mucho menos única del orden, sino por el contrario una forma sesgada y a veces implacable del desorden. Fue necesario que la muerte se llevase al tirano para que el país supiera qué magnitud había alcanzado el desorden.

No se había cambiado un desorden por un orden: se había cambiado de desorden, el de la guerra por el de la tiranía. Por supuesto que, una vez muerto Gómez, sus partidarios y en general todas las fuerzas opuestas al cambio comenzaron a agitar el espantajo de la anarquía, del nuevo desorden guerrero.

III

Había muerto, como dijo Vallenilla, «el loquero de Maracay» y este país se sumiría de nuevo en la locura, en la anarquía y en la guerra. Pero a medida que pasaban los días, se revelaba que el país había comprendido una cosa: que el desorden no se combate con

otro desorden. Que el único orden verdadero es el que se asienta en una verdadera aceptación popular.

Ese orden se ha ido imponiendo, de una manera u otra, en la Venezuela de los últimos sesenta años. Puede parecer una paradoja, pues pocas veces en nuestra historia se ha disentido tanto, y se ha dado a ese disentimiento una forma que algunos oídos sensibles pueden percibir como desorden. Pero hay al menos tres elementos que indican que por encima de todas las exageraciones y los altos decibeles de la protesta y del disentimiento, el orden, verdadero por su solidez, se ha ido asentando en el país.

El primero de ellos es que nadie ha intentado atentar contra la unidad y la integración nacionales. Dicho de otra manera, que la «federación», en tanto ella pudiese significar anarquía, dispersión y disgregación, parece haber muerto definitivamente. Nadie ha buscado imponer una nueva dominación regional, ni nadie ha protestado siquiera porque éste o aquel gobernante sea malo (o en el caso contrario, bueno) por ser «andino» o «centrano». Y ni siquiera regiones de tanta riqueza y durante tanto tiempo aisladas del centro como los Andes o el Zulia, han cedido a las tentaciones del independentismo, de la secesión. Si en algún momento de los años veinte, alguien llegó a pensar en la formación de una «República del Zulia», ese pensamiento no anidó, que se sepa, en ningún cerebro venezolano.

En segundo lugar, desde 1903, salvo las fugaces excepciones de 1929 y de la «lucha armada» izquierdista de los años sesenta, muy pocos han intentado expresar su disentimiento desatando una guerra civil; y han encontrado siempre el repudio nacional. Sobre todo, se ha logrado desanudar el embrollo que hacía sinónimos política y guerra.

Por el contrario, y esto sea dicho en tercer lugar, sesenta años largos parecen haber demostrado que en Venezuela la sinonimia aceptada cada vez con mayor énfasis es entre orden y democracia.

Sin embargo, esto no quiere decir que esa sea una situación definitiva, que la sinonimia entre democracia y orden se haya impuesto para siempre. En ninguna sociedad (y la nuestra no tiene razones históricas para ser la excepción, bien al contrario) las pulsiones autoritarias dejan de estar ausentes. En los momentos críticos, siempre hay la nostalgia del «orden» paternal, siempre hay la nostalgia del claustro materno. Esa es siempre la bandera de los demágogos de todas las tendencias, y en la Venezuela presente parecen haber encontrado un terreno fértil.

¿LA GRAN REVOLUCIÓN DE FIN DE SIGLO?

Introducción

La mayor revolución de los años noventa tiene una tendencia y un carácter descentralizadores. Ella cierra un ciclo de dos siglos exactos, de 1789 a 1989, doscientos años de los más cargados de historia en todo el proceso de la evolución de las sociedades humanas. Ellos van desde el paroxismo centralizador del jacobinismo y el bonapartismo, hasta la caída del Muro de Berlín.

Este proceso ha derivado a veces en anarquía, otras en simple anarquismo. En sus manifestaciones más espectaculares, abarca no solamente a los países «balcanizados» de vieja data, sino también a países de mayor desarrollo político, como los EEUU y Canadá.

Nos proponemos un tratamiento de ese proceso, tanto en Venezuela como en el mundo, desde la perspectiva del historiador. Por eso, debemos precisar que emplearemos el término «descentralización» en un sentido diferente al que le dan los constitucionalistas, los juristas e incluso los mismos politólogos. Para nosotros, en sencillamente una forma de la lucha permanente entre la sociedad y el Estado.

Por el carácter mismo de esta exposición, no hemos querido recargarla con un pesado aparato crítico de citas y referencias como sería de rigor en una disertación académica.

I. La descentralización política en los años noventa

A. Antes que nada, creemos conveniente explicar en qué sentido emplearemos el término descentralización política. Aceptamos la idea de que ella sea (como su contrario, la centralización) una directiva de organización en sentido amplio, y no un concepto inmediatamente operativo, tal como lo definía Fabio Roversi-Mónaco en 1985; de que ella sea una cuestión instrumental y no un fin en sí mismo, como lo asienta Maruja Delfino en un trabajo suyo en curso de impresión; y, por supuesto, de que aquélla es un proceso ambivalente que no produce necesariamente efectos democratizadores (*ibíd*); y mucho menos en lo inmediato.

Pero sólo muy parcialmente aceptamos en nuestro uso del término la idea de que la descentralización política exprese un derecho autónomo, si eso se confunde con el federalismo.

Emplearemos la fórmula de descentralización política en un sentido mucho más amplio o acaso más restrictivo: se trata de la tendencia de sociedades llegadas a un cierto grado de desarrollo o de madurez políticas (eso la distingue de las tendencias anárquicas, parroquialistas, disgregativas) a tomar para la sociedad poderes, funciones y prerrogativas que hasta entonces estaban concentradas en el poder central.

En tales condiciones, la descentralización política tal como la concebimos, está íntimamente ligada a otros dos conceptos: participación y democratización.

Por otra parte, y esa es la gran diferencia con la anarquía pura y simple, para evitar que las tendencias descentralizadoras desemboquen en eso, para que se pueda hablar de plena descentralización política, es necesario que su proceso sea pacífico y conduzca siempre a la ampliación de la democracia, no a su restricción.

Esto quiere decir: uno, que la descentralización *política* es sobre todo esto último, para lo cual debe ser también consensual (eso le asegura legitimidad) y legal. Dos, que sea descentralización de verdad, y no una re-centralización a una escala menor, mínima en caso extremo. Eso para que logre evitar los escollos, sortear los peligros a que aludiremos más abajo.

B. Al decir que la gran revolución de los noventa es la descentralización, queremos decir que las conmociones políticas más características de este fin de siglo y de milenio tienen un carácter descentralizador. No tenemos sino que ver el estallido de algunos conjuntos federativos (nombre que algunos de ellos empleaban expresamente) como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Federativa de Yugoslavia, la República Socialista de Checoslovaquia.

Pero también fuera del ámbito del antiguo «bloque socialista» así llamado, se han estado dando, con sus características particulares y sus formas propias, algunos movimientos en ese sentido: en Canadá, en España, en México e incluso en Estados Unidos de América.

Esta revolución descentralizadora cierra un ciclo de dos siglos exactos de historia universal, los que van de la toma de la Bastilla a la caída del Muro de Berlín (1789-1989). Como suele suceder, el señalamiento de fechas muy precisas es algo convencional. En verdad, estamos hablando en el primer caso más del momento en que la centralización jacobina (y posteriormente napoleónica) se convirtió en ejemplo y modelo para la creación de Estados-Naciones contemporáneos. Sobre todo en Europa y en la parte latina de América, hasta el colapso de los regímenes que quisieron, confesamente, continuar y culminar la obra de la Convención y del Imperio. Se puede decir que en esos dos siglos, la centralización, algu-

nas veces a ultranzas, y también muy sangrienta, fue el proceso que dio el tono a la historia. Eso condujo a la formación ya definitiva de los grandes Estados-Naciones europeos; dio el tono (desde antes del 79) a la revolución inglesa en el siglo XVII; a la revolución francesa en el XVIII; a la unidad italiana y alemana en el XIX; a las revoluciones rusa y china en el XX; así como a las confesas contrarrevoluciones nazi y franquista.

Colmo de los colmos, el Estado del federalismo ejemplar, espejo de todos los liberales y de los federalistas, se llenó de sangre en un implacable proceso centralizador, produciendo el conflicto armado más grande y cruento del siglo XIX, la Guerra de Secesión; y luego el interminable genocidio de los pieles rojas, hasta llegar a ser hoy el Estado más poderoso del mundo: Estados Unidos de América.

Para completar el cuadro, los más radicales centralizadores de los dos últimos siglos han sido alógenos, hijos de pueblos y regiones de la periferia, o sea, de los que iban a ser las primeras y designadas víctimas de cualquier proceso centralizador: Napoléon Bonaparte, un corso; Iosif Djugazvily-Stalin, un georgiano; Adolf Hitler, un austríaco.

C. Esta revolución ha sido, como todas ellas, brusca en su estallido, pero no necesariamente violenta. Tanto es así que en Checoslovaquia se le llamó «revolución de terciopelo», donde la violencia no pasó de las palabras (se habló de la «masacre de la Plaza San Wenceslao», pese a que allí no hubo ni un muerto).

La violencia ha venido después, con la anarquía y la guerra civil; pero eso ha sucedido en los países con una larga tradición de intolerancia nacional y religiosa, en un viejo proceso que no por caso se llegó a llamar hace mucho tiempo «balcanización».

Incluso en países con una larga tradición guerrera, revolucionaria, al estallido de la crisis ha seguido un inmediato y prolongado proceso de negociaciones, y hasta se ha llegado a decir con mucha razón que en el conflicto de Chiapas en México han brillado

más los *flashes* de los *mass-media* que los fogonazos de los fusiles.

En los países más desarrollados, eso ha tomado diversas formas: desde la violencia ciega, como en el caso de los «anarquistas de derecha» norteamericanos cuya manifestación más espectacular fue la bomba de Oklahoma; y la furia asesina de los separatistas vascos y de algunos grupos similares en Córcega. Entre los miembros del G-7 de los países más ricos, eso ha tomado formas más pacíficas pero no necesariamente menos primitivas.

En Quebec se ha manifestado civilizadamente una comprensible reivindicación nacional; en Italia del Norte ha tomado en cambio la forma de un vociferante y hasta obsceno particularismo. Y ya que se ha nombrado a estas últimas regiones, pretender que la tendencia descentralizadora sea la natural contrapartida de una extrema centralización previa, combinada con un bajo nivel de vida, explotación económica y opresión social y política, haría inexplicables estos dos últimos casos.

D. El cual ha coincidido en otras partes con un fenómeno originado por la dinámica misma de todo rechazo: se pasa de aborrecer el Estado centralizado a la detestación de toda forma de organización no solamente estatal, sino mediadora entre el Estado y la sociedad; y en primer lugar del partido político.

El rechazo del Estado lleva, como entre los anarquistas pero desde el extremo contrario, al rechazo de la política que, como lo ha dejado asentado Joachim Fest en su análisis del hitlerismo, no es sino la negación de la realidad: lo que nos disgusta no se combate; sencillamente, no existe. Eso crea un ambiente parecido al que originó las guerras de religión: el no reconocimiento de la existencia del enemigo.

E. Lo curioso de este proceso es que, en su manifestación de estallido nacional, ha coincidido con el apogeo de lo que algunos han querido considerar como el renacimiento del liberalismo, olvidando que éste no puede confundirse con una forma de organi-

zación económica. Para Lord Acton, el gran fracaso del liberalismo vendría cuando se revelase la inviabilidad de los estados multinacionales. Porque señalaría también de una forma u otra, el entierro de lo que está en el origen y en la base del liberalismo como actitud, como teoría y como *praxis* política: la tolerancia.

F. Aquí está el gran peligro de ese proceso: que lo que comience como una reacción normal ante la centralización y el estatismo excesivos, y como una búsqueda de la sociedad por arrancar espacios de poder al Estado, se convierta en una compulsión centrífuga que lleve por un lado a la anarquía y en algunos casos a la guerra civil; y por el otro, a la eclosión de particularismos étnicos, religiosos o culturales.

A eso hay que agregar una situación muy particular de nuestro fin de siglo: la rapidez de las comunicaciones, la masa de información que hoy puede llegar al hombre de la calle desde las regiones más apartadas, puede ser un vehículo también para el contagio de ese tipo de epidemia, de esa derivación aberrante de un justo combate.

G. En esas condiciones, lo que se ha señalado como la gran revolución de los años noventa se podría transformar en una terrible contrarrevolución, con todos los significados negativos que semejante caracterización engloba:

a) el reaccionarismo (ultranacionalismo en Rusia);
b) el autoritarismo (en buena parte de los países de la antigua URSS);
c) la «limpieza étnica» (Serbia);
d) la intolerancia cultural y religiosa (antisemitismo en Rusia y en Europa Oriental, donde también se da la persecución de los gitanos);
e) por el otro lado, la violación de los más elementales derechos humanos, cubiertos bajo el manto del respeto debido a los particularismos culturales (países árabes y africanos, Irán);
f) como remate, la tendencia a resolver todas esas contradicciones por medio de la lucha armada.

II. El caso venezolano

A. Reiteremos aquí que gran parte de la confusión existente alrededor del proceso descentralizador como del término mismo, proviene de la creencia en que el mismo designe a una realidad pura –o al menos fundamentalmente– administrativa y por lo tanto también una cuestión puramente técnica. No solamente la descentralización política tal como la hemos definido arriba es mucho más importante e inclusiva, sino que también, y es lo que nos proponemos demostrar ahora, ha precedido en Venezuela a cualquier pensamiento o acción sobre la descentralización administrativa. No comprender eso (o comprenderlo mal) nos llevaría no solamente a la ciega incomprensión del caso venezolano, sino a algo peor: puede llevarnos a abortar un desarrollo que, bien entendido, sería una de nuestras mejores y mayores conquistas del siglo veinte y del veintiuno.

B. Para plantear el asunto en sus justos términos, hay que decir que durante mucho tiempo, en Venezuela se confundió unificación territorial con centralización administrativa y sobre todo con lo que podría llamarse *unicidad* política.

Este último término se comprenderá mejor si precisamos que la política se centraba, se manifestaba, se ejercía entonces en el *Uno* (así, con mayúscula) y que durante veintisiete años se llamó Juan Vicente Gómez. El cual número uno, a su vez, resulta ser el creador del Estado venezolano.

Dicho en términos más generales, que para descentralizar el Estado, es necesario que el Estado exista, que sea fundado, y eso

fue lo que hizo el general Gómez. Como suele suceder, esa creación tuvo dos características iniciales: el despotismo y el personalismo. Lo cual se puede sintetizar diciendo que el venezolano fue en sus inicios *el Estado gomecista*. Eso le impuso, por la fuerza de las cosas, sus características a su contrario, el estado descentralizado: debía ser impersonal y debía ser democrático.

C. Romper con la *unicidad* política fue entonces el primer paso hacia la descentralización. Se incomprende un proceso más profundo y significativo cuando se dice que el proceso descentralizador comenzó con los «polos de desarrollo» a finales de los años sesenta; o en los años 80 con la creación de la COPRE; ni tampoco con la Ley de 1989 y con su resultado más espectacular, la elección directa de gobernadores y alcaldes. No: el proceso descentralizador comenzó en 1936, con la búsqueda de la democratización, reivindicada con ritmos e intenciones diferentes por el gobierno y la oposición.

Democratización quería decir ruptura, o por lo menos alejamiento, de ese centro atosigante; quería decir una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Ese ha sido un proceso indetenido que no han logrado detener los esfuerzos dictatoriales de Pérez Jiménez entre 1952 y 1958, ni las intentonas militares de 1992.

D. Tres condiciones debían darse para que el proceso descentralizador pudiese largar amarras: la paz; la formación del Estado y la integración nacional.

a) Una paz prolongada, porque en la mente de los venezolanos estaban inscritas dos palabras: «guerra larga», como se llamó a la revolución federal que se inició en 1859 y supuestamente terminó en 1863, pero que en verdad sólo vino a culminar en 1903, por lo que José Gil Fortoul prefiere llamar a ese medio siglo el de «las guerras federales».

Durante buena parte del siglo pasado, cuando se quería describir o pronosticar una calamidad natural, como un terremoto o una inundación, se solía gritar «¡Federación total!». El espantajo de

ese medio siglo es agitado a veces todavía por quienes de una forma u otra son partidarios de conservar las riendas bien cortas al populacho.

Lo cual es olvidar que en aquella Venezuela la inmensa mayoría de la población vivía en el campo, y hoy la situación es diametralmente opuesta; que no tenía casi vías de comunicación, y que hoy es un país muy bien comunicado; que tenía mil ejércitos y hoy sólo hay uno.

b) Ese ejército nacional unificado fue la columna vertebral en la formación del Estado, como sucede siempre. La existencia de ese Estado cuya dominación se extiende por todo el territorio nacional, es la garantía de que la descentralización no vaya a derivar en anarquía ni mucho menos en guerra civil. La combinación de un ejército nacional y de un Estado, con todas su fallas y debilidades, reconocido nacional e internacionalmente, ha impedido que las pulsiones centrífugas le vayan a dar el tono a la descentralización política.

c) Finalmente, para que ese proceso descentralizador, en lo político pero también en lo administrativo, se diese, era necesaria la integración nacional, no solamente por su unificación gracias a un buen sistema de comunicaciones principalmente terrestres, sino también por avances en el terreno de la conciencia: ya en los años veinte, Laureano Vallenilla Lanz consideraba ese proceso concluido; tal vez exageraba, pero hoy sí se puede decir eso.

E. Durante un buen tiempo, casi medio siglo, los agentes de esa descentralización fueron los partidos políticos, el más inmediato canal de participación popular; y el más avasallantemente exitoso, ante la ausencia de competencia real en el seno mismo de la sociedad. Pero el partido político tuvo en Venezuela una particularidad que, hasta donde sabemos, nadie ha puesto de relieve. Él podía garantizar la contención de las tendencias descentralizadoras dentro de límites manejables.

Dicho en otras palabras, el partido político viene siendo así una lámpara de Aladino capaz de encerrar el genio popular y evitar que se desmande. En principio, eso lo podría hacer cualquier partido, pero en Venezuela las pulsiones centrífugas son todavía demasiado recientes, demasiado sangrientas y sobre todo demasiado temidas. Por esa razón, el modelo preferible era el de un partido fuertemente centralizado. Esa es la razón de la profunda influencia del leninismo en los partidos venezolanos. Por esa razón, para el líder político de mayor influencia en la Venezuela de este siglo, Rómulo Betancourt, el leninismo no fue una calistenia ni un sarampión de los años mozos, sino una teoría y una praxis profundamente anclada en su cerebro de dirigente político. Por esa razón, en Venezuela se ha dado, con Acción Democrática, un caso único en el mundo: un partido leninista no-marxista.

F. Pero el partido leninista, como agente de descentralización política, lleva en sí el germen de su propia destrucción: porque es un partido tendencialmente centralizador y por lo tanto se convierte a la vez en un agente de re-centralización. Mucho más si su vocación es la de partido único, cosa que, *nolens volens*, llegó a ser Acción Democrática en los años cuarenta: porque no tenía rivales en el seno de la sociedad (ni sindicatos, ni partidos, ni organizaciones empresariales, ni la Iglesia), y ni siquiera, dignos de tal nombre, en lo que se podría llamar el país político.

Ese monopolio social del partido político ha sido la causa de su ruina presente. Concebidos como formas primarias de la descentralización política, los partidos se han convertido al final en los agentes más activos de una nueva centralidad, y al interior de ellos mismos configuran, como lo previó Robert Michels a principios de siglo, esa estructura cerradamente vertical, esa oligarquía plebeya llamada popularmente «cogollo».

Situándolo en su perspectiva histórica, el proceso descentralizador no es otra cosa que descentralización política. Eso no debe

perderse nunca de vista. Descentralizar no es simplemente tomar algunas decisiones administrativas para agilizar las estructuras del Estado. Descentralizar es ampliar los canales de participación política; y uno de esos canales es, sigue siendo y muy principal, el partido.

G. Pero es necesario descentralizarlo a su vez políticamente, romper sus «cogollos». Aquí surge un nuevo elemento, al preguntarse cuál será el destino del partido político a medida que avance el proceso descentralizador, participativo y democratizador: ¿Desaparecerá? ¿Se convertirá por el contrario en un agente activo del proceso en su culminación, tal como lo fue en su comienzo? Si se plantea la descentralización política como un proceso democratizador, no se puede pensar en la desaparición y mucho menos en la supresión de los partidos. Tal vez, cuando mucho, en la desaparición de los actuales. Creemos que, frente a esa realidad, si realmente quiere transformarse y seguir siendo una fuerza decisiva en la sociedad y en la política, al partido político se le abren dos perspectivas o posibilidades:

a) conserva su carácter centralizado aunque abandone su vocación centralizadora, con lo cual podría transformarse en un elemento de equilibrio entre las tendencias centrífugas y centrípetas;

b) se descentraliza, incluso se «federaliza» pero sin caer en el «re-caudillaje» que, como hemos dicho, no es sino un centralismo a escala menor.

Si hemos puesto el acento en el partido político, es sobre todo porque es el blanco del ataque de amigos y enemigos de la democracia. Pero pensamos que sólo el ingreso de nuevos actores políticos y sociales le hará perder ese carácter monopólico que los ha llevado al desastre.

Conclusiones

La gran revolución de los años finales del siglo veinte tiene un carácter y una tendencia descentralizadores, y esto en el área regional como en todo el mundo.

Ambas cosas podrían parecer contradictorias, pero la aparente paradoja se resuelve al sacar la idea de descentralización del ámbito estrechamente administrativo y técnico para situarla en el terreno político. Allí, el tema de la descentralización se plantea sobre todo como el episodio más importante de la lucha entre la sociedad y el Estado.

En esas condiciones, se puede decir que la integración latinoamericana será descentralizadora o no será. Esto quiere decir que será un combate político cuyas condiciones han de ser la paz, la democracia y la integración.

La paz porque de otra manera el proceso podría desembocar en anarquía; la democracia porque es la garantía de la legitimación del Estado a través del consenso y la participación; la integración porque el futuro parece orientarse a la creación de grandes bloques regionales, y porque es una garantía de que el proceso no será bastardeado por los particularismos regionales que conduzcan a una re-centralización pero a escala menor. Por eso, nuestra integración será descentralizadora o no será.

CARTA A UN JOVEN DESILUSIONADO QUE DETESTA LA DEMOCRACIA

Hoy es 23 de enero. Como seguramente te han dicho o lo has leído, en este mismo día, cuando tu padre tenía apenas diez años, se produjo el derrocamiento de una tiranía y el advenimiento de la democracia. En esos términos, ambas cosas son falsas. Lo correcto sería decir que en esa fecha se produjo el derrocamiento de *la* tiranía y el advenimiento de *una* democracia.

Porque la tiranía busca ser y parecer una sola, inconmovible al paso del tiempo; mientras que lo característico de la democracia es su pluralidad: ella cambia no sólo con el tiempo, sino incluso con el número. Así, puede decirse que hay tantas como países existen, como momentos existen de la historia, y hasta tantas como ciudadanos existan.

Cuando alguien pretende que sólo hay una forma de democracia, y que ella debe ser obligatoria, puedes estar seguro de que no es un demócrata. Pero además, hacer arrancar el advenimiento de la democracia venezolana el 23 de enero de 1958 es una operación ideológica asaz corriente, producto de una tendencia muy normal a identificarla sólo con ciertas formas de gobierno; y por otra parte, a ver los procesos históricos sólo a través de sucesos (so-

bre todo de los momentos de ruptura) y no como el desarrollo de procesos y de sus elementos de continuidad.

Todo esto, lo sé, te puede parecer un poco abstracto. Trataré de ser más claro recurriendo a algunos ejemplos prácticos, extraídos de nuestra historia. Lo de «operación ideológica» quiere decir que quien la ha armado no está necesariamente procediendo de mala fe, ni mucho menos piensa estar mintiendo. Simplemente, actúa como todos tenemos tendencia a hacerlo: creyendo que la historia comienza con nosotros y posiblemente termine con nosotros.

Por otra parte, también es muy frecuente creer que existe democracia desde el momento en que existe un gobierno democrático o incluso una determinada forma del mismo. En el caso que nos ocupa, lo curioso es que señalar el 23 de enero de 1958 como el día inaugural de nuestra democracia no solamente se escucha en labios de sus partidarios, sino también en los de sus enemigos abiertos pero sobre todo de los solapados.

Porque se pronuncia esa palabra para rodearla de las peores características, problemas y taras de la situación presente. Con esto caemos en lo vivo del asunto que motiva esta carta: uno, tu situación actual (*nuestra* situación actual); dos, el significado, la validez, la utilidad mismos de la democracia. En el primer caso no pretendo negar ni disimular las dificultades presentes, ni el aborrecimiento que merece una realidad como ésta. En el segundo, no temas: no pienso caer en definiciones generales, ni en atascos semifilosóficos.

Como remate, tampoco pienso entonar ningún himno a la democracia y sus bellezas: porque no tengo aptitud ni actitud de poeta; y porque durante muchos años, yo tuve parejos aborrecimientos, no totalmente curados.

Vamos con lo de la situación presente. La subida brusca y veloz de los precios, y la lentísima progresión del salario han golpeado duramente tu familia y a ti mismo.

Sientes que has debido privarte de muchas cosas que tus (no tan) mayores conocieron, desde un televisor hasta un teléfono; sin hablar, porque acaso nunca te lo planteaste, de un automóvil; e incluso, de algo tan indispensable como un par de zapatos. Peor aún, hay cosas que han desaparecido de tu mesa diaria: hay menos carne, y cada día más pasta, más maíz, más arroz o las insípidas sardinas. Y a veces, en tu casa o en la de algún amigo tuyo, y en todo caso en la de mucha gente de tu edad, ni eso.

Oyes las quejas de tus padres porque cada día sube el recibo de la luz; porque van a cortar el teléfono; porque ahora deben comprimirse más en el ya escaso espacio de tu apartamento, para acoger a tu hermano y a su joven esposa encinta. Cada día se repite en casa que no puedes darte el lujo de enfermar, o de tener uno de esos accidentes comunes entre los jóvenes: una pierna rota o la cabeza; un ataque de apendicitis o una hernia estrangulada. Porque tus padres no tienen dinero para pagar las carísimas clínicas privadas; y si caes en un hospital público, a lo mejor no encuentras ni siquiera el médico que te dé la impresión de que no estás a solas con tu dolor: está en huelga.

Como tal vez estén en huelga tus profesores, en el liceo o en la universidad. Adonde por lo demás tampoco da ganas de ir, para no ver los pupitres rotos, las paredes húmedas y descascaradas, las bibliotecas desordenadas y vacías cuando no inexistentes, los libros escasos y muy caros, los profesores en permiso legal o en retardo ilegal, o simplemente «matando tigres», como se dice, para cuadrar su presupuesto que nunca se equilibra para llegar a fin de mes. Y si te empeñas en asistir allí es porque en todo caso, adentro se estará casi siempre más seguro que «por esas calles» donde reinan el hampa y una policía desmoralizada y corrompida.

En tales condiciones, ¿puede extrañarle a alguien que descreas de la democracia? A nadie puede extrañarle que descreas de todo, pero llama la atención que tu primera reacción sea aborrecer

la democracia. Y que, por lo tanto, cuando se te interrogue para una encuesta, digas que el mejor gobierno que haya tenido Venezuela en el último medio siglo sea el de Marcos Pérez Jiménez. Aunque te cueste admitirlo, porque no se trata de algo expreso, tal descreimiento y tal conclusión son en ti menos espontáneos de lo que sospechas. De una forma u otra has sido inducido a ello, en parte por una cierta percepción de la realidad no por incorrecta menos normal; en la otra por la falsa imparcialidad de quienes te hacen preguntas al respecto.

Vamos con lo primero: lo de la incorrecta percepción de la realidad. ¿Estoy diciendo que si ves todo con tonos tan negros, eso es sólo producto de una visión aberrada, y que todo es, en verdad, del brillante color de los mejores sueños? Pretender eso sería no sólo imbécil sino inútil: te bastaría para desmentirme echar un vistazo a tu alrededor o, sin ir demasiado lejos, citar este mismo texto un par de cuartillas antes. La distorsión se refiere a otra cosa.

En primer lugar, cuando, con mucha razón, aborreces la realidad presente, a medida que pasan los días y que las cosas empeoran, es más que normal también que vayan creciendo tus detestaciones. Es entonces frecuente y explicable el proceso por medio del cual pasas de rechazar *un* gobierno democrático a detestar *los* gobiernos democráticos y de allí al aborrecimiento de *la* democracia.

Es normal porque todos tendemos a reaccionar de la misma manera cuando nos quebramos tontamente una pierna, nos estalla un caucho en una oscura medianoche, nos quedamos sin un centavo en mitad de semana, nos deja el autobús o la novia: «¡Eso no me sucede sino a mí!». Las crisis se han sucedido numerosas en la historia, pero creemos que la peor es la que vivimos.

En segundo lugar, en este caso interviene una cierta y no siempre desinteresada manipulación: ella es patente cuando escuchas a gente muy respetada, muy notable; cuando ves (también y sobre todo) a algún omnipresente *speaker* de la televisión decretar con

mirada ambigua y gestos definitivos que estamos viviendo la crisis más grande de nuestra historia. Lo cual indica apenas que no tienen la menor idea de qué diablos significa la palabra *crisis* ni tampoco cuántas ni cuáles se han producido a lo largo de nuestra historia. Pero esto es lo menos importante, frente a lo que sigue: «ésta es la democracia; diga Ud. entonces ¿cuál es el mejor gobierno que hayamos tenido?». La pregunta trae ya envuelta la respuesta: la antidemocracia, un régimen antidemocrático, una dictadura, Pérez Jiménez.

Respuesta inevitable porque quienes la hacen no han elaborado en realidad una pregunta sino un retrato hablado (y no nos vengan con el cuento de que la televisión es una cosa y las encuestadoras otra: estamos hablando de un clima, o para decirlo con una expresión de moda, de una «matriz de opinión»).

Pero aceptemos el reto y examinemos primero esta historieta de «Pérez Jiménez, el mejor gobierno». Creo que tus mayores, que vivimos esa dictadura, deberíamos hacernos una seria autocrítica: si hoy tú te dejas llevar tan fácilmente a esa conclusión, en gran parte se debe a nuestra renuencia a analizar con seriedad ese régimen e incluso a hablar de él: un gobernante hubo que hasta se jactaba de nunca nombrarlo, por asepsia. Es que para nosotros resultaba axiomático que el de Pérez Jiménez era un gobierno tan malo, que decirlo era llover sobre mojado, y explicarlo, perder el tiempo: nos bastaba saber que, caso raro en nuestra historia desde el 19 de abril de 1810, este gobernante había sido echado por la calle en rebeldía. Nunca olvidaré un titular a ocho columnas de *France-Soir*, el vespertino de mayor circulación en Francia, que por primera vez (y en su primera página) nombraba a nuestro país: «Al precio de cuatrocientos muertos, Venezuela echa a su dictador detestado».

Ese era el tono de la prensa en todos los países de gran desarrollo político: pocas veces el prestigio del nuestro había llegado tan alto. En cuanto a nuestro silencio, la más elemental elegancia intelec-

tual nos lo imponía: romperlo era como responder a esos ramplones escribidores de cartas cuya defensa del dictador se refiere sistemáticamente menos a su labor de gobierno que a sus atributos viriles: es «el hombrazo», el machísimo compadre cuya potencia tanto enorgullece a estos curiosos cultores del *voyeurismo* político.

Aunque resulte repugnante, debemos comenzar por ahí. Porque en la exaltación o la simple tendencia a añorar la dictadura está latente ese culto del macho anclado en las zonas más oscuras del inconsciente colectivo, en especial del latinoamericano. Pero si (a sabiendas o no) tú buscas la protección de un «hombrazo», mejor mira a otro lado. Marcos Pérez Jiménez podrá tener, como todo el mundo, algunas, incluso muchas, virtudes personales; pero entre ellas no está ciertamente el valor físico.

En eso, no se puede comparar con otros tiranos de este siglo: ni con Cipriano Castro que entraba al fuego sin mirar atrás; ni con Juan Vicente Gómez, quien en la batalla de Carúpano no atendió, hasta el combate concluido, una herida de bala que le entró por la ingle, y casi le hace perder una pierna. No se puede comparar tampoco con el primer gobernante democrático, con un Eleazar López Contreras que llevaba en su cuerpo las balas atrapadas en su campaña con «los Sesenta»; ni con un gobernante civil como Rómulo Betancourt, quien se sobrepuso a sus horribles quemaduras para hablar al país horas después del atentado de «Los Próceres». Pérez Jiménez es, en cambio, uno de esos bienvestidos oficialitos de parada que sólo han conocido el olor de la pólvora en las fiestas patronales: en 1945, se entregó antes de echar el primer tiro; en 1958, apenas los oyó, huyó con tanta prisa que abandonó en el aeropuerto la famosa maleta repleta de millones que sirvió para condenarlo a prisión y hacerlo extraditar.

Como sea, la pregunta del encuestador no se refiere a la persona de Pérez Jiménez, sino a su gobierno, del cual se encomia su eficiencia y su capacidad gerencial, si se compara con lo que siguió.

Es más que cierto que esto último no ha tenido las perfecciones que soñamos en aquella inolvidable madrugada de hace 40 años, pero que lo actuado por Pérez Jiménez haya sido mejor es una afirmación que no resiste el menor análisis. Vamos a reducirnos a dos ejemplos sencillos, uno por cada una de aquellas cualidades atribuidas.

Las obras públicas del gobierno de Pérez Jiménez (como las carreteras de Gómez, las autopistas de Hitler y el secado de los pantanos por Mussolini) son su orgullo, el sonsonete de sus partidarios confesos o encubiertos. Sería tonto negarlas, porque están a la vista (justamente, que «estén a la vista» es una de las cualidades buscadas en el momento de construirlas). Eso es, pues, muy cierto; pero lo que es falso es que después «no se haya hecho nada» o casi. No vamos a intentar un paralelo con todos los gobiernos que le han sucedido hasta hoy, porque eso sería tomar una indebida ventaja. Nos limitaremos a comparar los diez años del régimen militar (1948-1958) y los diez años de Betancourt y Leoni. Comparación fácilmente verificable, hecha en un seminario de la UCAB por el ingeniero Gustavo de la Rosa.

Para buscar un parangón inobjetable en materia de obras públicas (y siendo como es en ambos casos el Estado venezolano el primer constructor), el citado investigador hurgó en las estadísticas venezolanas del consumo de cemento gris en ambos períodos. El segundo (gobiernos civiles) superó sin dificultad al primero (gobiernos militares): en toneladas por año casi lo dobló; en toneladas *per cápita* también aquellos superaron ampliamente a éstos. En total, el consumo de cemento en la década 59-67 superó en un 19,4 por ciento y por cabeza a la década 47-57 (Fuente: Asociación Venezolana de Productores de Cemento).

No le faltaba razón entonces a Leopoldo Sucre Figarella cuando se jactaba de haber dirigido, él, la construcción de más obras públicas que en toda una década de gobiernos militares.

El otro punto de comparación es el de la política petrolera, que suele graduar o aplazar según el caso a todos los gobernantes venezolanos. Hoy se suele, y con sobrada razón, condenar la chambonería de los gobiernos posteriores al 23 de enero que han recibido ingresos fabulosos gracias al *boom* petrolero y a vuelta de pocos meses andaban con una mano atrás y otra adelante.

Pero no se crea que Pérez Jiménez procedió mejor, ni con mayor prudencia. Como lo ha recordado muy pertinentemente Maxim Ross en *El Universal*, en los finales de los cincuenta el tremendo déficit fiscal de la dictadura fue producto de una reducción de precios e ingresos que puso a temblar al «nuevo ideal nacional». No hay sino que recordar los cortísimos meses que separan la guerra del Sinaí del derrocamiento de Pérez Jiménez. La situación en el Medio Oriente puso a valer el petróleo venezolano acaso como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial; y las arcas nacionales parecían llenarse cuando la dictadura decidió abrir sus pulidos e iluminados salones para empezar una nueva «danza de las concesiones» petroleras. Hasta la oposición, en las cárceles, los escondites o el exilio lanzó un suspiro de desesperanza: con todos esos reales, habría Pérez Jiménez para rato.

Pero como lo hicieran luego los tan criticados presidentes civiles Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, el muy eficiente, muy gerencial general Marcos Pérez Jiménez olvidó sus latines, aquellas lecciones de historia sagrada aprendidas en el colegio de los hermanos cristianos.

Olvidó, como el mismo Ross lo dice, que la nuestra es una economía de vacas gordas y vacas flacas que depende de las fluctuaciones del petróleo en los mercados internacionales. El resultado fue que en diciembre de 1956 el jefe de la policía, Pedro Estrada, se jactaba ante la prensa extranjera de que los venezolanos se habían olvidado de la política porque todo el mundo estaba preocupado sólo por hacer dinero, y en enero de 1958 ya andaba de carreritas, dejando, al huir para nunca volver, un país arruinado que maldecía la imprevisión y la irresponsabilidad del «mejor gobierno»: del gobierno de la dictadura.

Pero había prometido hablarte del significado, el valor, la utilidad de la democracia. Burla burlando, ya lo he hecho, porque la primera característica de la democracia se revela precisamente en cualquier comparación con la dictadura. El filósofo Fernando Savater lo ha dicho en pocas palabras: «la democracia es más relevante por lo que evita que por lo que proporciona»; y la primera cosa que ella evita es la dictadura.

Pero no pienso quedarme allí, y lo primero que quiero decirte es que si todavía te empeñas en considerar el de la dictadura como «el mejor gobierno», no pienso contrariarte ni desmentirlo. No para evitar tu disgusto, sino porque es verdad.

Porque la democracia conoce de gobiernos buenos (los menos) y de gobiernos malos (los más). Más aún, hay quienes salen del poder arrasando en las encuestas, por lo que se supone que han presidido un gobierno excelente, pero la experiencia inmediata y un análisis más serio lo revelan como uno de los peores: casi no necesito poner un nombre a este retrato de Jaime Lusinchi.

En cambio, la dictadura no conoce de gobiernos malos: todos son no solamente buenos, sino siempre e indiscutidamente «el mejor». Porque el único gobierno perfecto es aquel que no merece crítica; y no hay gobierno, desde que el mundo es mundo y los gobiernos existen, que no las merezca: hasta los imaginarios, como tú tal vez hayas conocido con los viajes de Gulliver, cometían tan gobierneras trapisondas que hacían inevitable la existencia de partidos de oposición.

Pero una cosa es merecer críticas y otra permitirlas: la dictadura confunde ambas cosas y, como prohíbe la crítica, al no escucharla cree no merecerla. Así sí es posible tener gobiernos inobjetables: este siglo ha conocido algunos, cuya perfección ha sido tan

completa que ha costado millones de muertos regresar sus países a la imperfección.

Yo comprendo que esto no te guste: quisieras tener un gobierno y una sociedad perfectos. Esa búsqueda de la perfección es una de las mejores cualidades de tu juventud, de toda juventud, y ojalá nunca la pierdas. Pero una cosa es que esa perfección la busques tú, y otra que te sea impuesta: hasta la perfección es insoportable si es obligatoria.

Con esto entramos en lo que tal vez sea el asunto más importante de todo cuanto hemos tratado en estas líneas: lo que hace la diferencia entre un gobierno perfecto y uno imperfecto, entre la democracia y la dictadura, es la crítica. Dicho en otros términos, que el ejercicio de la democracia es menos un asunto del gobierno que de la sociedad, es decir, que de ti mismo. La democracia existe desde el momento en que desarrollas y conservas la capacidad y sobre todo la voluntad de cuestionarla.

Esto también merece ser ilustrado con algún ejemplo. Seguramente has escuchado mucho que «la democracia» ha encarcelado más gente, ha golpeado más gente, ha matado más gente, que la dictadura. Pasemos por encima del hecho de que se están comparando dos dimensiones absolutamente desproporcionadas: los cinco años de la dictadura unipersonal de Pérez Jiménez (o incluso los diez de gobierno militar) con casi cuatro décadas particularmente convulsas (guerrillas, «caracazos», pronunciamientos militares), las que van de 1958 al día de hoy. Pero aún si se aceptase la comparación, la desproporción entre una situación y otra continuaría.

Como mucha gente de mi generación (y sin pretender un particular mérito por eso) yo no solamente he vivido, sino que he combatido en las dos situaciones, me he opuesto, en ocasiones violentamente, a sus regímenes, el de la dictadura y los de la democracia. Pero hay una diferencia sustancial: los gobiernos democráticos pueden haber sido muy malos, pésimos; pero si puedo decirlo es porque he tenido la oportunidad de hacerlo.

No me comprendas mal: por mucho que yo pueda apreciar, como en efecto es el caso, la libertad de expresión, no me estoy refiriendo a ella como un derecho constitucional respetado o irrespetado según el caso por el gobierno, sino a mi propia voluntad de expresar la crítica. Ningún gobierno la recibe con agrado; todos intentan no sólo combatirla argumentalmente, sino cercenarla, coartarla por todos los medios posibles, algunos abiertos, otros más sutiles.

Es por eso que se puede decir que todo gobierno es autoritario. Por eso también, la diferencia entre ambas situaciones no está en ellos, en su intrínseca realidad autoritaria, sino en la percepción de mi propio combate por mí mismo. Una vez más, puedo parecerte abstracto, si no abstruso.

Voy a decírtelo en una palabra: la diferencia es el miedo. O mejor dicho, su frecuencia e intensidad. Si me pongo a echar cuentas, en estos casi cuarenta últimos años he pasado más sustos y he echado más carreras, he absorbido más gases lacrimógenos y llevado más coscorrones, he huido de más plomazones, tanto absoluta como relativamente, que en los diez años de gobiernos militares. Pero una vez pasado el apuro, me he echado a dormir tranquilamente. No porque el o los gobiernos no quisieran ponerme mano o algo peor, sino porque eso no me asustaba sino en su momento; pero no era ese terror difuso, impalpable, cotidiano que se siente bajo una tiranía.

Acabo de escribir la palabra clave: *terror*. No es infrecuente que, puestos a echar números y, como se dice, pelo a pelo, un gobierno democrático llegue a exhibir como triste condecoración más presos, más apaleados o más muertos que una dictadura. Eso es porque llegado un momento, la tiranía no necesita ejercer la coerción física para ser obedecida: con la sola amenaza de emplearla, logra parali-

zar la sociedad. No se trata entonces de que te amordace para impedir tu palabra, sino que te castra para doblegar tu voluntad.

Es por eso que el derrocamiento de una dictadura es menos la caída de un gobierno que la liberación de ese terror difuso e impalpable. Es por eso que luego de abierta, sea tan difícil regresar el genio popular a la botella que lo encerraba. Es por eso, también, que la democracia es menos un conjunto de instituciones gubernativas, elecciones, partidos políticos, prensa libre que esa liberación del miedo.

Decir esto puede hacerte comprender con más facilidad lo que te decía al comienzo de esta carta sobre el 23 de enero como la fecha auroral de nuestra democracia. Si no lo creo así, no es por negar su importancia en el desarrollo de nuestra historia contemporánea, sino porque pienso que la democracia no comienza cuando debuta la serie de gobiernos democráticos (ni mucho menos que gobierno democrático signifique buen gobierno), sino desde el momento en que se pierde el miedo a expresar la voluntad popular.

En tales condiciones, si hay que señalar un momento preciso para el inicio de nuestra democracia, yo prefiero el 14 de febrero de 1936. Cierto, aquello ya se había producido antes, en el carnaval de 1928; pero eso se quedó reducido en buena parte a una *élite* intelectual y sobre todo, porque veinte años de tiranía habían creado y lograron mantener reflejos de obediencia y terror todavía demasiado grandes, demasiado paralizantes.

Es así como después de 1928 regresó el terror (no la simple represión, aunque también, sino el terror) a depositarse como una pesada lápida sobre el coraje de los venezolanos. En cambio, en 1936, la marejada popular le dio su sanción definitiva a esa actitud, a esa pérdida del miedo.

Y en tal forma, que el retroceso que significó la dictadura de Pérez Jiménez no pasó de cinco años en su fase más brutal: del

golpe de estado de diciembre de 1952 para desconocer justamente esa voluntad popular, al 23 de enero de 1958 en que ella se manifestó de la manera más violenta para hacerse respetar.

Debo terminar esta carta, por razones de tiempo y de espacio. Pero la consideraría inútil si no he logrado con ella dejarte claro que el significado, la validez y la utilidad de la democracia no provienen de un gobierno «bueno» sino de un pueblo, de una sociedad sin miedo. No solamente creo que tienes el derecho a considerar este o aquel gobierno como malo y muy malo, el peor que hayas podido conocer o concebir, sino que también lo considero tu deber. Porque en el momento en que se deje de escuchar tu crítica, algo anda mal: o tú mismo o el gobierno, y lo más seguramente las dos cosas. En el momento en que se deje de escuchar tu crítica y peor aún, en el momento en que pierdas la voluntad de hacerla oír, todo anda mal: habremos dejado de vivir bajo un gobierno «malo» para vivir bajo un gobierno «bueno», perfecto. Habremos abandonado la democracia para caer en la tiranía; y en el terror.

¿UN SIGLO PERDIDO, EL VEINTE?

Desde antes de terminarlo, se tenía tendencia a hacer el balance del siglo veinte venezolano y a hacerse la pregunta consiguiente, típica de todos los momentos de crisis: ¿hemos perdido estos cien años?¿Estamos entrando al tercer milenio como quien dice, con una mano atrás y otra adelante? Si leemos los titulares de la prensa diaria, si soportamos los decibeles de la radio y la televisión, si escuchamos los debates del parlamento y sobre todo, si consultamos a los líderes políticos, cualquiera que sea su tendencia, su respuesta es rotundamente afirmativa.

Esto es muy normal, y ya lo había advertido Eugen Weber en su excelente análisis del *fin de siècle* pasado en Francia: el lenguaje político (o si se prefiere, *el lenguaje de los políticos*) es siempre catastrofista, y, siguiendo sus huellas, lo es también el de los periodistas, a quienes más en la práctica que en la teoría se les enseña que sólo «es noticia» la mala noticia.

Pero si intentamos una lectura, así sea rápida y superficial de la historia venezolana en este siglo, la respuesta es negativa, aun si se acepta que éste *no* pueda ser menos rotundo que aquel primer *sí*, aun si se le matiza, se le clarea, se le disuelve con «peros» y con-

dicionales, como suelen serlo y estarlo las respuestas que da la historia, a la luz de un análisis menos instantáneo que el periodístico.

Venezuela se ha enfrentado a dos grandes retos en este siglo. Y, de buena y mala manera, a ambos ha sido capaz de superarlos, en la medida en que este último término pueda tener significado en historia, o sea, haciendo la salvedad de que nunca lo son y tal vez nunca podrán serlo definitivamente, de que siempre habrá el peligro de un retroceso, y de que tampoco el resultado es completo ni perfecto, de que permanecen islas de derrota en el agua por nada mansa de una victoria.

Esos dos retos han sido el de la guerra y el de la tiranía, o sea, el de imponer su contrario, la paz y la democracia. Al primero lo encaró de manera instintiva, como correspondía a la ciega negatividad del problema planteado, la guerra. Al segundo, con inteligencia y una larga paciencia; y con la conciencia siempre presente de la fragilidad de los resultados, con el espectro siempre aparecido de la dictadura.

Cuando en 1903, la batalla de Ciudad Bolívar señale el fin de las guerras civiles, Venezuela había tenido la experiencia de la inutilidad de una larga matanza. Pero además, con el bloqueo de nuestras costas por las potencias europeas en 1902, también la posibilidad de nuestra desaparición como país independiente. De modo que la paz surgía como una necesidad ciega, proveniente del viejo instinto de conservación individual, pero también y sobre todo del terror social de la disolución, de su desaparición como pueblo y como nación.

La solución que encontró fue, en lo inmediato, la dictadura, la cual, sobre todo a partir de 1918, derivó en tiranía sin freno ni limitación. Se puede decir que a un problema verdadero se le encontró una falsa solución, y que el remedio fue peor que la enfermedad. Pero eso es ver las cosas desde la comodidad de quien lleva viviendo un siglo de paz.

Cambiar la guerra por la dictadura era una pésima escogencia: de acuerdo, pero no había otra en su momento. Y el país no sólo escogió instintivamente, sino que escogió a un instintivo, el general Juan Vicente Gómez, para enfrentar el problema de la guerra.

No se crea, sin embargo, que la solución a ese problema fue solamente cosa del Benemérito y de los 27 años de su tiranía. El resultado no se le puede atribuir sólo a él, pues hace sesenta años que el Todopoderoso lo llamó a su lado, sintiendo acaso necesidad de su buen consejo ante la posibilidad de una nueva invasión de Luzbel. Y durante esos sesenta años, por mucho que a veces nos tiente abrir la tripa sanguinaria, hemos permanecido en paz: uno de los pocos países del mundo que lleva casi un siglo sin guerras civiles.

Así como la guerra tenía una sola solución, la paz, una vez que ésta se volvió sinónimo de tiranía, se hizo evidente la nueva solución: la democratización del país y del poder. A eso no se le podía dar una solución instintiva, porque tampoco fue instintivo el planteamiento del problema. Porque mientras el rechazo de la guerra no necesita hacer trabajar demasiado las células grises, en cambio sí lo impone acoger una abstracción como la democracia.

En 1903 no había prácticamente un solo venezolano que no deseara la paz. Pero en 1936, sólo la mayoría (no la unanimidad) de los venezolanos deseaba la democracia. Y esto por tres razones muy importantes, descartando el muy comprensible interés de los gomecistas de «uña en el rabo».

La primera es el viejo poso autoritario que yace en el fondo de cada ser humano como resultado de miles de años de una historia de gobiernos tales. En segundo lugar, porque buena parte de los venezolanos seguía estableciendo la sinonimia «paz igual dictadura». Y, *last but not least*, la democracia como ideología, su aceptación por la unanimidad como el mejor de los gobiernos posibles, no era todavía una realidad.

No se olvide que se vivía el auge de los regímenes autoritarios (Hitler, Mussolini, Franco, Stalin) y que no faltaban quienes al defender la democracia, lo hacían casi excusándose de la fastidiosa tarea, como un Churchill lanzando la paradoja según la cual la democracia era el peor de los sistemas posibles, «a excepción de todos los demás».

¿Ha sido la democracia la solución al problema de la tiranía, como ésta fue la solución al de la guerra? Ninguna de las dos cosas es cierta: ninguna solución lo es, si se plantea en términos absolutos y tajantes. Lo que conviene destacar aquí es la focalización del problema y la solución encontrada. En cuanto a lo primero, era importante saber cuál era el problema central de la sociedad (no acaso el más importante, sino el más urgente).

En cuanto a lo segundo, hay un resultado positivo que se extiende hasta hoy: así como nadie quiere volver al viejo país de las guerras civiles, todo el mundo quiere vivir en democracia.

No se ha perdido, pues, el siglo veinte: vivimos, mal que nos pese y aun cuando lo neguemos del alba al cielo estrellado, en una sociedad de ideología pacífica y democrática. Pero acaso para nuestros abuelos de 1903 y nuestros padres de 1936 las cosas eran más sencillas: ¿cuál es, en cambio, nuestro problema presente? ¿Y cuál es, por lo tanto, el camino a seguir?

No se crea que esté tan oculto, porque desde hace un buen medio siglo estamos hablando de lo mismo: nuestro problema central es el subdesarrollo, para emplear esa palabreja que ya ha comenzado a entrar en desuso. Lo que no hemos logrado encontrar hasta ahora es la manera de ingresar en el campo opuesto, como sí encontramos una manera en 1903 y en 1936.

Tampoco está tan oscuro el camino a seguir: ya comienza a sentirse, todavía confusamente, que el error ha estado en plantear el problema en términos de desarrollo económico (sustitución de importaciones, «Gran Venezuela») y no, como lo han hecho quienes se nos han adelantado tanto, en términos de desarrollo social. Desarrollo social que no significa, por el amor de Dios, limosnerismo asistencialista, sino inversión de todas las energías en los recursos humanos; significa la necesaria eclosión de una conciencia *nacional* (y no sólo gubernativa) de que lo prioritario es el desarrollo de las capacidades intelectuales del venezolano, a través de una verdadera revolución cultural (nada que ver con la China de los años sesenta). Ése es el centro del problema, ése el centro de la solución: la revolución de los cerebros. Ése es el verdadero reto del siglo XXI.

DOS NO CELEBRADAS FIESTAS NACIONALES

Somos enemigos jurados de la proliferación de fiestas nacionales, y sin embargo queremos proponer dos más: la del 21 de julio y la del 14 de febrero. No, por supuesto, que sean días no-laborables, pero sí que se les dé igual jerarquía que al 12 de octubre, día del Descubrimiento o al 24 de junio, día del Ejército. Porque no creemos que nuestra historia termine en el siglo XIX y mucho menos que se reduzca a los años transcurridos entre el 19 de abril de 1810 y la batalla de Carabobo.

Los venezolanos hemos hecho historia también en el siglo XX, y hemos tenido en él jornadas tan gloriosas, tan proceras como aquellas. Algunos de nuestros colegas historiadores se asombrarán muy justamente de que quien tan poco aprecio tiene por la historia procera, ahora se empeñe en ampliar la constelación de nuestras efemérides, con fanfarria, corona de flores naturales, inauguraciones, corte de cintas, cohetes, paseo cívico, etc.

En este caso, sabiendo como se sabe que la historia es la cenicienta de nuestros *currícula* escolares, ésta sería una forma simple de ejercer una pedagogía de masas. Es una forma simple de reconciliar a los venezolanos con su siglo veinte, y de acostumbrarlos a

exaltar y también a celebrar (con música y uno que otro trago, que también vale en el caso) nuestras dos mayores conquistas de estos últimos cien años, lo que podría llamarse nuestras glorias siglo-veinteras: la paz y la democracia.

Dos conquistas que hoy se tienden con demasiada frecuencia a despreciar, o cuando menos a ignorar; porque eso «no es noticia» y mucho menos historia.

¿Qué sucedió en esas fechas? Y si son tan importantes, ¿por qué no se las celebra entonces? El 21 de julio de 1903 tuvo lugar la batalla de Ciudad Bolívar, que puso fin a la Revolución Libertadora. Eso parecería responder a la primera pregunta, pero no es así. Porque lo importante no es esa fecha como culminación de un proceso, sino como comienzo de otro.

A partir de ese momento se da inicio a uno que nos ha transformado en lo que sería nuestro mayor orgullo, si fuésemos menos inconscientes: un país excepcional no sólo en América Latina, sino en el mundo. Un país que lleva casi un siglo sin guerra.

Responder a la primera pregunta tal como lo hicimos inicialmente explica por qué no se celebra como se debe esa fecha. Porque verla como una culminación es reducir su significado, y sobre todo, atribuir la gloria al vencedor de la batalla, general Juan Vicente Gómez, que durante tres décadas nos hizo morir de miedo. Ésta es la razón por la cual, a partir de 1936, se dejó de celebrar esa fecha en nuestro país. Pero es un craso error, y ello por dos razones. La primera es que si no se puede (o no se quiere) evitar la personalización de una gloria guerrera, por lo menos habría que saber ubicarla en su tiempo.

Un ejemplo podría servir para dejar claro qué se quiere decir con esto. En un viaje a México me hospedé en un hotelito de Insurgentes Sur, en la calle «Coronel Porfirio Díaz»: después de setenta años de una revolución que lo echó y enseñó a los mexicanos a aborrecerlo, no se le borró por eso de la historia; se recordaba que, cuando todavía no era general, fue el héroe de la batalla de Puebla.

Pero no hay que buscar ejemplos tan lejos: ¿acaso en Venezuela no se le ha perdonado a Páez haber desmembrado a Colombia en 1830 y la dictadura del 61? ¿Y no existe un estado Monagas, olvidando que a José Tadeo se le echó de Palacio en 1858 al grito de «¡Mueran los ladrones!»?

De todas formas, no hay que encerrarse en el callejón sin salida que sería homenajear a Gómez o denostarlo a propósito de esa fecha. Porque Gómez venció la Revolución Libertadora, pero los noventa años de paz que siguen a esa victoria, no pueden colocarse a su activo, sino al de un pueblo que se negó (y en eso lleva casi un siglo) a servir de carne de cañón en nuestras matazones republicanas. Celebrar entonces el 21 de julio como Día Nacional de la Paz no es glorificar a Gómez, sino a los verdaderos padres de esa paz: los venezolanos del siglo veinte.

Lo mismo puede decirse del 14 de febrero de 1936. ¿Qué sucedió ese día? Se produjo en Caracas una nutrida manifestación popular en contra de la censura y los desmanes de la policía heredada del gomecismo. Esta respuesta, como la que inicialmente se dio a la pregunta anterior, es también puramente descriptiva y, como ella, se queda a medio camino de la verdad.

La razón por la cual hoy se tiene cierta reticencia a conmemorar esa fecha, es que sus líderes fueron los fundadores de la democracia contemporánea, caracterizada por la existencia y, durante largo tiempo, la hegemonía de esos partidos políticos hoy tan aborrecidos con razón y sin ella. Ese aborrecimiento nos parece menos injusto que profundamente peligroso; pero aceptémoslo. Una vez más, al personalizar una victoria, se incurre en un error y nuevamente se cae en un callejón sin salida, como siempre que en historia se pretende analizar a los hombres del pasado pretendiendo que piensen y actúen como si vivieran en el presente.

El problema es que se tiene también demasiada tendencia a confundir la democracia con sus instituciones o con algunas de ellas; y a ver el desarrollo de los procesos políticos e históricos como si fuesen exclusivamente cosa de Palacio. Lo que nació el 14 de febrero no fueron los partidos políticos, ni la libertad de prensa, ni la libertad de asociación y manifestación. Todo eso puede morir, ser suprimido y aborrecido y sin embargo la democracia continuará viva; y hará restaurar o renacer todo aquello. Lo que afloró ese día fue la mentalidad democrática de la población. Y eso no ha muerto desde hace sesenta años, pese a los cinco (1952-1958) de la dictadura de Pérez Jiménez. Hoy, cuando en la calle se oye, sobre todo a los jóvenes, decir que esto que vivimos no es una democracia; o peor aún, que no creen en la democracia, lo hacen sin darse cuenta de que la están poniendo por acto, de que la están ejerciendo.

Porque lo peor no es sufrir una dictadura, sino soportarla: es no tener la voluntad de cuestionar. En cambio, al denostar de la democracia, somos profundamente democráticos.

Debe celebrarse entonces el 14 de febrero como el Día Nacional de la Democracia. Porque en 1936 no salió el pueblo a la calle para defender a éste o aquel dirigente, éste o aquel partido, éste o aquel diario; ni para apoyar ni combatir el gobierno. Ni siquiera para defender la democracia, sino *para imponerla.*

SUCESO Y PROCESO

No esperaba unanimidad en relación con mi propuesta de celebrar el 21 de julio como Día Nacional de la Paz y el 14 de febrero como Día Nacional de la Democracia; pero había creído que la mayor polémica se suscitaría alrededor de esto último, no sólo por estar más cerca de nosotros, sino porque puede oponérsele el 23 de enero de 1958, una jornada de características similares a aquella de 1936. Y sin embargo, es la primera la que ha suscitado al menos una reacción en contra, la de Pedro Elías Aristeguieta Guerra, autor de una semblanza biográfica de aquel corajudo Pedro Elías Aristeguieta muerto en la aventura del *Falke* en 1929.

Es más que normal que el descendiente de uno de los enemigos «de a caballo» más señalados de Juan Vicente Gómez, que como un Amadís o un Tirant Lo Blanc, cumplió con su palabra de destronarlo o morir en la empresa, se oponga a celebrar una fecha que, de una forma u otra, se pueda ligar al Benemérito, o a una posible exaltación o reivindicación suya. Pero no creo que sea eso lo que mueve a mi cordial comentarista, sino más bien una muy corriente concepción de la historia.

Oponerse a la celebración del 21 de julio y proponer en cambio hacerlo con el 9 de diciembre (día también de Ayacucho), cuando las potencias europeas hicieron pasar tremendo susto a los venezolanos de la época, es poner el acento más en el suceso que en el proceso. Porque en el bloqueo de nuestras costas no jugó ningún papel la voluntad de los venezolanos: si acaso su falta de voluntad para acabar con las ruinosas guerras y el endeudamiento perpetuo; si acaso un suspiro de alivio cuando los EE.UU. intervinieron para salvarnos del desastre. En cambio, al conmemorar el 21 de julio de 1903, no se está en manera alguna haciéndolo con una victoria de Gómez. Por lo demás, la de Ciudad Bolívar no fue ni siquiera una gran batalla: no fue Carabobo, ni Santa Inés, ni Coplé, ni siquiera Tocuyito o La Victoria. ¿Tiene algún sentido entonces festejar una escaramuza menor cuando hay hechos de guerra muchísimo más importantes? Desde luego que no; pero es que no estamos proponiendo que se celebre guerra alguna, sino todo lo contrario: que se celebre la paz. Es decir, no el hecho pequeño y lejano de una batalla, sino un proceso que nos concierne aquí y ahora, que hemos ganado y podemos continuar ganando: el de seguir siendo un país que no logró vencer *una* guerra, sino que venció *la* guerra, y que *todavía sigue haciéndolo*. Y sin cascos azules.

Por otra parte, comparar el 14 de febrero y el 23 de enero es como hacer lo mismo (sin guardar las distancias, porque son fechas de pareja importancia) con el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. ¿Cuál es más significativo? No nos gusta emplear el argumento de autoridad, pero quien mejor lo expresó, porque conocía bien un proceso (no el suceso) en el cual era actor principalísimo, fue el Libertador: «El 19 de abril nació Colombia», dijo alguna vez. Resulta curioso que se haya podido decir eso de una fecha tan ambigua, que Arístides Rojas consideraba una jornada «española». Y no sin razón: si las cosas no hubiesen seguido el rumbo que siguieron, con la proclamación de la independencia (y la república), el

19 de abril podría muy bien ser celebrado hoy como el día de la monarquía (de «la conservación de los derechos de SM Fernando VII») y no, como lo hizo Bolívar y nosotros hoy, como el día de la república.

Para resumir, digamos que así como el 5 de julio es hijo del 19 de abril; de igual manera el 23 de enero es hijo del 14 de febrero. Todo lo anterior podría ser considerado simple querella de especialistas, polvorienta disquisición académica. ¿Qué más da, en efecto, una fecha que la otra? Nada más lejos de nuestras intenciones, y de nuestras inclinaciones. Lo que proponemos celebrar como Día Nacional de la Democracia no es un día ni un suceso, por ejemplar que haya podido ser. Porque hemos repetido mil veces que no creemos en eso de que la historia sea la maestra de la vida, sino en todo caso lo contrario. Lo que proponemos celebrar es un proceso que tiene por lo menos sesenta años y arranca el 14 de febrero de 1936. Lo cual podríamos definir de esta manera: son sesenta años de lucha entre la sociedad y el Estado, o sea, entre la democracia y la autoridad; la primera por implantar la democracia, el último por no dejar reducir el ámbito de su poder.

Lo primero se ha manifestado de diversas maneras: desde la manifestación de calle casi espontánea (pacífica, ordenada y democrática el 14 de febrero de 1936; anárquica y sangrienta el 27 de febrero de 1989); con el boletín de voto en 1946, en 1952; y desde 1958 sucesivamente con el bipartidismo y la reacción contra los partidos; en la insurrección militar con cierto apoyo civil el 18 de octubre de 1945 y la insurrección civil con cierto apoyo militar el 23 de enero de 1958.

Lo segundo tiene mil manifestaciones, diarias, horarias, minutarias. Hablaremos tan sólo de una, en apariencia inocua y donde no es fácil descubrir premeditación.

Se trata del progresivo abandono de la enseñanza de la historia en las escuelas y liceos, y del hartazgo de fechas nacionales guerre-

ras, que tienen por sutil objeto inscribir en la conciencia popular la idea de que la historia venezolana termina en Carabobo. Y que a partir de allí (a partir del momento en que dejan de brillar con luz procera las armas) este país no ha dejado de caer en la decadencia; este país no tiene remedio. Que la única salvación posible es «volver a Carabobo», o sea al dominio de los hombres de armas.

Esa reducción del estudio de la historia en la educación primaria y secundaria fue obra de Pérez Jiménez (¿les parece casual?), pero ha sido seguida con obtusa irresponsabilidad por los gobiernos posteriores. ¿Qué de extraño tiene que hoy se hagan unas encuestas sospechosamente «imparciales» y la mayoría responda lo que la pregunta sugería, o sea que el mejor gobierno que haya tenido Venezuela sea el de Pérez Jiménez? ¿No es acaso producto en gran parte del desconocimiento de la historia contemporánea por los encuestados; porque quienes elaboran los programas (y quienes los aceptan) tienen como artículo de fe que la historia de Venezuela terminó el 24 de junio de 1821?

Cuando comencemos a estudiar la historia de nuestro siglo en escuelas y en liceos; y como acto de pedagogía popular a celebrar las fechas proceras del siglo veinte; cuando entendamos así que el 14 de febrero es tan importante como el 24 de junio, que la historia la hacemos nosotros y no algunos bronces altivos; la democracia, la verdadera, la de abajo, la de la conciencia popular y no la de algunos actos gubernativos, se hará inexpugnable.

LA FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA, ARMA TOTALITARIA

En una de las críticas más despiadadas que se haya hecho al totalitarismo, George Orwell pone a los hombres de la sociedad totalitaria a torturar el pasado, no para que la historia le haga decir su verdad, sino para que ese pasado diga lo que el dominador presente quiere que diga. El principio en el cual basa su actuación reza que «Quien controla el presente controla el pasado».

Por fortuna, la pavorosa anticipación de Orwell no se cumplió en el año, 1984, en que él la daba por definitivamente establecida. Pero no se crea que todo eso no pasaba de ser fruto de la empavorecida imaginación del escritor. En el siglo XX, los regímenes totalitarios de cualquier signo han tenido como característica común ese intento de falsificar la historia.

Cierto, la falsificación no es nueva sino más bien tradicional y no se puede decir que la hayan inventado estos totalitarismos del siglo veinte. Por lo cual quizás haya que precisar que, en este caso, se trata de una acción deliberada y en muchos casos, planeada con anticipación, cuidadosamente.

Y que ella no se ciñe al pasado inmediato, sino que trata de abarcar todo el proceso de la formación, el desarrollo de una so-

ciedad desde sus orígenes. Porque es normal, y en todo caso habitual, que todo nuevo gobierno eche las culpas del desastre inventado o real que encuentra al «gobierno anterior»; y sus exageraciones comportan muchas veces una cierta falsificación de la historia. Pero ella es relativamente fácil desvelarla, y muchas veces, ni siquiera es necesaria la labor de los historiadores profesionales: el tiempo se encarga de aclarar las cosas, y no es demasiado extraño que eso se dé espontáneamente. Pero otra cosa es darle a esa historia, en su conjunto, una forma muy precisa que le permita coincidir con los intereses políticos presentes y su ideología. Y que haya intelectuales, filósofos, historiadores o pretendidos tales, que se hagan cómplices de la estafa.

Aunque la de Orwell sea una sátira cuya punta estaba destinada a clavarse en el corazón del estalinismo, no fue el hegemón georgiano el único en hacerlo: también lo hizo Hitler. Hay sin embargo un matiz en la manera como ambos tiranos se aproximaron al asunto. La ideología nazi se basaba en la pura y simple negación de la historia; pero el estalinismo, que pretendía basarse en el «materialismo histórico», no podía hacer otro tanto. En este último caso se falsificaba la historia reciente, en particular la historia de la Revolución, y luego se proyectaba esa imagen hacia atrás para hacer que de hechos del pasado lejano que pudiesen tener puntos de coincidencia con sucesos presentes, pudiese darse una versión que la hiciese calzar exactamente con la situación actual.

Veamos primero el caso del nazismo, porque aparentemente sea hoy una reliquia histórica enterrada en el *búnker* berlinés junto con los despojos del tirano suicida. Lo veremos en sus dos vertientes: cuando se comporta como un régimen «normal» si bien autoritario; y cuando su intención al falsificar la historia es ya totalitaria.

Lo primero necesitaba la adulteración de la historia reciente, para transformar también sus propias derrotas en victorias y ponerse en el centro de acontecimientos donde, de otra manera, apenas hubiese aparecido como una figura secundaria, borrosa y sobre todo medrosa. Es así como el fracaso del *putsch* de la cervecería en 1923 fue transformado en el inicio de una nueva era en la historia de Alemania. Todos los años se celebraba fastuosamente esa fecha, destacando allí la jefatura suprema de Hitler, y su valerosa intervención.

La realidad fue otra muy diferente. Ni Hitler era el más importante de los conjurados, ni demostró especial coraje en el momento: en un desfile que formaba parte del *putsch*, fue el primero en salir corriendo a buscar refugio apenas comenzaron a escucharse disparos. Pero no sólo fue eso: su posterior estancia en una prisión bastante cómoda, tratado con una especial consideración, la transformó también en mito; se volvió un episodio particularmente doloroso en la Historia Sagrada del nazismo.

La otra vertiente, ya propiamente totalitaria, parte de que la historia puede ser falsificada porque ella misma no es real, nunca lo ha sido. Para Alfred Rosenberg, el teórico oficial del hitlerismo, la historia no era más que un monstruoso accidente, algo que no debía haber sucedido nunca, y que en realidad no ha existido, porque «toda la historia de un pueblo se resuelve en su primer mito». Lo que eso quería decir, lo expresaba más brutalmente Heinrich Himmler, con la inmensa autoridad que le daba su jefatura de la Gestapo: poco le importaba, decía poco más o menos, que los científicos tuviesen ésta o aquella idea, planteasen ésta o aquella hipótesis, pues a cada rato las estaban cambiando. Para lo que el Estado les pagaba era para que elaborasen teorías que coincidiesen con la doctrina oficial.

Las ideas que los científicos –y por supuesto los historiadores– debían vestir con ropaje de gala eran muy simples: la superioridad del *Volk* germánico, la gran conspiración universal del judaísmo contra la pureza racial y espiritual alemana y, por supuesto, el *Führerprinzip*, la legitimidad de la dominación del caudillo único.

En tales condiciones, se debía trabajar el pasado con el mismo espíritu con que se trabajaba el presente, lo que en su caso quería decir negar la realidad para sustituirla por una construida a la fuerza, fruto más de un delirio paranoico que de la verdad de sucesos y procesos.

Como tal vez el párrafo anterior pueda sonar demasiado abstracto, conviene ilustrarlo con algún ejemplo. Hitler se negó con empecinamiento de enajenado mental a aceptar la derrota de Alemania en la Gran Guerra. Aceptó a pie juntillas la versión del incapaz Estado Mayor alemán, que hasta el último momento estuvo ocultando a su pueblo la realidad de su vergonzosa derrota; lo cual, al producirse el súbito derrumbe del ejército, la capitulación y el derrocamiento de la monarquía, dio pábulo a la leyenda de la «puñalada por la espalda» que habría permitido el triunfo de las tropas enemigas.

De tanto repetir esa mentira, como lo quería Goebbels, Hitler la transformó en la verdad oficial. A tal punto llegó su paranoia, que entre sus más acariciados proyectos de reconstrucción de Berlín encargados a su arquitecto preferido, Albert Speer, estaba el de levantar un Arco de Triunfo. El cual, con su obsesión infantil del *récord*, debía ser mayor que el de París. Allí debían estar inscritos millón y medio de nombres: los muertos en la Gran Guerra. De esa manera, Hitler transformaba una derrota en victoria. Si se levantaba un Arco de Triunfo para conmemorar una derrota, eso podía lucir como el disparate de una mente trastocada.

Pero eso se podía arreglar de la manera más simple: trastocando los hechos históricos, transformado el resultado de la Gran Guerra no en una derrota, sino en una victoria de Alemania, triunfo robado por los «traidores de noviembre» (los republicanos, entre ellos los socialdemócratas que habían sustituido la monarquía) y, por supuesto, la conspiración judía internacional.

En el caso de Stalin, la falsificación de la historia solía desplegarse en dos ámbitos o si se prefiere, dos niveles. Se comenzó por falsificar la historia reciente, y luego, para facilitar comparaciones y sobre todo, para que ellas encajasen dentro de los dogmas del materialismo histórico, se pasó a falsificar el conjunto de la historia universal. En lo primero, no se diferenciaba mucho el tratamiento que Stalin le daba a la historia de la de un autoritarismo clásico.

El estalinismo tenía detrás suyo su propia epopeya, la Revolución bolchevique de 1917. En ella, no era necesario falsificar la historia para que en ella apareciese en un lugar importante el propio camarada Stalin.

Pero eso no bastaba para asentar un culto personalista como éste buscaba. Se trataba sobre todo de echar las bases de su dominio, y para ello, era necesario no solamente elevar el papel de Stalin en el proceso que había llevado al poder al partido bolchevique, sino borrar de las páginas de la historia a cualquier otra personalidad que pudiese hacerle sombra.

Es bien conocido el proceso que llevó a eso. En primer lugar, se trataba de sacralizar a Lenin, que en vida había sido remiso no solamente a la adulación, sino a pretender colocar a cualquier personalidad, incluyendo la suya, por encima de esa inteligencia colectiva que era el partido, que encarnaba y sobre todo lideraba la clase obrera.

En la *Pravda* de la etapa leninista de gobierno, se tenía especial cuidado en no colocar las fotos de los dirigentes de modo que uno destacase sobre los otros. Pero apenas muerto Lenin, arrancó su culto: se hizo momificar su cadáver, desoyendo las protestas de su viuda, Nadejda Krupskaïa.

Luego comenzó la eponimia de Lenin. La antigua San Petersburgo, cuyo nombre había rusificado la revolución llamándola Petrogrado, fue rebautizada Leningrado. Y a partir de 1929, cuando con motivo de su quincuagésimo aniversario, arrancó el culto de Stalin, el bolchevique dejó de ser «el partido de Lenin» para volver-

se «de Lenin-Stalin»; a la antigua Tsaritsin se la llamó Stalingrado, y así por el estilo.

Pero no se quedó allí la glorificación de Stalin. Era necesario, y de eso se ocupó el partido y sus historiadores, reescribir la historia de la Revolución para expurgar de allí los nombres aborrecidos. En primer lugar, León Trotsky, que además tomaría desde entonces la forma de un demonio, el «judas Trotsky». Como es bien sabido, a él se debió la organización militar de la insurrección de octubre. Eso debía desaparecer de los textos de historia. Y de igual manera irían desapareciendo de ella todos los rivales reales o supuestos de Stalin, a medida que iban desapareciendo físicamente en las infames «purgas» de 1935 y 1938.

Esa labor de maquillaje de la historia llegó al extremo del ridículo en el caso de la fotografía. Los testimonios fotográficos de la revolución eran cuidadosamente recortados y retocados para hacer desaparecer de allí las figuras de los condenados: así, a Trotsky le siguieron Zinoviev, Kamenev y luego el «niño mimado del partido» (como lo llamó Lenin), Nicolai Bujarin. En el lugar donde una vez estuvieron en las fotografías de octubre, aparecían sospechosos e hilarantes huecos, inexplicables vacíos.

A la vez que iba adelante ese proceso, se procedía a maquillar también toda la historia de la humanidad convirtiéndola en lo que Marx había escarnecido como «lecho de Procusto»: recortar los hechos para que cupiesen en el cartabón. La primera víctima de ese maquillaje fue la historia de la Revolución Francesa, con la cual los bolcheviques comparaban, conscientemente o no, la suya propia.

Pero no se quedó allí: todo hecho histórico debía ser igualmente retocado para que pudiese encajar en los moldes del materialismo histórico, y resultase una prefiguración de la Revolución Rusa y de la dominación final del camarada Stalin. Eso llegó al paroxismo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentó

rescatar, entre otras cosas en el cine, figuras como la de Iván el Terrible. Se trataba de exaltar el nacionalismo ruso, pero además, era evidente que la reivindicación del sanguinario Zar llevaba no enteramente oculta una voluntad de comparación: a Stalin no parecía disgustarle el subliminal paralelo. No se podía hacer otro tanto, sin embargo, con el modernizador de Rusia, Pedro el Grande, porque su notorio filo-germanismo seguramente lo impedía.

De manera pues, que si bien la falsificación histórica puede ser común a cualquier régimen, incluso democrático, más aún autoritario, lo característico del totalitarismo es que esa falsificación proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial, única y obligatoria, al conjunto de la sociedad; no para explicar la historia a la luz de una concepción particular, sino para hacerla entrar a la fuerza en un esquema inamovible, dogmático.

En las páginas que siguen intentaremos demostrar, apelando al ejemplo venezolano actual, la relación que existe entre ambas formas de falsificar la historia; y cómo se puede señalar así el paso del autoritarismo al totalitarismo.

I

Nadie pretende que un gobernante deba ser necesariamente un erudito en materia histórica; pero es aconsejable que sea lo más escrupuloso posible al hacer una referencia, como por lo demás a cualquier otra disciplina, porque de sus labios está pendiente siempre el país entero.

Aún así, nadie está a cubierto de un gazapo, ni siquiera un especialista. En los años sesenta, Rómulo Betancourt, quien era uno de los gobernantes venezolanos que con más ahínco había estudiado la historia venezolana (y esto desde su más temprana juventud), atribuyó en un discurso improvisado a Cipriano Castro el fusilamiento de Matías Salazar. En verdad, el fusilado por Castro fue

Antonio Paredes, mientras que a Salazar lo había hecho ajusticiar Guzmán Blanco. Siendo ambos episodios muy similares, es comprensible el gazapo; lo cual no impidió que los humoristas de la época hicieran su agosto burlándose del presidente de la república gracias a una libertad de prensa recién reconquistada.

En el caso del actual presidente venezolano, la situación es diferente. Por una parte, todos sus discursos son improvisados, y esto no quiere decir sólo que no los escriba: poca gente puede soportar aquel batiburrillo de frases incoherentes, donde el pintoresco presidente salta de un tema a otro sin orden ni concierto, mezclando diatribas políticas con anécdotas de infancia y del béisbol sabanero; y hasta coplas cantadas con una voz que recuerda más una juerga que un conservatorio. A la vez, se empeña en estar dando todo el tiempo lecciones de historia. De una historia que las más de las veces demuestra ignorar supinamente.

En general, sus referencias provienen de la versión de la historia que los escolares aprenden en los bancos de la escuela primaria, y que no ha sido sometida a la crítica que indique un estudio más profundo, como se supone debe ser el que se imparta en las aulas de los institutos de educación superior, sean civiles o militares.

Hugo Chávez Frías egresó de uno de esos institutos, y en su escalafón llegó hasta el grado de teniente-coronel; pero si vamos a juzgar por sus conocimientos de la historia venezolana, su instrucción no da la impresión de subir más arriba de la que pudiera tener un sargento.

Que ésta no es una apreciación polémica, es algo que trataremos de ejemplificar en los párrafos siguientes. Pero tampoco esto tendría mayor sentido si no fuese por su empeño en demostrar en sus largas peroratas su conocimiento de la historia y de *tutti quanti*: quien mucho habla, mucho yerra.

Los ejemplos son muchos, pero se pueden hacer arrancar de su arenga de toma de posesión, el 2 de febrero de 1999. Allí rompió

una vieja tradición, no solamente venezolana, la del discurso escrito. Porque se supone que en éste, el nuevo presidente anuncie las grandes líneas de su gobierno, y que se trate de un documento pensado, discutido, reelaborado y reescrito con el auxilio de sus más brillantes asesores, sin que por eso deje de marcar el sello de su propia personalidad. Nada de eso se vio en esa intervención: fue un batiburrillo indigerible, donde acumuló incoherencia tras incoherencia. Ya hemos señalado que ése es el estilo de todas sus intervenciones públicas, pero hay en ésta un detalle que pasó inadvertido a sus auditores, y que sin embargo emite una luz particular en la perspectiva del tema que estamos tratando en estas páginas.

Entre sus memorias de cuartel, habló de un oficial (o tal vez un cadete) que era el encargado de leer a diario un pensamiento del Libertador pero alguna vez olvidó el libro en su habitación, y sencillamente, le inventó una frase a Simón Bolívar. Sus parciales rieron de la ocurrencia presidencial, la oposición se encogió de hombros, pero nadie le dio mayor importancia a un relato que parecía un simple truco oratorio para retener el interés de su audiencia.

En verdad, no sería disparatado pensar que el citado oficial era el propio Hugo Chávez Frías: como veremos en adelante, esa forma de citar al Libertador y a los hechos históricos no se diferencia en nada del hilarante expediente relatado.

Pero no nos salgamos del discurso inaugural de Chávez (o de los discursos, porque fueron varios). Sus referencias a la palabra del Libertador no se elevaron más arriba de los discursos celebratorios del 5 de julio de 1811 en las escuelas primarias. En primer lugar, cualquier palabra del Libertador es inapelable. Así, se cita allí sin mayores precisiones una expresión del Libertador según la cual la voluntad del pueblo soberano es absoluta.

Poco importa que lo haya dicho el Libertador o Perico el de los Palotes: la democracia no conoce de poderes absolutos. Pero hay en esa cita toda una proposición de lo que en adelante será la polí-

tica permanente de su gobierno. Cualquier arbitrariedad, y sobre todo, cualquier concentración del poder por medio de la eliminación o sumisión de los poderes contralores, será ratificada en comicios plebiscitarios y legitimada con alguna frase del Libertador, que son muchas, muy distintas y en ocasiones contradictorias, en veinte años de una vida pública muy intensa y variada, en diferentes escenarios.

Porque no es lo mismo el Bolívar radical de la Sociedad Patriótica, un jovenzuelo de 28 años, que el Bolívar dictador del Perú y luego de Colombia.

A este respecto, siempre está presente la certera afirmación de Gil Fortoul: para la revolución americana, Bolívar no murió en 1830, sino en 1828. Pero eso es impensable para quien tiene una visión de escuela primaria de la historia de Venezuela y del Bolívar convertido en Dios infalible por una historiografía mojigata, buscadora de una nueva religión con que fanatizar a unas masas como las venezolanas, poco dadas al fundamentalismo religioso.

En los discursos pronunciados en sus días inaugurales como presidente, Chávez repitió sus improvisaciones y con ellas sus disparates. Una de las más hilarantes, fue repetida más tarde cuando uno de sus secuaces, nombrado con ese propósito rector de una universidad experimental, le otorgó un doctorado *honoris causa*. Para afirmar su propia firmeza en sostener sus principios, hizo suya la frase de Henri IV: «París bien vale una misa»…¡que fue pronunciada para afirmar precisamente lo contrario!

El 5 de julio de 1999, pronuncia otro de sus disparatados discursos en el Palacio Legislativo. Como es normal en esas ocasiones, se refirió a los próceres que fundaron la república. Entre ellos citó a Miranda «que fue Mariscal de Francia». Miranda jamás ostentó semejante título, que se concede sólo a comandantes en jefe de ejércitos victoriosos en una guerra, no en batallas particulares: así Foch y Petain en la Gran Guerra, así Stalin y Tito, así, muy abusivamente, Juan Crisóstomo Falcón en nuestra Guerra Federal. Sucede que Miranda se incorporó al ejército francés como general y «mariscal de campo», que es más una atribución relativamente menor que una distinción honorífica.

Dos días más tarde, Chávez abrió otro discurso suyo con parte de una estrofa del «¡Oligarcas, temblad!». Dijo entonces: «El cielo encapotado –decía Zamora».

La estrofa citada, de un himno de autor anónimo, dice a la letra:

El cielo encapotado
anuncia tempestad,
y el sol de la victoria
alumbra en Santa Inés.

La batalla de Santa Inés, cantada en esa estrofa, tuvo lugar el 10 de diciembre de 1859; y la muerte de Zamora el 10 de enero de 1860, exactamente un mes después. Es entonces muy poco probable que Zamora hubiese podido conocer ese himno o por lo menos esa estrofa, y mucho menos que fuese su autor, pues hasta ahora nadie le ha conocido ese oficio de poeta.

No insistamos en esto, pues los ejemplos que se pueden extraer de una oratoria torrencial e incoherente harían inacabable este trabajo. Pero sí conviene hacer dos precisiones.

No se trata de simples gazapos, de los que nadie está exento, y mucho más un gobernante que debe hablar cada día, aunque Chávez exagere. Los gazapos se corrigen, y se trata de evitar el mismo error en otra ocasión; pero en este caso no es así, y el ejemplo de la cita de Henri IV es bastante claro: comete el disparate al hablar ante el Parlamento, y días después lo repite ¡ante un público de universitarios!

Lo cual demuestra, segunda precisión, una de dos cosas, o tal vez las dos juntas: que el presidente de la República no escucha los

consejos de sus asesores, o que esos asesores son tan ignorantes como su jefe.

II

La segunda parte de este trabajo estará dedicada a otro aspecto de la falsificación de la historia por el chavismo, y que podríamos situar a medio camino entre la falsificación producto de la megalomanía y del autoritarismo, y el intento de reescribir la historia no con propósitos clarificadores, sino con una vocación totalitaria, como veremos en la tercera parte.

Lo primero aparece en la glorificación del 4 de febrero de 1992 como una fecha procera. Ese día se produjo, como es bien conocido en Venezuela, un *putsch*, un cuartelazo como los tradicionales en la historia iberoamericana. Su preparación, que se había comenzado diez años antes, desembocó en una chambonada desde el punto de vista militar; y en esa fecha, fue particularmente triste el papel del teniente-coronel Hugo Chávez, cuya unidad fue la única que no disparó un solo tiro, y cuyo comandante se refugió en el Museo Militar, mientras sus subalternos dejaban sus tripas regadas en el pavimento.

Un error comunicacional del gobierno le permitió presentarse ante las cámaras llamando a rendirse, pero vestido con traje de combate y como si fuera el vencedor. Sobre esa base, Chávez ha recompuesto la historia para transformar esa derrota en una victoria, siguiendo el esquema de Hitler en 1923, tal como lo relatábamos al principio de estas páginas.

Pero ese es un pecado relativamente venial: nadie puede pretender que al rememorar un suceso, alguien vaya a mostrar una verdad que lo presente como un cobarde, como el famoso capitán Araña. A partir de allí, comienza un proceso de falsificación de la

historia a medio camino entre ese deseo de magnificar la propia acción y la intención totalitaria.

La primera, y acaso la más falaz de las versiones de la historia reciente dada por Chávez y sus secuaces, es la demonización de los «cuarenta años» de decadencia, de deterioro y ruina transcurridos entre 1958 y 1998. Esto encierra dos intenciones, una oculta y otra manifiesta. La primera se refiere a la fecha en que comienzan esos vituperados cuarenta años: 1958.

Lo sucedido en esa fecha, lo conocen bastante bien los venezolanos: una insurrección popular echó abajo la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Consecuencialmente, esa fecha señala el comienzo de la era de gobiernos civiles en Venezuela. Al señalar allí el comienzo de la decadencia venezolana, Chávez intenta matar dos pájaros de un tiro: descalificar a los gobiernos civiles (no uno o varios malos gobiernos, sino el principio mismo del gobierno civil); y por otra parte, presentar la dictadura de Pérez Jiménez como poco menos que la edad de oro de la república. Esto último no está totalmente oculto: en varias ocasiones, al hacer la comparación, Chávez ha exaltado aquella administración, e incluso, estuvo entre sus proyectos invitar al anciano dictador a su propia toma de posesión.

La verdad histórica es muy distinta. Esos cuarenta años han conocido una sucesión de gobiernos buenos, regulares y francamente malos, pero en su conjunto el balance es positivo: nunca en la historia de Venezuela tantos venezolanos habían vivido tan bien como en esos cuarenta años. Ésta no es una imagen idílica del período: a partir de 1977 (paradójicamente, después de haber recibido la mayor cantidad de ingresos de su historia gracias al aumento de los precios del petróleo), en Venezuela se produjo paulatinamente un proceso de empobrecimiento general, el mismo que conoció toda América Latina en la llamada «década perdida» de los ochenta, y posiblemente por las mismas razones. En un libro nues-

tro (*La gestación de Hugo Chávez*) hemos dividido ese período en dos partes: «El ascenso» (1958-1978) y «La caída» (1978-1998). Ese esquema es generalmente aceptado por todos los analistas calificados de la historia venezolana reciente.

En ocasiones, Chávez introduce extraños matices en su curiosa periodización de la historia reciente. En el ya citado discurso del 5 de julio de 1999, Chávez afirmó sin pestañear que «Venezuela cayó en la última parte de este siglo en una nueva situación de esclavitud». Se refiere a los «cuarenta años». La exageración suena mal hasta en un discurso arrabalero, mucho más en un Parlamento.

Pero a veces, nuestro historiador aficionado se permite ir más lejos, como al afirmar, en otro discurso, que todos los males de Venezuela habían comenzado el 18 de octubre de 1945 cuando «los adecos tumbaron a Medina».

En esa fecha, fue derrocado el presidente Isaías Medina Angarita. Pero decir que fue «tumbado por los adecos» es una mentira que no resiste el menor análisis. «Acción Democrática» no derrocó a Medina por la más simple de las razones: porque no tenía cómo. En cualquier parte del mundo, un gobierno es derrocado por la fuerza de las armas. Es cierto que AD se hizo cómplice del golpe militar que derrocó a Medina, pero ese derrocamiento no fue su obra sino de un grupo de oficiales jóvenes, cuyo dirigente era nada más ni nada menos que Marcos Pérez Jiménez.

Pero ese desastre no le podía ser atribuido por un Chávez que tanto ha demostrado admirarlo. Entonces, nada más fácil: en una maniobra de prestidigitación histórica, salva a Pérez Jiménez de la responsabilidad de aquel golpe militar, para echarlo exclusivamente en manos de unos «adecos» que en materia de armamento no tenían, ni entonces ni ahora, dónde caerse muertos.

Aquí también, los ejemplos harían interminables estas páginas. Citemos para terminar uno solo porque contiene de los tres ingredientes a que hemos hecho alusión: ignorancia de la historia,

megalomanía e intención de reescribir la historia para adaptarla a las conveniencias políticas del momento, e imponerla como ideología totalitaria.

Se trata del apelativo «Quinta República» que los chavistas han dado a su régimen. En verdad, esto surgió como una añagaza táctica muy del momento, y es sólo después de su utilización electoral que se le ha querido dar categoría de periodización histórica. La historia es ésta: Chávez había dado a su logia militar el nombre de «Movimiento Bolivariano Revolucionario-200», el último número por la supuesta cantidad de conjurados originales.

Pero cuando decidió abandonar sus iniciales tácticas abstencionistas, se encontró con un obstáculo: la ley electoral vigente entonces prohibía el uso de los símbolos patrios (entre ellos el nombre del Libertador) para identificar un partido o candidato. Entonces a alguien se le ocurrió cambiar, en las siglas del partido, la «b» de Bolívar por una «v», y así surgieron las siglas MVR. Pero no se podía bautizar un partido con una falta de ortografía y entonces, alguno de los secuaces menos agrestes de Chávez recordó lo de De Gaulle y su «Quinta República» y decidieron arrimarse a esa buena sombra.

Pero en el supuesto, bastante cuestionable, de que la «revolución» chavista fuese tal y anunciase la fundación de una nueva república, el disparate histórico permanecía en pie, pues en la historia venezolana anterior a 1998, no han existido cuatro, sino tres repúblicas venezolanas: la primera, de 1811 a 1812; la segunda, de 1813 a 1819; y la tercera, de 1830 hasta nuestros días. Entre 1819 y 1830 funcionó una entidad supranacional, la República de Colombia, que no puede ser numerada como república venezolana, por la sencilla razón de que ésta se constituyó *contrariando la voluntad del Libertador-Presidente de Colombia*.

III

Entremos ahora a la última parte de nuestra exposición: la reescritura de toda la historia venezolana para adaptarla a un dogma totalitario; y presentarla como un continuo de luchas y frustraciones que anunciaban al correr de los tiempos la llegada del salvador de Venezuela y posiblemente de América Latina, Hugo Chávez Frías. Para comenzar, hay que decir que durante mucho tiempo, fungió de asesor ideológico de Chávez un aventurero argentino llamado Norberto Ceresole.

Y aquí está presente una falsificación de la historia. Ceresole es un confeso antisemita –para ser más precisos, como él mismo lo aclara, antijudío– que se inscribe dentro de la corriente historiográfica autocalificada de «revisionista», que niega la verdad del Holocausto y atribuye su «invención» a quién sabe qué oscuro complot «judeo-norteamericano».

De la misma manera, ha llegado a ver las críticas que se le han hecho en Venezuela, incluso por ministros de Chávez, como producto de otro complot de la colonia judía en Venezuela.

Ése es el mentor de Chávez. Pero para quien se jacta de un nacionalismo trompetero, era necesario buscar raíces en la historia venezolana. Es así como al batiburrillo ideológico, mezcla de fascismo italiano con estalinismo, fidelismo y militarismo, se le bautizó «el árbol de las tres raíces»: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Cuando se anunció por primera vez esa trinidad ideológica, la caracterizamos en los siguientes términos:

> **«Siendo como eran los jefes del pronunciamiento absolutamente desconocidos incluso para buena cantidad de sus compañeros de armas, buscaron captar algunos reclutas prestigiosos. No podían ser militares, pues eso era aceptar a unos jefes a los cuales deseaban sustituir. Y tampoco civiles porque no se podía saber si, como todo el mundo, los eventuales escogidos guardaban algunos esqueletos en el armario. Se buscó entonces a tres personas que tenían muchas cualidades y ventajas, pero sobre todo el buen gusto de haberse muerto hace muchos años y de ser por tal insospechables de ambiciones personales ni de otra índole. Se escogieron tres: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez.**
>
> **¿Por qué tres y no, por ejemplo, diecinueve o setenta y cuatro? Nombres no faltan, en la innumerable población del otro mundo. Y si no se quería meter demasiada gente en el nuevo gobierno (así fuese gente muerta), ¿por qué no cuatro? Esta última cifra no es un capricho nuestro. Las acciones –e incluso el plomo cerrado– comenzaron antes de la medianoche. O sea el 3 de febrero. Y da la curiosa casualidad que ésa es la fecha de nacimiento del Mariscal Antonio José de Sucre. Nada costaba proponer así cuatro, y no sólo tres genios tutelares.**
>
> **En efecto, ¿por qué no también Sucre? La del Gran Mariscal de Ayacucho es una memoria muy respetada por todos ellos, y además, el héroe tiene la inmensa ventaja de haber muerto joven y buenmozo, y asesinado cobardemente. Había además esa coincidencia de fechas. A Sucre no se le excluyó entonces del Olimpo de los bolivarianos porque le faltasen cualidades, sino porque su propia persona sobraba. Esto sólo puede entenderse al comprender también la condición, casi podría decirse la textura, del patriotismo de quienes se alzaron el 3 (no el 4) de febrero: no es una ideología laica, sino una religión. Y como en toda religión sustitutiva, quedan en el trasfondo de la mente, escondidos en lo más profundo de la conciencia, los restos de la antigua. Esa especie de sincretismo imponía que los dioses reconocidos no pasasen de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se eliminó a Sucre».**

Ese argumento conserva su plena vigencia. En adelante, lo que se ha hecho es maquillar la historia para hacerla entrar bajo la

corteza de ese «árbol de las tres raíces». Para ello, se trata sobre todo de una labor de ocultamiento o deformación del pensamiento y la acción de esos tres hombres, para que entren cómodos en la camisola de la ideología chavista. Lo malo es que esa historia así deformada se quiere ahora imponer como obligatoria, por medio de una supuesta reforma de la educación, planteada abiertamente como un instrumento para crear mentes adictas «al proceso», como llaman ellos a lo que en tiempos del general Gómez se llamaba «la Causa».

Lo más fácil ha sido hacer eso con la figura del Libertador, pues buena parte del camino ya estaba andado: generación tras generación de gobernantes y de historiadores han trabajado para transformar la de Bolívar en una figura mítica, con caracteres fundacionales no de una nación, sino de una cultura y quién sabe, también de una nueva religión. La filosofía del régimen en relación con el culto bolivariano quedó establecida cuando al recibir a Chávez para ser investido como presidente de la República, uno de sus secuaces más cercanos, el coronel Luis Alfonso Dávila, a la sazón presidente del Congreso, llamó a Bolívar «nuestro padre infinito». O sea, muy exactamente Dios Padre Todopoderoso.

Sobre esas bases, la labor del chavismo se ha limitado a ocultar algunos aspectos de su vida y de su pensamiento que puedan resultar incómodos al nuevo gobernante. Daremos un solo ejemplo, pero que vale por todos. Hay un párrafo del Discurso de Angostura que Chávez evade cada vez que se le hace la pregunta, como nos sucedió en un programa de televisión. Bolívar dijo, a la letra:

> ...«nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer, y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía».

Sólo cuatro gobernantes, en toda la historia de la Tercera República venezolana, se han atrevido a proponer la reelección presidencial desoyendo esta advertencia del Libertador: José Tadeo Monagas, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez Frías.

Cuando le preguntamos cómo se sentía en tales compañías, se negó a responder: se limitó a descalificarnos llamándonos «expertos» (cosa que por lo visto él considera un insulto) y luego balbuceó la excusa preferida de los marxistas estalinianos: el «contexto».

Por otra parte, Bolívar, en el discurso chavista, fue una víctima de la «oligarquía» criolla pero sobre todo bogotana. Por supuesto se esconde que, siendo como era en sus inicios el hombre más rico de Venezuela, a Bolívar mismo le cuadraba muy bien el calificativo social de oligarca, como a casi todos los que fundaron la república.

Y que, por cierto, fueron barridos por «la chusma» (como llama orgullosamente Chávez a ese pueblo que él pretende encarnar) que se fue tras las banderas del rey, de la religión y de Boves. Y olvidan o esconden también que en la Nueva Granada, al Libertador-Presidente se le opuso la juventud liberal: el Bolívar dictador es considerado allí como el fundador del conservatismo, partido oligarca si los hay.

Ese tema del combate contra la oligarquía ha servido para mitificar, en el discurso chavista, la figura de Ezequiel Zamora. En verdad, quien inventó el término fue Antonio Leocadio Guzmán, quien socialmente podía considerarse un oligarca. El fundador del Partido Liberal lo empleó en los años cuarenta para referirse a Páez, el hegemón de la Tercera República.

Era pues una designación política: con ello se designaba a los conservadores para oponerlos a los «pobres» que se suponía eran los liberales, aunque ello fuese falso en lo que concernía a los fundadores de ese partido.

Para Chávez también, «oligarca» es todo aquel que se le oponga políticamente. En los últimos tiempos, ha buscado por todos los

medios hacer sinónimos los términos «oligarca» y «propietario». Pero para hacerlo, ha tenido que falsear sin vergüenza la historia. Como cuando afirma que «Zamora fue maltratado por la oligarquía» tal y como los propietarios de los medios de comunicación que no le son incondicionales lo estarían «maltratando» a él. Al decir eso, Chávez oculta deliberadamente el hecho de que, si se acepta aquella sinonimia, Ezequiel Zamora debería ser considerado un oligarca, puesto que no sólo llegó a ser propietario de esclavos, sino a pelearse por ser indemnizado cuando la abolición en 1854.

En cuanto a Simón Rodríguez, igual cosa. Pese a que tenía muchos méritos, se le considera «maestro» sólo porque lo fue del Libertador, y para completar la trinidad chavista. Pero nunca se atreven Chávez ni los suyos a citar una de las frases más lapidarias de aquel extraordinario republicano: «No hai cosa más patriota que un tonto». El patriotismo trompetero de la Quinta República no lo soportaría.

* * *

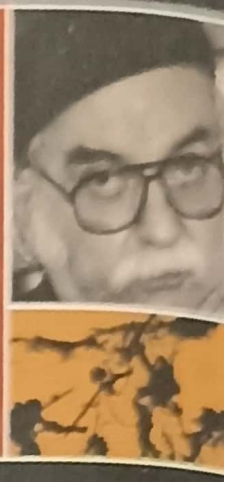
Terminaremos estas notas adelantando algunas conclusiones. La primera y más general es que todo gobierno, y en particular si se está estrenando, tiene tendencia a maquillar la historia, si no a falsificarla completamente, sobre todo en lo referente al pasado reciente, siguiendo la máxima, común en Venezuela, de echar las culpas de todo lo malo que sucede al gobierno anterior.

En segundo lugar, en los regímenes autoritarios esa tendencia es más marcada, en general para complacer la megalomanía del hegemón de turno. Pero es en los regímenes totalitarios donde es más pronunciada: lo que se busca es reescribir enteramente la historia para hacerla entrar en un esquema preconcebido, que la haga calzar, y en cierta manera obedecer, menos a la verdad histórica que a la conveniencia de la ideología totalitaria.

En el caso venezolano, parece estarse asistiendo al paso del simple maquillaje de la historia, para justificar la acción presente y complacer la megalomanía del gobernante, a una reescritura total de la historia, típica de los totalitarismos.

Este libro se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2002
en los Talleres de Editorial Melvin,
Caracas, Venezuela

Revolución, reacción y falsificación



MANUEL CABALLERO

Pese a tratar un amplio abanico de temas, este libro no es una simple y aparente colección de ensayos. Los une una clara concepción de la historia política que nada tiene que hacer con la tradicional, narrativa, patriótica y personalista: es lo que el mismo autor denomina «historia de lo político».

Se analizan aquí problemas tan diversos como el concepto de la reacción y revolución en la historia venezolana, la manía «constituyente» que pretende refundar la república a cada cambio de gobierno; la falsa idea de la violencia como partera de la historia, y algunas reflexiones sobre el llamado fin de los partidos y de las ideologías.

Se tratan además temas como el de Miranda, «general francés de origen venezolano», y la invasión de «los Sesenta» hace un siglo. Pero la mayoría de estos textos están referidos a la historia contemporánea, como el extenso ensayo que remata el libro, sobre la falsificación de la historia como arma totalitaria.

ISBN 980-354-109-9

9 789803 541095

ALFADIL EDICIONES